



CÓDIGO DE FAMILIA Y LEY PROCESAL DE FAMILIA 2025



CÓDIGO DE FAMILIA Y LEY PROCESAL DE FAMILIA 2025

Revisión:

Mtra. Karla Milady Romero de Castro,
Coordinadora del Área de Derecho de Familia, RAC,
Niñez y Adolescencia, ECJ-CNJ.

Licda. Bessy Jeannette Aguirre de Flores
Coordinadora del Área de Justicia Penal Juvenil
y Técnicas de Oralidad, ECJ-CNJ.

Consejo Nacional de la Judicatura

Final Calle Los Abetos, #8, Colonia San Francisco,
San Salvador, El Salvador.
Teléfonos: (503) 2245-2449, 2245-5260 y 2245-4491.

1a edición digital: 2025

Diseño, diagramación:
Imagen Gráfica El Salvador, S.A de C.V.



PLENO



Presidente

Lic. Miguel Angel Calero Angel

Consejales en propiedad

Lic. Santos Guerra Grijalba

Mtro. Alcides Salvador Funes Teos

Licda. Doris Deysi Castillo de Escobar

Dr. Luis Alonso Ramírez Menéndez

Mtra. Verónica Lissette González Penado

Lic. Carlos Wilfredo García Amaya

Escuela de Capacitación Judicial "Dr. Arturo Zeledón Castrillo"

Director en funciones y Subdirector interino
Mtro. Miguel Ángel Alberto Robles Lucero

ÍNDICE

Código de Familia	9
Ley Procesal de Familia.....	105

CÓDIGO DE FAMILIA



DECRETO No. 677.-

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

- I.- Que el artículo 32 de la Constitución de la República, reconoce a la familia como la base fundamental de la sociedad e impone el deber de dictar la legislación necesaria para su protección, integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico;
- II.- Que de acuerdo con el artículo 271 de la misma, es un deber impostergable armonizar especialmente con sus preceptos la legislación secundaria, siendo evidente que esa concordancia es especialmente necesaria e indispensable en materia familiar, por tratarse de una regulación contenida en el Código Civil que data del año de 1860;
- III.- Que asimismo resulta ser una obligación que no puede diferirse, armonizar la legislación interna en materia familiar y de menores, con la contenida en los tratados y convenciones internacionales ratificados, constitucionalmente de mayor jerarquía que la primera, a fin de evitar la posibilidad de la concurrencia de normas distintas sobre una misma materia, con perjuicio de la seguridad y certeza jurídicas; y
- IV.- Que es conveniente regular especialmente en la materia familiar, la referente a menores y a las personas ADULTAS MAYORES, con la salvedad del régimen jurídico especial de los menores a que se refiere el artículo 35 de la Constitución de la República;(5)

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Justicia y de los Diputados Raúl Manuel Somoza Alfaro y Marcos Alfredo Valladares Melgar,

DECRETA: el siguiente,

CÓDIGO DE FAMILIA

TÍTULO PRELIMINAR

OBJETO DEL CÓDIGO

Art. 1.- El presente código establece el régimen jurídico de la familia, de los menores y de las personas ADULTAS MAYORES y consecuentemente, regula las relaciones de sus miembros y de éstos con la sociedad y con las entidades estatales. (5)

Los derechos y deberes regulados por este Código, no excluyen los que conceden e imponen otras leyes en materias especiales y la solidaridad familiar.

CONCEPTO DE FAMILIA

Art. 2.- La familia es el grupo social permanente, constituido por el matrimonio, la unión no matrimonial o el parentesco.

PROTECCIÓN DE LA FAMILIA

Art. 3.- El Estado está obligado a proteger a la familia, procurando su integración, bienestar, desarrollo social, cultural y económico.

PRINCIPIOS RECTORES

Art. 4.- La unidad de la familia, la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, la igualdad de derechos de los hijos, la protección integral de los menores y demás incapaces, de las personas ADULTAS MAYORES y de la madre cuando fuere la única responsable del hogar, son los principios que especialmente inspiran las disposiciones del presente código. **(5)**

IRRENUNCIABILIDAD E INDELEGABILIDAD

Art. 5.- Los derechos establecidos por este Código son irrenunciables, salvo las excepciones legales, y los deberes que impone, indelegables; cualquier declaración en contrario se tendrá por no escrita.

DERECHO A CONSTITUIR FAMILIA

Art. 6.- Toda persona tiene derecho a constituir su propia familia, de conformidad con la ley.

FOMENTO DEL MATRIMONIO

Art. 7.- El Estado fomentará el matrimonio. Las acciones que con tal finalidad realice, serán coordinadas por medio de la Procuraduría General de la República; se orientarán a la creación de bases firmes para la estabilidad del matrimonio y el más efectivo cumplimiento de los deberes familiares.

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN

Art. 8.- La interpretación y aplicación de las disposiciones de este Código deberán hacerse en armonía con sus principios rectores y con los principios generales del Derecho de Familia, en la forma que mejor garantice la eficacia de los derechos establecidos en la Constitución de la República y en los tratados y convenciones internacionales ratificados por El Salvador.

INTEGRACIÓN

Art. 9.- Los casos no previstos en el presente Código se resolverán con base en lo dispuesto por el mismo para situaciones análogas; cuando no sea posible determinar de tal manera el derecho aplicable, podrá recurrirse a lo dispuesto en otras leyes, pero atendiendo siempre a la naturaleza del Derecho de Familia; en defecto de éstas, el asunto se resolverá considerando los principios del Derecho Familiar y a falta de éstos, en razones de buen sentido y equidad.

EXTRATERRITORIALIDAD

Art. 10.- El nacional, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero, queda sujeto a las disposiciones de este Código, en lo relativo al estado de las personas y a las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia.

Los menores y las personas ADULTAS MAYORES, de nacionalidad salvadoreña, que residan en el extranjero, también estarán sujetos a lo regulado en este código en cuanto a su protección y asistencia. (5)

LIBRO PRIMERO CONSTITUCIÓN DE LA FAMILIA

TÍTULO I EL MATRIMONIO

CAPÍTULO I CONSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO

CONCEPTO DE MATRIMONIO

Art. 11.- El matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer, con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida.

CONSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO

Art. 12.- El matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes, expresado ante el funcionario autorizado, celebrado en la forma y con los demás requisitos establecidos en este Código; se entiende contraído para toda la vida de los contrayentes y surte efectos desde su celebración.

FUNCIONARIOS AUTORIZADOS

Art. 13.- Los funcionarios facultados para autorizar matrimonios dentro de todo el territorio nacional son el Procurador General de la República y los notarios; y

dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales lo son los Gobernadores Políticos Departamentales, los Alcaldes Municipales y los Procuradores Auxiliares Departamentales.

Los Jefes de Misión Diplomática Permanente y los Cónsules de Carrera en el lugar donde estén acreditados, podrán autorizar matrimonios entre salvadoreños, sujetándose en todo a lo dispuesto en el presente Código.

CAPÍTULO II IMPEDIMENTOS Y REGLAS ESPECIALES PARA CONTRAER MATRIMONIO

IMPEDIMENTOS ABSOLUTOS

Art. 14.- No podrán contraer matrimonio:

- 1º) Los menores de dieciocho años de edad;
- 2º) Los ligados por vínculo matrimonial; y,
- 3º) Los que no se hallaren en el pleno uso de su razón y los que no puedan expresar su consentimiento de manera inequívoca.

INCISO DEROGADO. (17)

IMPEDIMENTOS RELATIVOS

Art. 15.- No podrán contraer matrimonio entre sí:

- 1º) Los parientes por consanguinidad en cualquier grado de la línea recta ni los hermanos;
- 2º) El adoptante y su cónyuge con el adoptado o con algún descendiente de éste; el adoptado con los ascendientes o descendientes del adoptante, o con los hijos adoptivos del mismo adoptante; y
- 3º) El condenado como autor o cómplice del homicidio doloso del cónyuge del otro. Si estuviere pendiente juicio por el delito mencionado, no se procederá a la celebración del matrimonio hasta que se pronuncie sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo.

REGLA ESPECIAL PARA EL TUTOR

Art. 16.- Los tutores no podrán contraer matrimonio con sus pupilos, mientras las cuentas de su administración no hubieren sido aprobadas judicialmente y pagado el saldo que resultare en su contra. Esta prohibición se extiende a los ascendientes, descendientes y hermanos de los guardadores.

Los tutores que infringieren esta prohibición o permitieren que se infrinja, perderán la remuneración a que tienen derecho, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrieren en el desempeño del cargo.

REGLA ESPECIAL EN CASO DE NUEVO MATRIMONIO

Art. 17.- La mujer cuyo matrimonio ha sido disuelto o anulado, podrá contraer nuevas nupcias, inmediatamente que quede ejecutoriada la sentencia respectiva, siempre que comprobe que no está embarazada.

Con todo, lo establecido en este artículo no será aplicable cuando los cónyuges hubieren estado separados por más de trescientos días o se haya decretado el divorcio por separación absoluta.

REGLA ESPECIAL PARA LOS MENORES

Art. 18.- DEROGADO. (17)

CAUSAS QUE JUSTIFICAN EL DISENSO

Art. 19.- DEROGADO. (17)

SANCIÓN

Art. 20.- EL MATRIMONIO CELEBRADO EN CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DE ESTE CÓDIGO, HARÁ INCURRIR AL FUNCIONARIO AUTORIZANTE EN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LAS LEYES DE LA MATERIA. (17)

CUANDO LA CONTRAVENCIÓN FUERE ATRIBUIDA AL NOTARIO O AL CONTRAYENTE, LA MULTA SERÁ HASTA DE UN MIL COLONES, QUE IMPONDRÁ EL JUEZ AL TENER CONOCIMIENTO DE LA INFRACCIÓN. (17)

CAPÍTULO III CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

ACTA PREMATRIMONIAL

Art. 21.- LAS PERSONAS QUE PRETENDAN CONTRAER MATRIMONIO LO MANIFESTARÁN AL FUNCIONARIO AUTORIZADO, QUIEN PREVIA LECTURA Y EXPLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 11, 12, 14, 15, 16, 17, 41, 42, 48, 51 Y 62 DE ESTE CÓDIGO LES RECIBIRÁ EN ACTA, DECLARACIÓN JURADA SOBRE SU INTENCIÓN DE CONTRAERLO Y QUE NO TIENEN IMPEDIMENTOS LEGALES NI ESTÁN SUJETOS A PROHIBICIÓN ALGUNA. (17)

En dicha acta se consignarán el nombre, edad, estado familiar, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio o lugar de nacimiento de cada uno de los contrayentes, así como el nombre, profesión u oficio y domicilio de sus padres, el régimen patrimonial si ya lo hubieren acordado, el apellido que usará la mujer al casarse, y en su caso, los nombres de los hijos que reconocerán en el acto de matrimonio.

Los solicitantes presentarán sus documentos de identidad y las certificaciones de sus partidas de nacimiento, las cuales deberán haber sido expedidas dentro de los dos meses anteriores a la petición, agregándose las últimas al expediente matrimonial, que se inicia con el acta indicada.

IDENTIFICACIÓN Y COMPARECENCIA DE MENORES

Art. 22.- DEROGADO. (17)

DOCUMENTOS ESPECIALES

Art. 23.- Los interesados, en sus respectivos casos, también deberán presentar para ser agregados al expediente matrimonial, los documentos siguientes:

- 1º) El instrumento legal en que conste su edad media;
- 2º) Certificación de la partida de defunción de quien fue su cónyuge;
- 3º) Certificación de la partida de divorcio o de la sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio;
- 4º) Certificación de las partidas de nacimiento de los hijos comunes que reconocerán;
- 5º) CONSTANCIA MÉDICA EXTENDIDA POR UNA ENTIDAD PÚBLICA DE SALUD CON LA QUE SE COMPRUEBE QUE LA MUJER QUE VA A CONTRAER NUEVAS NUPCIAS NO ESTÁ EMBARAZADA, SI SE ENCONTRARE EN EL CASO DEL ARTÍCULO 17; **(17)**
- 6º) Certificación de la sentencia ejecutoriada que apruebe las cuentas del guardador y en su caso, el recibo donde conste auténticamente el pago del saldo que hubiere resultado en su contra; y,
- 7º) Documento legalizado donde conste el poder especial para contraer matrimonio.

SEÑALAMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN

Art. 24.- Cerciorado el funcionario autorizante de la aptitud legal de los contrayentes y que no se contraviene prohibición alguna, procederá de

inmediato a la celebración del matrimonio o acordará con los interesados el lugar, día y hora para ello, de lo que dejará constancia en el acta prematrimonial.

Todos los días y horas son hábiles para la celebración del matrimonio.

DENUNCIA DE IMPEDIMENTOS

Art. 25.- Si cualquier persona denunciare algún impedimento legal o prohibición para contraer matrimonio, el funcionario autorizante no procederá a su celebración y con noticia de los interesados remitirá el expediente matrimonial al juez, a fin de que resuelva sobre la denuncia.

TESTIGOS Y SECRETARIO

Art. 26.- El matrimonio se celebrará con la concurrencia de por lo menos dos testigos mayores de dieciocho años, que sepan leer y escribir el idioma castellano y que conozcan a los contrayentes.

No podrán ser testigos del matrimonio los dementes, los ciegos, los sordos, los condenados por delitos de falsedad, contra el patrimonio, o contra los bienes jurídicos de la familia, no rehabilitados, ni los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por adopción de alguno de los contrayentes o del funcionario autorizante.

El Procurador General de la República, los Gobernadores Políticos Departamentales, los Alcaldes Municipales y los Procuradores Auxiliares Departamentales, actuarán con su respectivo Secretario.

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

Art. 27.- El acto de la celebración del matrimonio será público y el funcionario autorizante cuidará de darle la solemnidad que el mismo requiere. Comenzará por hacer saber a los contrayentes y testigos el objeto de la reunión, hará mención especial de la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, de su responsabilidad para con los hijos, y exhortará a los contrayentes a conservar la unidad de la familia. Acto continuo dará lectura a los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 36 y 39.

Cumplidas las formalidades anteriores y llamando a cada uno de los contrayentes por su nombre, le preguntará si quiere unirse en matrimonio con el otro; a lo que el interrogado contestará "SÍ, QUIERO". Recibido el consentimiento de ambos contrayentes, el funcionario autorizante les dirigirá las siguientes palabras: "EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA, QUEDAN UNIDOS SOLEMNEMENTE EN MATRIMONIO Y ESTAN OBLIGADOS A GUARDARSE FIDELIDAD Y ASISTIRSE MUTUAMENTE EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA", con el cual terminará el acto.

INSTRUMENTO DE MATRIMONIO

Art. 28.- Todo lo actuado de conformidad al artículo anterior, se consignará inmediatamente en el Libro de Actas Matrimoniales que llevarán los funcionarios autorizantes o en la escritura que formalizará el notario; instrumentos que deberán firmarse por los cónyuges, los testigos, el funcionario autorizante y el secretario respectivo, en su caso el intérprete si lo hubiere.

En el instrumento matrimonial se hará constar el régimen patrimonial que se hubiere acordado o a falta de acuerdo sobre el mismo, el que se aplicará como supletorio; el apellido que usará la mujer; y el reconocimiento de los hijos procreados en común.

ACTOS QUE SIGUEN A LA CELEBRACIÓN

Art. 29.- El funcionario deberá entregar a los contrayentes certificación del acta y el notario testimonio de la escritura, y pondrá en los documentos de identidad personal de aquéllos una razón firmada y sellada, en la que conste que han contraído matrimonio, el nombre de la persona con quien se contrajo, y el lugar y fecha de su celebración.

Una certificación del acta de matrimonio o de la escritura respectiva se agregará al expediente matrimonial.

Dentro de los quince días hábiles siguientes a la celebración del matrimonio, el funcionario autorizante deberá remitir al encargado del Registro del Estado Familiar del lugar en que se celebró aquél, si él mismo no lo fuere, certificación del acta o testimonio de la escritura, para que asiente de inmediato la partida de matrimonio, inscriba el régimen patrimonial que se hubiere acordado o el que legalmente corresponde en su caso y haga las anotaciones marginales correspondientes si allí se encuentran asentadas las partidas de nacimiento de los contrayentes. Si estuvieren asentadas en otro lugar, deberá remitir dentro del mismo plazo al correspondiente encargado del Registro del Estado Familiar, otra certificación o testimonio para que practique la anotación marginal.

Si se hubiere reconocido hijos, el funcionario autorizante, en el mismo plazo señalado en el inciso anterior, deberá remitir al encargado del Registro del Estado Familiar del lugar en que se encuentran asentadas las partidas de nacimiento de aquéllos, certificación o testimonio, para que se proceda de conformidad a la Ley del Nombre de la Persona Natural.

MATRIMONIO POR PODER

Art. 30.- El matrimonio podrá celebrarse por medio de apoderado con poder especial, otorgado en escritura pública o en otro instrumento auténtico, de acuerdo a la ley del lugar del otorgamiento, en que se expresará el nombre, nacionalidad,

estado familiar, profesión u oficio, domicilio o residencia, lugar de nacimiento del otro contrayente y cualquier otro dato que contribuya a su plena identificación. También deberán expresarse las generales del apoderado.

El poder para contraer matrimonio, también se entenderá conferido para otorgar el acta prematrimonial, prestar el juramento que en ella se consigna y, en general, para realizar cualquier otro acto o trámite que se requiera para celebrarlo. Para optar por el régimen patrimonial, determinar el apellido que usará la mujer y reconocer hijos, se requerirá de cláusula especial.

VIGENCIA, REVOCATORIA Y DESISTIMIENTO

Art. 31.- El poder para contraer matrimonio tendrá vigencia por tres meses contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

La revocatoria del poder y el desistimiento del poderdante de su intención de casarse, surtirán efecto desde que se expresen en forma auténtica.

MATRIMONIO EN ARTICULO MORTIS

Art. 32.- Podrá procederse a la celebración del matrimonio sin que se presenten las certificaciones a que se refiere el inciso tercero del artículo 21 o los documentos enumerados en el artículo 23, del que se halla en inminente peligro de muerte, siempre que no exista ningún impedimento ostensible que lo haga ilegal y que se exprese claramente el consentimiento de los contrayentes. En la escritura o acta respectiva se hará constar la circunstancia de haberse celebrado el matrimonio en inminente peligro de muerte.

CONTRAYENTES QUE NO SE EXPRESAN EN CASTELLANO

Art. 33.- Cuando alguno de los contrayentes no comprendiere el idioma castellano, se asistirá de intérprete para la celebración del matrimonio y para los actos previos a la misma, y el funcionario consignará lo que exprese en castellano el intérprete. Si el funcionario y los testigos entienden el idioma del contrayente, podrá prescindirse del intérprete a no ser que el contrayente prefiera que lo haya. En todo caso, el contrayente formulará en su propio idioma una minuta de lo que exprese al funcionario, la traducirá éste o el intérprete en su caso.

Si uno de los contrayentes sólo pudiere darse a entender por lenguaje especializado, deberá intervenir, para asistirlo en cada uno de los actos mencionados, una persona que lo entienda, y la interpretación de lo que exprese el contrayente, deberá consignarla bajo juramento en una minuta.

Las traducciones y minutas se agregarán al expediente matrimonial, debiendo ser firmadas por el funcionario, el contrayente y el intérprete, si lo hubiere.

GRATUIDAD Y EXENCIÓN

Art. 34.- Todas las diligencias, certificaciones y testimonios relativos al matrimonio no causarán ningún gravamen.

Los funcionarios autorizantes no devengarán emolumentos por los matrimonios que celebren, ni por las diligencias que deban practicar, salvo lo dispuesto por leyes especiales.

Los notarios podrán devengar honorarios convencionales.

SANCIÓN

Art. 35.- Los funcionarios que sin justo motivo se negaren a celebrar un matrimonio o retardaren su celebración, incurrirán en las sanciones establecidas en la ley de la Materia.

TÍTULO II RELACIONES PERSONALES Y PATRIMONIALES ENTRE LOS CÓNYUGES

CAPÍTULO I RELACIONES PERSONALES

IGUALDAD DE DERECHOS Y DEBERES

Art. 36.- Los cónyuges tienen iguales derechos y deberes; y por la comunidad de vida que entre ellos se establece, deben vivir juntos, guardarse fidelidad, asistirse en toda circunstancia, y tratarse con respeto, tolerancia y consideración.

No se infringe el deber que tienen los cónyuges de vivir juntos, cuando tuvieren que separarse para evitar graves perjuicios para cualquiera de ellos o para los hijos, o cuando por cualesquiera circunstancias especiales que redunden en beneficio de los intereses de la familia, calificados de común acuerdo, uno de los cónyuges tuviere que residir temporalmente fuera de la residencia común.

RESIDENCIA Y DEMÁS ASUNTOS DOMÉSTICOS

Art. 37.- Los cónyuges fijarán conjuntamente el lugar de su residencia y regularán de común acuerdo todos los asuntos domésticos.

GASTOS DE LA FAMILIA

Art. 38.- Los cónyuges deben sufragar en proporción a sus recursos económicos, los gastos de la familia. Si uno de ellos no tuviere bienes ni gozare de emolumento alguno, el desempeño del trabajo del hogar o el cuidado de los hijos se estimará

como su contribución a tales gastos, con el mismo significado que las aportaciones del otro.

Si alguno de los cónyuges, por incumplimiento del otro se hubiere visto obligado a contraer deudas para sufragar los gastos de la familia, éste será solidariamente responsable de su pago. El juez, en este caso podrá moderar la cuantía de los gastos, atendiendo a las condiciones de vida de la familia y a la razonabilidad de los mismos.

COOPERACIÓN

Art. 39.- Ninguno de los cónyuges podrá limitar el derecho del otro a desempeñar actividades lícitas o a emprender estudios o perfeccionar conocimientos, y para ello deben prestarse cooperación y ayuda, cuidando de organizar la vida en el hogar, de modo que tales actividades, perfeccionamiento o estudios no impidan el cumplimiento de los deberes que este Código les impone.

El trabajo del hogar y el cuidado de los hijos, serán responsabilidad de ambos cónyuges.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

CONCEPTO

Art. 40.- Las normas que regulan las relaciones económicas de los cónyuges entre sí y con terceros, constituyen el régimen patrimonial del matrimonio.

CLASES DE REGÍMENES

Art. 41.- Los regímenes patrimoniales que este Código establece son:

- 1º) Separación de bienes;
- 2º) Participación en las ganancias; y,
- 3º) Comunidad diferida.

OPCIÓN DEL RÉGIMEN

Art. 42.- Los contrayentes, antes de la celebración del matrimonio, podrán optar por cualesquiera de los regímenes patrimoniales mencionados en el artículo anterior o formular otro distinto que no contraríe las disposiciones del presente Código. Si no lo hicieren, quedarán sujetos al de comunidad diferida.

EFICACIA DEL RÉGIMEN

Art. 43.- El régimen patrimonial producirá efectos entre los contrayentes inmediatamente después de celebrado el matrimonio o desde que se otorgan las capitulaciones, y frente a terceros, desde su correspondiente inscripción.

MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN

Art. 44.- Los cónyuges podrán de común acuerdo, y en cualquier tiempo, modificar o sustituir el régimen que hubieren adoptado, así como el supletorio, previo el trámite de disolución y liquidación del régimen existente, cuando sea del caso, el cual surtirá efecto entre los cónyuges desde que se modifique o se sustituya, y frente a terceros desde su inscripción.

DISOLUCIÓN DEL RÉGIMEN

Art. 45.- El régimen patrimonial del matrimonio se disuelve por la declaración de nulidad o la disolución de éste, por declaración judicial o por convenio entre los cónyuges. Surtirá efecto entre los cónyuges inmediatamente y frente a terceros desde su inscripción.

PROTECCIÓN A LA VIVIENDA FAMILIAR (12)

Art. 46.- LOS CÓNYUGES, CUALQUIERA QUE SEA EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO, PODRÁN CONSTITUIR EL DERECHO DE HABITACIÓN PARA EL GRUPO FAMILIAR EN UN DETERMINADO INMUEBLE, O EN UNA PARTE DEL MISMO, SI FUERE DE FÁCIL DIVISIÓN. LA ENAJENACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE DERECHOS REALES O PERSONALES SOBRE EL INMUEBLE QUE SIRVE DE HABITACIÓN A LA FAMILIA NECESITA DEL CONSENTIMIENTO DE AMBOS CÓNYUGES, Y SE PODRÁ REALIZAR SIEMPRE Y CUANDO BENEFICIE DIRECTAMENTE AL GRUPO FAMILIAR, SO PENA DE NULIDAD. **(12)**

EL DERECHO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, PODRÁ CONSTITUIRSE EN ESCRITURA PÚBLICA, O EN ACTA ANTE EL O LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LAS O LOS PROCURADORES AUXILIARES QUE AQUÉLLA DELEGARE, LAS O LOS JUECES DE FAMILIA Y DE PAZ. LOS REFERIDOS INSTRUMENTOS DEBERÁN SER INSCRITOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS. **(12)**

SI EL INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR, ESTUVIERE GRAVADO, LA CONSTITUCIÓN DEL DERECHO DE HABITACIÓN SURTIRÁ SUS EFECTOS, PERO SE RESPETARÁN LOS DERECHOS Y PRIVILEGIOS DERIVADOS DE LOS ALUDIDOS GRAVÁMENES QUE AFECTEN EL INMUEBLE, SIEMPRE QUE HABIÉNDOSE CUMPLIDO LO PREVISTO EN EL INCISO PRIMERO DE ESTE ARTÍCULO, EL INSTRUMENTO DONDE CONSTE EL GRAVAMEN, SE HUBIERE

INSCRITO O ESTUVIERE PRESENTADO PARA ESE EFECTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS CORRESPONDIENTE, INCLUSIVE CUANDO SE TRATE DE UNA ANOTACIÓN PREVENTIVA. LA SUSTITUCIÓN DEL INMUEBLE AFECTADO TAMBIÉN DEBERÁ EFECTUARSE POR MUTUO ACUERDO DE LOS CÓNYUGES Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL PRESENTE ARTÍCULO. **(12)**

CUANDO NO PUDIERE OBTENERSE EL CONSENTIMIENTO DE UNO DE LOS CÓNYUGES, LA O EL JUEZ A PETICIÓN DEL OTRO U OTRA, PODRÁ AUTORIZAR LA DESTINACIÓN, LA ENAJENACIÓN, LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS REALES O PERSONALES O LA SUSTITUCIÓN, SEGÚN SEA EL CASO, ATENDIENDO AL INTERÉS DEL GRUPO FAMILIAR. **(12)**

MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTERIOR

Art. 47.- Los cónyuges que celebren su matrimonio en el exterior y que establezcan su domicilio en El Salvador o tengan bienes en el país, podrán optar por cualesquiera de los regímenes patrimoniales establecidos en este Código u otro distinto, siempre que no contravenga las leyes salvadoreñas.

SECCIÓN SEGUNDA RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES

CARACTERÍSTICAS

Art. 48.- En el régimen de separación de bienes cada cónyuge conserva la propiedad, la administración y la libre disposición de los bienes que tuviere al contraer matrimonio, de los que adquiera durante él a cualquier título y de los frutos de unos y otros, salvo lo dispuesto en el artículo 46.

CASOS DE SEPARACIÓN

Art. 49.- Habrá separación de bienes:

- 1º) Cuando los cónyuges hubieren optado por este régimen; y,
- 2º) Cuando se decretare judicialmente la disolución del régimen de participación en las ganancias, la disolución de la comunidad diferida o de cualquier otro régimen de comunidad, y los cónyuges no hubieren optado por otro régimen.

PRESUNCIÓN DE COPROPIEDAD

Art. 50.- En caso de no poderse comprobar a cuál de los cónyuges pertenece algún bien, se presumirá que ellos son copropietarios por partes iguales.

SECCIÓN TERCERA

RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN LAS GANANCIAS

CARACTERÍSTICAS

Art. 51.- En el régimen de participación, cada uno de los cónyuges adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas por su cónyuge, durante el tiempo en que dicho régimen haya estado vigente.

ADMINISTRACIÓN

Art. 52.- A cada cónyuge le corresponde la administración, el disfrute y la libre disposición tanto de los bienes que le pertenecían en el momento de contraer matrimonio, como de lo que pueda adquirir después por cualquier título.

PROINDIVISIÓN

Art. 53.- Si los cónyuges adquirieren conjuntamente algún bien, les pertenecerá según las reglas de la proindivisión.

DISOLUCIÓN JUDICIAL

Art. 54.- Podrá pedirse por uno de los cónyuges la disolución judicial del régimen y su liquidación en los casos siguientes:

- 1º) Por la insolvencia o peligro de insolvencia en que hubiere incurrido el otro,
- 2º) Cuando el otro cónyuge fuere declarado incapaz, ausente, en quiebra o concurso de acreedores o condenado por incumplimiento de los deberes familiares de asistencia económica,
- 3º) Por realizar el otro, actos dispositivos o de gestión que fueren fraudulentos o que irrogaren daño o peligro a sus derechos en las ganancias; y,
- 4º) Si el otro lo hubiere abandonado.

Cualquiera de los cónyuges puede pedir la disolución y liquidación de las ganancias, si ambos hubieren estado separados durante seis meses consecutivos por lo menos.

En todos estos casos se podrá solicitar la anotación preventiva de la demanda; y los efectos de la terminación judicial del régimen, se producirán desde la fecha en que fuere decretada, respecto de los cónyuges y frente a terceros desde el momento de su inscripción.

DETERMINACIÓN DE LAS GANANCIAS

Art. 55.- Las ganancias se determinarán por las diferencias entre los patrimonios inicial y final de cada cónyuge. Si el resultado fuere positivo en los dos patrimonios,

el cónyuge que hubiere experimentado menor incremento en el suyo, tendrá derecho a la mitad de la diferencia entre ambos incrementos.

Cuando uno solo de los patrimonios se hubiere incrementado durante la existencia del régimen, el titular del otro tendrá derecho a la mitad de ese aumento.

PATRIMONIOS INICIAL Y FINAL

Art. 56.- El patrimonio inicial está constituido por los bienes que pertenezcan a cada cónyuge al empezar el régimen y por los adquiridos después a título gratuito, con deducción de las obligaciones que tenía en ese momento.

El patrimonio final lo constituyen los bienes que sean propiedad de los cónyuges al momento de la terminación del régimen, con deducción de las obligaciones insolutas, más las inclusiones a que se refiere el artículo 58.

ESTIMACIÓN DEL PATRIMONIO INICIAL

Art. 57.- Los bienes que constituyan el patrimonio inicial se estimarán según el estado y valor que tuvieren al momento de la iniciación del régimen o en su caso, de acuerdo al valor que tuvieren al tiempo que fueren adquiridos.

INCLUSIONES AL PATRIMONIO FINAL

Art. 58.- En el valor del patrimonio final de cada cónyuge se incluirá el que tenían los bienes de que se hubiere dispuesto a título gratuito por acto entre vivos. También se incluirá el valor de los créditos que uno de los cónyuges tenga contra el otro, por cualquier título.

Lo anterior es aplicable a los actos verificados por uno de los cónyuges en fraude de los derechos del otro.

ESTIMACIÓN DEL PATRIMONIO FINAL

Art. 59.- Los bienes que constituyan el patrimonio final se estimarán según el estado y valor que tuvieren en el momento de la terminación del régimen.

Los bienes enajenados gratuita o fraudulentamente, serán estimados conforme al estado que tenían el día de la enajenación y al valor que tendrían si se hubiesen conservado hasta el día de la terminación.

FORMA DE PAGO

Art. 60.- La participación en las ganancias deberá pagarse inmediatamente después de liquidado el régimen.

A falta de convenio respecto del pago en la participación en las ganancias, el juez podrá adjudicar los bienes a cada cónyuge para cancelar su cuota de participación

en las ganancias y podrá a petición justificada del acreedor, ordenar la venta en pública subasta de los bienes de propiedad del cónyuge deudor, para que con su producto se cancele la cuota de participación en las ganancias.

FRAUDE

Art. 61.- Cuando uno de los cónyuges hubiere realizado actos en fraude de los derechos del otro, será deudor de la misma por su importe, y además si el adquirente hubiere procedido de mala fe, el acto será nulo.

SECCIÓN CUARTA COMUNIDAD DIFERIDA

PARTE PRIMERA BIENES PROPIOS Y BIENES COMUNES

CARACTERÍSTICAS

Art. 62.- En la comunidad diferida, los bienes adquiridos a título oneroso, los frutos, rentas e intereses obtenidos por cualquiera de los cónyuges durante la existencia del régimen pertenecen a ambos, y se distribuirán por mitad al disolverse el mismo.

La comunidad es diferida por conformarse al momento de su disolución, pero se entenderá que los cónyuges la han tenido desde la celebración del matrimonio o desde la constitución del régimen.

BIENES PROPIOS

Art. 63.- Son de propiedad exclusiva de cada cónyuge los bienes siguientes:

- 1º) Los que tuviere al momento de constituirse el régimen;
- 2º) Los que adquiriere durante la vigencia del régimen a título gratuito;
- 3º) Los que hubiere adquirido en sustitución de cualesquiera de los comprendidos en los dos ordinales anteriores;
- 4º) Los que adquiriere durante el régimen a título oneroso, cuando la causa o título de adquisición ha precedido a la constitución del régimen;
- 5º) Las indemnizaciones por daños morales o materiales inferidos en su persona o en sus bienes propios;
- 6º) Los objetos de uso estrictamente personal;
- 7º) Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio de cada cónyuge siempre que no formen parte de una empresa o establecimiento común; y,

- 8º) Los libros relativos a la profesión u oficio de cada cónyuge, las condecoraciones y los objetos de carácter personal sin valor comercial, como los recuerdos de familia.

BIENES EN COMUNIDAD

Art. 64.- Son bienes en comunidad:

- 1º) Los salarios, sueldos, honorarios, pensiones, premios, recompensas y demás emolumentos provenientes del trabajo de cada uno de los cónyuges;
- 2º) Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes propios como los comunes, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales;
- 3º) Los adquiridos a título oneroso por cualquiera de los cónyuges;
- 4º) Los adquiridos a consecuencia de contratos aleatorios, como lotería, juego, apuesta;
- 5º) El aumento de valor, por la causa que fuere, de los bienes propios de cualquiera de los cónyuges;
- 6º) Las construcciones y plantaciones en bienes propios realizados con fondos provenientes del haber común; y,
- 7º) Las empresas o establecimientos constituidos por uno de los cónyuges, con bienes de la comunidad.

PRESUNCIÓN DE BIENES EN COMUNIDAD

Art. 65.- Se presumen en comunidad los bienes existentes en poder de cualquiera de los cónyuges, mientras no se pruebe que son bienes propios.

PARTE SEGUNDA DE LAS CARGAS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD

CARGAS

Art. 66.- Son cargas de la comunidad diferida:

- 1ª) Los gastos de familia y los de educación de los hijos comunes;
- 2ª) Los gastos de sostenimiento y educación de los hijos de uno solo de los cónyuges, cuando vivan en el hogar conyugal; en caso contrario los gastos derivados de estos conceptos serán siempre sufragados por la comunidad diferida, pero darán lugar a reintegro en el momento de la liquidación;

- 3ª) Los alimentos que cualquiera de los cónyuges esté obligado a suministrar por ley a sus ascendientes;
- 4ª) Los gastos de adquisición, administración y disfrute de los bienes comunes;
- 5ª) Los gastos de administración ordinaria de los bienes propios de los cónyuges;
- 6ª) Los gastos que ocasionare la explotación regular de los negocios o el desempeño del trabajo, empleo, profesión u oficio de cada cónyuge;
- 7ª) Los gastos de establecimiento de los hijos comunes que los padres acordaren sufragar; y,
- 8ª) Las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges en la administración del hogar.

OBLIGACIONES

Art. 67.- Los bienes en comunidad responderán en todo caso de las obligaciones contraídas por los cónyuges.

OBLIGACIONES DE COMPENSAR

Art. 68.- El cónyuge que tomare de los bienes en comunidad alguna suma para pagar sus deudas u obligaciones personales y, en general, el que obtuviere provecho personal de dichos bienes, deberá compensar a la comunidad. Asimismo, se observará lo dispuesto en el artículo 61.

APORTACIONES EN DINERO

Art. 69.- Si uno de los cónyuges hubiere hecho aportaciones de sus propios fondos, para satisfacer obligaciones a cargo de la comunidad diferida, tendrá derecho a que le sean reintegradas por ésta, con los intereses legales.

PARTE TERCERA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD

ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES EN COMUNIDAD

Art. 70.- Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de los bienes propios y comunes.

DISPOSICIÓN DE BIENES COMUNES POR TESTAMENTO

Art. 71.- Los cónyuges podrán disponer por testamento de su respectiva cuota en los bienes comunes a título universal.

Cuando se dispusiere por testamento de un bien común, a título singular, la disposición producirá todos sus efectos si ese bien se acreditare a la cuota parte de los bienes en comunidad que le hubiere correspondido al testador; de lo contrario, se entenderá legado el valor que tuviere al tiempo del fallecimiento del causante.

PARTE CUARTA

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD

DISOLUCIÓN JUDICIAL

Art. 72.- La comunidad diferida se disuelve por resolución judicial, a solicitud de alguno de los cónyuges, en cualquiera de los casos siguientes:

- 1º) Cuando el otro cónyuge fuere declarado incapaz, ausente, en quiebra o concurso de acreedores, o condenado por incumplimiento de los deberes familiares de asistencia económica;
- 2º) Por realizar el otro, actos dispositivos o de gestión que fueren fraudulentos o que irrogaren daño o peligro a sus derechos en la comunidad;
- 3º) Si el otro cónyuge lo hubiere abandonado, o estuvieran separados durante seis meses consecutivos por lo menos.

En todos estos casos, se podrá solicitar la anotación preventiva de la demanda y los efectos de la terminación judicial del régimen se producirán desde la fecha en la cual quede firme la resolución que la decretare respecto de los cónyuges y frente a terceros, desde el momento de su inscripción en el registro respectivo.

EFFECTOS DE LA DISOLUCIÓN

Art. 73.- La disolución del régimen de comunidad diferida surte los siguientes efectos:

- 1º) Se crea la comunidad de bienes y, en consecuencia, la administración y disposición de los bienes en comunidad corresponde conjuntamente a los cónyuges;
- 2º) Se consolidan el activo y el pasivo respecto de los bienes en comunidad;
- 3º) Se termina el usufructo que tenía la comunidad diferida sobre los bienes propios de cada cónyuge; y,
- 4º) Se hacen exigibles las recompensas y créditos existentes de los cónyuges entre sí, y de éstos con la comunidad.

LIQUIDACIÓN

Art. 74.- Disuelta la comunidad diferida se procederá a su liquidación, previo inventario del activo y del pasivo.

Si los cónyuges no se pusieren de acuerdo en la liquidación, ésta se practicará judicialmente.

ACTIVO

Art. 75.- El activo comprenderá:

- 1º) Los bienes en comunidad existentes a la fecha de la disolución;
- 2º) El importe actualizado del valor que tenían los bienes que hubieren sido enajenados ilegal o fraudulentamente por uno de los cónyuges; y,
- 3º) El importe actualizado de las cantidades que hubieren sido pagadas por la comunidad y que eran a cargo sólo de un cónyuge y, en general, las que constituyan créditos de la comunidad contra alguno de los cónyuges.

PASIVO

Art. 76.- El pasivo comprenderá:

- 1º) Las deudas existentes a cargo de la comunidad a la fecha de la disolución;
- 2º) El importe actualizado del valor de los bienes propios de alguno de los cónyuges, cuando su restitución deba hacerse, por haber sido gastado en interés de la comunidad;
- 3º) El importe actualizado de los deterioros producidos en los bienes a que se refiere el ordinal anterior, por su uso en beneficio de la comunidad;
- 4º) El importe actualizado de las cantidades que alguno de los cónyuges hubiere aportado de sus propios fondos, para satisfacer obligaciones que eran a cargo de la comunidad;
- 5º) Las cantidades que constituyan créditos de los cónyuges contra la comunidad.

PAGO DE LAS DEUDAS DE LA COMUNIDAD

Art. 77.- Practicada la liquidación, se pagarán en primer lugar las deudas de la comunidad, comenzando por las alimentarias, que en cualquier caso gozarán de preferencia.

Si no hubiere lo suficiente para pagar las demás, se observará lo dispuesto en el Código Civil para la prelación de créditos.

PAGO EFECTIVO

Art. 78.- El pago de las deudas podrá hacerse en dinero, o por adjudicación de bienes comunes; pero si cualquier partícipe o acreedor lo pidiere con justa causa, se procederá a enajenarlos y se pagarán con su importe.

INDEMNIZACIONES Y REINTEGROS

Art. 79.- Después de pagadas las deudas y cargas de la comunidad, se abonarán las indemnizaciones y reintegros que se deban a cada cónyuge, haciendo las compensaciones que correspondan cuando alguno de ellos sea deudor de la comunidad.

HABER DE LA COMUNIDAD

Art. 80.- El remanente que resultare después de hechas las deducciones de que tratan los artículos anteriores, constituye el haber de la comunidad diferida, que será dividido por mitad entre los cónyuges o sus respectivos herederos.

ADJUDICACIONES PREFERENCIALES

Art. 81.- Cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan preferentemente en su respectivo haber, hasta donde éste alcance:

- 1º) Los bienes de uso personal;
- 2º) El local donde hubiere estado ejerciendo su profesión u oficio;
- 3º) La explotación agrícola, comercial o industrial llevada con su trabajo personal; y,
- 4º) La vivienda donde tuviesen su residencia habitual, en el caso de muerte del otro cónyuge.

SUMISTRO DE ALIMENTOS

Art. 82.- De la masa común de bienes se darán alimentos a los cónyuges o al sobreviviente y a los hijos, mientras dure la liquidación.

REGLA SUPLETORIA

Art. 83.- En lo no previsto sobre la facción del inventario, tasación y venta de bienes, división del caudal de la comunidad, adjudicaciones a los partícipes y demás que no hayan sido expresamente regulados, se observarán las reglas del inventario, de la partición y liquidación de la herencia, en lo que fueren aplicables.

SECCIÓN QUINTA

CAPITULACIONES MATRIMONIALES

CONCEPTO

Art. 84.- SON CAPITULACIONES MATRIMONIALES LOS CONVENIOS CELEBRADOS PARA DETERMINAR, MODIFICAR Y SUSTITUIR EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO, INCLUSIVE LA CONSTITUCIÓN DEL DERECHO DE HABITACIÓN SOBRE UN DETERMINADO INMUEBLE Y LAS SITUACIONES JURÍDICAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 46 DE LA PRESENTE LEY. **(12)**

Tales convenios podrán celebrarse antes o después de contraerse el matrimonio, y no podrán contener estipulaciones contrarias a este Código y demás leyes de la República.

FORMALIDAD

Art. 85.- Las capitulaciones matrimoniales deberán otorgarse en escritura pública, o en acta ante el Procurador General de la República o los Procuradores Auxiliares Departamentales.

CAPITULACIONES OTORGADAS POR MENORES

Art. 86.- DEROGADO. **(17)**

CADUCIDAD DE ESTIPULACIONES

Art. 87.- Las capitulaciones matrimoniales producirán sus efectos a partir de la celebración del matrimonio, y quedarán sin valor, si aquel no fuere celebrado dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha de su otorgamiento

NULIDAD DE CAPITULACIONES

Art. 88.- Las capitulaciones matrimoniales serán nulas en los mismos casos en que lo son los actos y declaraciones de voluntad y, además, lo serán las celebradas en contravención a lo establecido en el inciso segundo del artículo 84 y artículo 85.

PODER ESPECIAL

Art. 89.- Las capitulaciones matrimoniales podrán celebrarse por medio de apoderado con poder especial, otorgado en escritura pública, en la que deberán constar las cláusulas que regulan el Régimen Patrimonial del Matrimonio.

De la misma manera podrá otorgarse la modificación, la sustitución o la terminación del régimen.

TÍTULO III NULIDAD Y DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO

CAPÍTULO I NULIDAD DEL MATRIMONIO

NULIDAD ABSOLUTA

Art. 90.- Son causas de nulidad absoluta del matrimonio:

- 1ª) El haberse contraído ante funcionario no autorizado;
- 2ª) La falta de consentimiento de cualquiera de los contrayentes;
- 3ª) Cuando los contrayentes sean del mismo sexo; y,
- 4ª) EL HABERSE CELEBRADO EXISTIENDO ALGUNO DE LOS IMPEDIMENTOS SEÑALADOS POR ESTE CÓDIGO. **(17)**

LEGITIMACIÓN PROCESAL

Art. 91.- La nulidad absoluta del matrimonio deberá decretarse de oficio por el juez cuando aparezca de manifiesto dentro de un proceso; y podrá ser reclamada por cualquiera de los contrayentes, por el Procurador General de la República, por el Fiscal General de la República o por cualquier persona interesada.

NULIDAD POR MINORIDAD

Art.92. DEROGADO. **(17)**

NULIDAD RELATIVA

Art. 93.- Son causas de nulidad relativa del matrimonio:

- 1ª) El error en la persona del otro contrayente;
- 2ª) La fuerza física o moral suficiente para obligar a consentir;
- 3ª) La falta o inhabilidad de los testigos indispensables, o la falta del secretario en su caso.
- 4ª) DEROGADO. **(17)**

NULIDAD POR ERROR

Art. 94.- La nulidad por error en la persona solamente podrá ser pedida por quien padeció el error, y se sana por el transcurso de tres meses contados a partir del día en que se tuvo conocimiento del mismo.

Para los efectos de este artículo se entenderá que el error en la persona del otro contrayente, comprende el que recae sobre su identidad física o sobre alguna cualidad personal determinante en la prestación del consentimiento para contraer matrimonio.

NULIDAD POR FUERZA

Art. 95.- La nulidad del matrimonio contraído mediante el uso de la fuerza física o moral suficiente, ya sea que provenga del otro contrayente o de un tercero, sólo puede ser pedida por la víctima de la fuerza, y se sana por el transcurso de tres meses contados desde el día en que cese la fuerza.

NULIDAD POR FALTA DE TESTIGOS O SECRETARIO

Art. 96.- La nulidad por falta de testigos o del secretario en su caso, o la fundada en la inhabilidad de aquéllos, sólo podrá alegarse por los contrayentes y se sana por el transcurso de tres meses contados a partir del día de la celebración del matrimonio.

INDEMNIZACIÓN

Art. 97.- El contrayente que resultare culpable de la nulidad del matrimonio, será responsable de los daños materiales o morales que hubiere sufrido el contrayente de buena fe.

NULIDAD DECLARADA EN EL EXTRANJERO

Art. 98.- El matrimonio que según las leyes del país en que se contrajo pudiere anularse en él, no podrá anularse en El Salvador, sino de conformidad a las leyes salvadoreñas.

La declaratoria de nulidad pronunciada en el extranjero, de un matrimonio celebrado en la República, sólo producirá efectos en El Salvador, si se fundare en alguna de las causas contempladas en los artículos 90 o 93 de este Código.

DEBERES Y DERECHOS SUBSISTENTES

Art. 99.- La nulidad del matrimonio no exime a los padres de los deberes que tengan para con sus hijos y no afectará los derechos de terceros que hubieren contratado de buena fe con los cónyuges.

EFFECTOS DE LA SENTENCIA DE NULIDAD

Art. 100.- Para determinar a quien de los padres quedará el cuidado personal de los hijos que se hubieren procreado en un matrimonio declarado nulo, fijar la cuantía con que los padres deberán contribuir a los gastos de crianza y educación de los hijos y demás efectos, se aplicarán las reglas previstas en este Código para los casos de divorcio.

EFFECTOS SOBRE BIENES

Art. 101.- La sentencia ejecutoriada de nulidad del matrimonio producirá respecto de los bienes de los cónyuges, los mismos efectos previstos para los casos de divorcio sin perjuicio de lo establecido en los artículos 97 y 103.

CANCELACIÓN Y ANOTACIONES MARGINALES

Art. 102.- Ejecutoriada la sentencia de nulidad del matrimonio, el juez dará aviso al encargado del Registro del Estado Familiar donde se encuentre asentada la partida de matrimonio, para que la cancele; asimismo, informará al funcionario encargado del Registro del Estado Familiar donde se encuentren asentadas las partidas de nacimiento de los contrayentes, para que se hagan las anotaciones marginales de ley.

EFFECTOS DE MATRIMONIO NULO

Art. 103.- El matrimonio celebrado con las solemnidades que la ley requiere y cuya nulidad se declare en el caso de la causal 4a. del artículo 90 y en las contempladas en el artículo 93, produce los mismos efectos civiles que el válido; pero dejará de producir efectos civiles desde que falte la buena fe de los cónyuges, sólo respecto de éstos.

Cuando la nulidad sea decretada con fundamento en el ordinal 2o. del artículo 14 de este Código, los efectos civiles que produzca no incluirán los relativos al régimen patrimonial del matrimonio.

Las donaciones o promesas que por causa de matrimonio se hayan hecho por el otro cónyuge al que se casó de buena fe, subsistirán no obstante la declaratoria de nulidad del matrimonio.

CAPÍTULO II DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO

CAUSAS DE DISOLUCIÓN

Art. 104.- El matrimonio se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges y por el divorcio.

DIVORCIO

Art. 105.- Divorcio es la disolución del vínculo matrimonial decretado por el juez.

MOTIVOS DE DIVORCIO

Art. 106.- El divorcio podrá decretarse:

- 1º) Por mutuo consentimiento de los cónyuges;
- 2º) Por separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos; y,
- 3º) Por ser intolerable la vida en común entre los cónyuges. Se entiende que concurre este motivo, en caso de incumplimiento grave o reiterado de los deberes del matrimonio, mala conducta notoria de uno de ellos o cualquier otro hecho grave semejante.

En el caso del ordinal anterior el divorcio podrá ser solicitado sólo por el cónyuge que no haya participado en los actos o hechos que originaren el motivo.

PENSIÓN ALIMENTICIA ESPECIAL

Art. 107.- Cuando proceda decretarse el divorcio y el cónyuge que no haya participado en los hechos que lo originaron adoleciere de discapacidad o minusvalía que le impida trabajar, o hubiere sido declarado incapaz y no tuviere medios de subsistencia suficientes, el divorcio se decretará estableciendo el pago de una pensión alimenticia, que se fijará de acuerdo con las posibilidades económicas del obligado y con las necesidades especiales del alimentario; aplicándose en lo demás las reglas generales prescritas para los alimentos.

DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

Art. 108.- Los cónyuges que pretendan divorciarse por mutuo consentimiento, deberán suscribir un convenio, que contendrá por lo menos las siguientes cláusulas:

- 1ª) La determinación del cónyuge bajo cuyo cuidado personal quedarán los hijos sujetos a autoridad parental; y el régimen de visitas, comunicación y estadía que hubieren acordado, para que el padre o madre que no viva al lado de sus hijos, se relacione con los mismos;
- 2ª) Determinación del cónyuge por cuenta de quien deberán ser alimentados los hijos; o expresión de la proporción con que contribuirá cada uno de los cónyuges para dicha finalidad; con indicación de las bases de actualización de la cuantía de los alimentos y de las garantías reales o personales ofrecidas para su pago;
- 3ª) Determinación de la pensión alimenticia especial que se debe prestar cuando proceda;
- 4ª) Expresión del cónyuge a quien corresponderá el uso de la vivienda y bienes muebles en uso familiar; y,
- 5ª) Fijación de las bases para la liquidación del patrimonio conyugal cuando exista régimen económico de comunidad o para la liquidación de las ganancias o determinación de la pensión compensatoria, en su caso.

APROBACIÓN DEL CONVENIO

Art. 109.- El convenio será calificado por el juez, quien lo aprobará si los acuerdos adoptados no vulneran los derechos de los hijos y de los cónyuges reconocidos en este Código, en lo referente a prestación de alimentos, régimen de visitas u otros aspectos análogos. En caso contrario y previa audiencia común con los interesados, el juez podrá hacer las modificaciones procedentes en la sentencia, si es que antes de pronunciarse, los cónyuges no hubieren presentado nuevo convenio que sea justo y legal.

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DESPUES DE LA SENTENCIA

Art. 110.- Ejecutoriada la sentencia de divorcio, si ocurriere alteración sustancial de las circunstancias bajo las cuales fue aprobado el convenio, éste podrá modificarse judicialmente, o por medio de otro convenio otorgado en la misma forma que el original, previa aprobación del juez, debiendo seguirse los trámites del artículo anterior.

DIVORCIO CONTENCIOSO

Art. 111.- En los casos de divorcio contencioso, cuando hubiere hijos sometidos a autoridad parental, los cónyuges acordarán a quien de ellos corresponderá el cuidado personal de los hijos, por cuenta de quien serán alimentados o la cuantía con que para ello contribuirá cada uno, así como el régimen de visitas, comunicación y estadía de los hijos.

Tales acuerdos serán manifestados al juez en audiencia común que señalará al efecto; de no mediar acuerdo entre los cónyuges o ser éste atentatorio al interés de los hijos, el juez decidirá en la sentencia de conformidad a lo establecido en los artículos 216 y 217 de este Código.

LA SENTENCIA DE DIVORCIO DISPONDRÁ ADEMÁS QUE LA O EL CÓNYUGE AL QUE SE LE HUBIERE CONFIADO EL CUIDADO PERSONAL DE LAS Y LOS HIJOS, LE CORRESPONDERÁ EL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR, AÚN CUANDO EL DERECHO DE HABITACIÓN NO SE HUBIERE CONSTITUIDO PREVIAMENTE; ASÍ COMO SOBRE EL USO DE LOS BIENES MUEBLES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA FAMILIA. EN EL CASO DE QUE LA VIVIENDA DESTINADA PARA USO FAMILIAR ESTUVIESE GRAVADA, EN LA MISMA SENTENCIA LA O EL JUEZ PODRÁ DETERMINAR LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS DEUDAS, BUSCANDO EN TODO CASO EL BIENESTAR DE LAS Y LOS HIJOS Y LA O EL CÓNYUGE BAJO CUYO CUIDADO PERSONAL SE CONFIAREN. EN DEFECTO DE VIVIENDA, SE DISPONDRÁ EN DICHA SENTENCIA A FAVOR DE LA O EL CÓNYUGE EN MENCIÓN, DE UNA CUOTA PARA VIVIENDA. (12)

Si el divorcio se decretare por el motivo tercero del artículo 106 y los hechos que hicieron intolerable la vida en común entre los cónyuges, constituyeren causa de pérdida o suspensión de la autoridad parental, en la sentencia de divorcio el juez decretará dicha pérdida o suspensión.

SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN DE MEDIDAS

Art. 112.- Los acuerdos de los cónyuges o las resoluciones prescritas por el juez en la sentencia de divorcio, podrán ser suspendidos o modificados judicialmente cuando se incumplieren grave o reiteradamente, o bien si las circunstancias que fundamentaron el fallo hubieren cambiado sustancialmente.

PENSIÓN COMPENSATORIA

Art. 113.- Si el matrimonio se hubiere contraído bajo el régimen de separación de bienes, o si habiendo existido un régimen de comunidad su liquidación arrojaré saldo negativo, el cónyuge a quien el divorcio produjere desequilibrio que implique una desmejora sensible en su situación económica, en comparación con la que tenía dentro del matrimonio, tendrá derecho a una pensión en dinero que se fijará en la sentencia de divorcio, de acuerdo con las pruebas que al efecto se hubieren producido.

Para determinar la cuantía de esta pensión y las bases de la actualización, se tomarán en cuenta los acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges, la edad y el estado de salud del acreedor, la calificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo, la dedicación personal pasada y futura a la atención de la familia, la duración del matrimonio y la de convivencia conyugal, la colaboración con su trabajo en las actividades particulares del otro cónyuge y el caudal y medios económicos de cada uno.

En la misma sentencia se fijarán las garantías para hacer efectiva la pensión compensatoria.

El derecho a esta pensión se extingue por cesar la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o convivir maritalmente con otra persona, por haber cometido injuria grave contra el deudor, o por la muerte del acreedor o del deudor.

La pensión se extingue cuando el alimentante: entregue bienes, constituya el derecho de usufructo, uso o habitación sobre determinados bienes, o entregue una suma total de dinero en efectivo al alimentario, si así lo acordaren los interesados o lo decidiere el juez a petición justificada del deudor.

PRIVACIÓN DE PENSIÓN

Art. 114.- En los casos de divorcio en que se establezca grave conducta dañosa de un cónyuge para con el otro, no habrá derecho al pago de la pensión compensatoria que prescribe el artículo que antecede.

EFFECTOS DE LA SENTENCIA

Art. 115.- La sentencia ejecutoriada que decrete el divorcio producirá los efectos siguientes:

- 1º) La disolución del vínculo matrimonial, quedando el hombre en aptitud para contraer matrimonio, pudiendo la mujer hacer lo mismo si ya hubieren transcurrido trescientos días contados desde la fecha de disolución del matrimonio, hubiere dado a luz o si comprobare que no está embarazada, o cuando el divorcio se hubiere decretado por separación de los cónyuges, en cuyos casos podrá contraer matrimonio, en cualquier tiempo;
- 2º) La disolución del régimen patrimonial que hubiere existido en el matrimonio; y,
- 3º) Los demás efectos que prescribe este Código, relativos al cuidado personal de hijos menores de edad, cuantía de pensiones alimenticias, régimen de visitas y demás señalados en los artículos 111 y 113 de este Código.

INICIO DE EFECTOS DE LA SENTENCIA

Art. 116.- La sentencia que decrete el divorcio producirá efectos a partir de la fecha en que quede ejecutoriada; pero no afectará a terceros de buena fe sino a partir de la fecha de la inscripción del divorcio en el Registro del Estado Familiar.

El divorcio no exime a los padres de los deberes para con los hijos.

DIVORCIO DECRETADO EN EL EXTRANJERO

Art. 117.- El divorcio decretado en el extranjero de quienes se hubieren casado conforme a las leyes salvadoreñas, sólo producirá efectos en El Salvador, cuando la causal invocada sea igual o semejante a las que este Código reconoce.

TÍTULO IV

LA UNION NO MATRIMONIAL

CAPÍTULO ÚNICO

CONCEPTO Y EXTENSIÓN

Art. 118.- LA UNIÓN NO MATRIMONIAL QUE REGULA ESTE CÓDIGO, ES LA CONSTITUIDA POR UN HOMBRE Y UNA MUJER QUE SIN IMPEDIMENTO LEGAL PARA CONTRAER MATRIMONIO ENTRE SÍ, HICIEREN VIDA EN COMÚN LIBREMENTE, EN FORMA SINGULAR, CONTINUA, ESTABLE Y NOTORIA, POR UN PERÍODO DE UNO O MÁS AÑOS. **(12)**

Los integrantes de la unión, serán denominados convivientes o compañeros de vida y gozarán de los derechos que se les confiere en este capítulo. Asimismo gozarán de esos derechos las personas que siendo púberes y reuniendo los demás requisitos, en razón de la convivencia hubieren procreado un hijo y alguna de ellas no tuviere la edad requerida para contraer matrimonio o falleciere antes de completar el período de convivencia.

REGIMEN PATRIMONIAL Y GASTOS DE FAMILIA

Art. 119.- Los bienes adquiridos a título oneroso durante la unión y sus frutos, así como los que produjeren los bienes que cada conviviente tenía a la iniciación de la unión, se aplicarán a ambos convivientes o sus herederos, las reglas del Régimen de la Participación en las Ganancias.

En lo que respecta a los gastos de familia, los convivientes estarán sujetos a lo que dispone el artículo 38.

PROTECCIÓN PARA LA VIVIENDA FAMILIAR

Art. 120.- Será aplicable al inmueble que sirve de habitación a los convivientes y a su familia lo que dispone el artículo 46.

DERECHO A SUCEDER

Art. 121.- Cada uno de los convivientes será llamado a la sucesión abintestato del otro, en el mismo orden que los cónyuges.

ACCIÓN CIVIL

Art. 122.- En caso de muerte, el compañero de vida sobreviviente tendrá derecho a reclamar al responsable civil, indemnización por los daños morales y materiales que hubiere sufrido.

DECLARACIÓN JUDICIAL

Art. 123.- Para el goce de los derechos que confiere la unión no matrimonial, se requiere declaración judicial previa de su existencia. Dicha declaración procederá al acaecer el fallecimiento de uno de los convivientes o la ruptura de la unión.

Siempre que se requiera acreditar la calidad de conviviente, para hacer uso de cualquiera de los derechos otorgados por este Código, aquélla deberá declararse judicialmente.

CONTENIDO DE LA SENTENCIA

Art. 124.- La sentencia declarativa de la existencia de la unión, en los casos del inciso primero del artículo precedente, determinará:

- 1º) La fecha de inicio y de cesación de la unión;
- 2º) Los bienes adquiridos por los convivientes y los frutos de éstos deberán establecerse de acuerdo al Régimen de Participación en las Ganancias regulado en el Art. 51 de este Código;
- 3º) La filiación de los hijos procreados durante ella, que no hubiere sido previamente establecida;
- 4º) A quien de los padres en su caso, corresponderá el cuidado personal de los hijos sujetos a autoridad parental habidos dentro de ella, el régimen de visitas, comunicaciones y estadía de los mismos, para que el padre o madre que no viva con ellos, se relacione con sus hijos; y el monto de la pensión alimenticia con que el otro deberá contribuir; y,
- 5º) A QUIEN CORRESPONDERÁ EL USO DE LOS BIENES MUEBLES Y DE LA VIVIENDA FAMILIAR, CON LA FINALIDAD DE DAR PROTECCIÓN A LA O EL CONVIVIENTE Y A LAS Y LOS HIJOS BAJO AUTORIDAD PARENTAL, INCAPACITADAS O INCAPACITADOS, DISCAPACITADAS O DISCAPACITADOS Y DEMÁS PERSONAS QUE INTEGREN EL GRUPO FAMILIAR. **(12)**

EN EL CASO DE QUE LA VIVIENDA DESTINADA PARA EL USO FAMILIAR, ESTUVIESE GRAVADA, EN LA MISMA SENTENCIA LA O EL JUEZ PODRÁ DETERMINAR LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS DEUDAS BUSCANDO EN TODO CASO EL BIENESTAR DE LAS Y LOS HIJOS Y LA O EL CÓNYUGE BAJO CUYO CUIDADO PERSONAL SE CONFIAREN. **(12)**

La certificación de la sentencia que declare la existencia de la unión, deberá inscribirse en el Registro del Estado Familiar, y en los demás registros públicos, según procediere.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Art. 125.- LA DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE LA UNIÓN NO MATRIMONIAL, DEBERÁ PEDIRSE DENTRO DE LOS TRES AÑOS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RUPTURA DE LA MISMA O DEL FALLECIMIENTO DE UNO DE LOS CONVIVIENTES, SO PENA DE CADUCIDAD. **(12)**

ESTA ACCIÓN PODRÁ SER INICIADA POR CUALQUIERA DE LOS CONVIVIENTES O SUS HEREDEROS. **(12)**

INTEGRACIÓN CON OTRAS LEYES

Art. 126.- Lo dispuesto en el presente título debe entenderse sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan en favor de los convivientes o compañeros de vida.

TÍTULO V

EL PARENTESCO

CAPÍTULO ÚNICO

PARENTESCO Y CLASES

Art. 127.- Parentesco es la relación de familia que existe entre dos o más personas y puede ser por consanguinidad, afinidad o por adopción.

PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD

Art. 128.- Parentesco por consanguinidad es el existente entre personas que descienden unas de otras, o de un ascendiente común.

PARENTESCO POR AFINIDAD

Art. 129.- Parentesco por afinidad es el existente entre uno de los cónyuges y los consanguíneos del otro.

También existe parentesco por afinidad entre uno de los convivientes y los consanguíneos del otro.

PARENTESCO POR ADOPCIÓN

Art. 130.- Parentesco por adopción es el que se origina, entre el adoptado, los adoptantes y los parientes de éstos, con los mismos efectos que el parentesco consanguíneo.

GRADOS Y LÍNEAS DE PARENTESCO

Art. 131.- La proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones.

La serie de generaciones procedentes de un ascendiente común, forman línea de parentesco.

Cada generación constituye un grado.

La línea y el grado se determinan de la misma forma en cualquier clase de parentesco.

La línea es recta, cuando las personas descienden unas de otras, como la del padre con el hijo o la del abuelo con el nieto; y es colateral o transversal, cuando las personas provienen de un ascendiente común, unas de otras, como la de los hermanos, la del tío con el sobrino y la de los primos hermanos.

EXTENSIÓN DEL PARENTESCO

Art. 132.- El parentesco por consanguinidad en la línea recta es indefinido y en la línea colateral se reconoce hasta el cuarto grado; en el de afinidad, hasta el segundo.

El parentesco por adopción opera en forma idéntica al consanguíneo.

LIBRO SEGUNDO FILIACIÓN Y ESTADO FAMILIAR

TÍTULO I FILIACIÓN

CAPÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES

CONCEPTO DE FILIACIÓN

Art. 133.- La filiación es el vínculo de familia existente entre el hijo y sus padres. Respecto del padre se denomina paternidad y respecto de la madre, maternidad.

CLASES DE FILIACIÓN

Art. 134.- La filiación puede ser por consanguinidad o por adopción.

FORMAS DE ESTABLECER LA PATERNIDAD

Art. 135.- La paternidad se establece por disposición de la ley, por reconocimiento voluntario o por declaración judicial.

FORMAS DE ESTABLECER LA MATERNIDAD

Art. 136.- La maternidad quedará establecida aun sin mediar reconocimiento expreso, con la prueba de nacimiento y la identidad del nacido, sin perjuicio del derecho de la madre a impugnar la maternidad en caso de inscripción falsa, de conformidad con lo establecido en el Art. 196; y por declaración judicial.

PATERNIDAD O MATERNIDAD FALSAS

Art. 137.- Es falsa la paternidad o la maternidad cuando una persona pasa por padre o por madre de otra, sin serlo.

FILIACIÓN INEFICAZ

Art. 138.- Establecida una filiación, no será eficaz otra posterior que contraríe la primera, a no ser que ésta fuere declarada sin efecto por sentencia judicial.

DERECHO A INVESTIGAR LA PATERNIDAD O LA MATERNIDAD

Art. 139.- El hijo tiene derecho a investigar quiénes son sus progenitores. Este derecho se transmite a los descendientes del hijo y es imprescriptible.

En este caso se admite toda clase de prueba.

CAPÍTULO II FILIACIÓN CONSANGUÍNEA

SECCIÓN PRIMERA DE LA PATERNIDAD

PARTE PRIMERA ESTABLECIMIENTO DE LA PATERNIDAD POR DISPOSICIÓN DE LA LEY

PROCEDENCIA

Art. 140.- Se establece la paternidad por ministerio de ley, cuando se presuma o se determine conforme a las disposiciones de este Código.

PRESUNCIÓN DE PATERNIDAD

Art. 141.- Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o declaratoria de nulidad.

Esta presunción también tendrá lugar en caso de nulidad del matrimonio, aun cuando faltare la buena fe de ambos cónyuges.

Con todo, la presunción establecida en este artículo no será aplicable cuando los cónyuges hubieren estado separados por más de un año y el hijo fuere reconocido por persona diferente del padre.

PRESUNCIÓN DE PATERNIDAD EN CASO DE NUEVO MATRIMONIO DE LA MADRE

Art. 142.- Si la madre hubiere contraído otras nupcias en contravención a lo dispuesto en el artículo 17, la paternidad del hijo que naciere después de celebrado el nuevo matrimonio, se establecerá conforme a las reglas siguientes:

- 1ª) Se presume que el hijo es del primer marido si nace dentro de los ciento ochenta días posteriores a la celebración del segundo matrimonio; y,

- 2ª) Se presume que el hijo es del segundo marido, si nace después de ciento ochenta días de la celebración del segundo matrimonio, aunque el nacimiento tenga lugar dentro de los trescientos días posteriores a la disolución del primero.

PARTE SEGUNDA DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO

FORMAS DE RECONOCIMIENTO

Art. 143.- El padre puede reconocer voluntariamente al hijo:

- 1º) En la partida de nacimiento del hijo, al suministrar los datos para su inscripción en calidad de padre. En la partida se hará constar el nombre y demás datos de identidad de éste, quien deberá firmarla si supiere o pudiese;
- 2º) En la escritura pública de matrimonio o en el acta otorgada ante los oficios de los Gobernadores Políticos Departamentales, Procurador General de la República y Alcaldes Municipales;
- 3º) En acta ante el Procurador General de la República o Procuradores Auxiliares Departamentales;
- 4º) En escritura pública, aunque el reconocimiento no sea el objeto principal del instrumento;
- 5º) En testamento; y,
- 6º) En escritos u otros actos judiciales. En estos casos el juez deberá extender las certificaciones que les soliciten los interesados.

RECONOCIMIENTO DEL HIJO NO NACIDO Y DEL HIJO FALLECIDO

Art. 144.- El padre podrá reconocer al hijo concebido y al hijo fallecido, por cualquiera de los medios establecidos en este Código que fueren aplicables.

El reconocimiento del hijo fallecido sólo aprovechará a su descendencia.

CAPACIDAD ESPECIAL PARA RECONOCER

Art. 145.- Los menores adultos tienen capacidad para reconocer su paternidad, sin necesidad de autorización o consentimiento de sus representantes legales.

RECONOCIMIENTO PROVOCADO

Art. 146.- El hijo que no hubiere sido reconocido, tendrá derecho a que el supuesto padre sea citado ante el juez, a declarar si cree serlo. El Juez a su criterio, podrá ordenar las pruebas científicas, hereditarias, biológicas y antropomórficas del supuesto padre. **(4)**

La mujer embarazada también tendrá derecho a que el hombre de quien ha concebido sea citado ante el Juez, a declarar si reconoce ser el padre de la criatura que está por nacer. **(4)**

La negativa del supuesto padre a comparecer ante el Juez o a someterse a la prueba de paternidad, será considerada como positiva de la existencia de vínculo biológico, sin perjuicio del derecho de impugnarla. **(4)**

Sin perjuicio de la acción de declaración judicial de paternidad, las diligencias a que da lugar este artículo, únicamente podrán promoverse por una vez, contra el supuesto padre. **(4)**

EN LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO FORZOSO DE PATERNIDAD, OPERARÁ EN BENEFICIO DEL DEMANDANTE, LA REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, MEDIANTE LA CUAL, EL DEMANDADO ESTARÁ OBLIGADO A PROVEER LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL CASO. LA INACTIVIDAD O LA OPOSICIÓN DEL DEMANDADO A APORTAR LA PRUEBA NECESARIA, TENDRÁ COMO CONSECUENCIA, LA PRESUNCIÓN LEGAL DE LA PATERNIDAD ATRIBUIDA, LA QUE PODRÁ SER IMPUGNADA SÓLO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTE CÓDIGO. **(9)**

IRREVOCABILIDAD

Art. 147.- El reconocimiento de paternidad es irrevocable.

PARTE TERCERA DECLARACIÓN JUDICIAL DE PATERNIDAD

DERECHO DE EXIGIR LA DECLARACIÓN

Art. 148.- El hijo no reconocido voluntariamente por su padre, o cuya paternidad no se presume conforme a las disposiciones de este Código, tiene derecho a exigir la declaratoria judicial de paternidad.

RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE PATERNIDAD

Art. 149.- La paternidad será declarada por el juez cuando resulte de la manifestación expresa o tácita del pretendido padre, de su relación sexual con la madre en el período de la concepción, de la posesión de estado del hijo, o de otros hechos análogos de los que se infiera inequívocamente la paternidad.

Se presume la paternidad del hombre que hubiere convivido con la madre durante el período de la concepción, salvo la inexistencia de nexo biológico.

ACCIÓN DE PATERNIDAD

Art. 150.- La acción de declaración judicial de paternidad corresponde al hijo y si éste hubiere fallecido, a sus descendientes, contra el supuesto padre o sus herederos, o contra el curador de la herencia yacente. Esta acción es imprescriptible.

Si fuera declarada la paternidad, la madre y el hijo tendrá derecho a reclamar del padre indemnización por los daños morales y materiales a que hubiere lugar conforme a la ley.

PARTE CUARTA DE LA IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD

IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD ESTABLECIDA POR LEY (20)

Art. 151.- PODRÁN IMPUGNAR LA PATERNIDAD QUE POR LEY SE LE ATRIBUYE AL MARIDO: **(20)**

- a) EL MARIDO PROBANDO QUE EL HIJO NO HA PODIDO SER ENGENDRADO POR ÉL. **(20)**
- b) AQUEL QUE SE CONSIDERE EL "PADRE BIOLÓGICO", SIEMPRE QUE SU PRETENSIÓN SE FUNDAMENTE EN RAZONES OBJETIVAS QUE CONDUZCAN A PENSAR RAZONABLEMENTE QUE ES PROBABLE QUE ÉL SEA EL PADRE. **(20)**
- c) EL HIJO CUANDO EJERZA SU DERECHO A INVESTIGAR LA PATERNIDAD DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 138 Y 139 DE ESTE CÓDIGO. **(20)**

EL PROCESO PARA IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD ESTABLECIDA POR LEY SE TRAMITARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ARTÍCULO Y EN LO QUE SEA APLICABLE SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 140 Y SIGUIENTES DE LA LEY PROCESAL DE FAMILIA RELATIVOS A LA FILIACIÓN. **(20)**

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Art. 152.- LA ACCIÓN QUE TIENE EL MARIDO PARA IMPUGNAR LA PATERNIDAD DEL HIJO QUE PASA POR SUYO, O DEL QUE AFIRME SER EL PADRE BIOLÓGICO, CADUCA TRANSCURRIDOS NOVENTA DÍAS CONTADOS, DESDE AQUÉL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD QUE POR LEY SE LE ATRIBUYE, O DESDE QUE EL QUE AFIRME SER EL PADRE BIOLÓGICO TENGA CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE SU HIJA O HIJO. **(20)**

La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo, hará presumir que lo supo inmediatamente a menos que probare que por parte de la madre ha habido ocultación del parto.

Si el tiempo del nacimiento se hallare el marido ausente, se presumirá que lo supo inmediatamente después de su regreso a la residencia de la mujer, salvo el caso de ocultación mencionado en el inciso precedente.

El plazo de que habla este artículo se suspende por imposibilidad física o mental del marido de tener conocimiento del hecho.

IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD DEL MARIDO POR TERCEROS

Art. 153.- Si el marido muere antes de vencido el término que le concede este Código para desconocer al hijo, o antes de que éste nazca, podrán impugnar la paternidad en los mismos términos los herederos del marido, sus ascendientes, aunque éstos no tengan parte alguna en la sucesión, y toda otra persona a quien la pretendida paternidad irrogare perjuicio actual.

Este derecho no tendrá lugar si el marido hubiere reconocido al hijo como suyo por cualquiera de los medios contemplados en este Código.

Esta acción caduca transcurridos noventa días contados desde la fecha en que los interesados supieron la muerte del padre, o en caso de haber éste desaparecido, desde el primer decreto de posesión concedida a sus herederos presuntos, o desde que supieron el nacimiento del hijo, si ocurriere después de la muerte del padre.

EXCEPCIÓN DE NO PATERNIDAD

Art. 154.- Si los interesados hubieren sido declarados herederos sin contradicción del pretendido hijo, podrán oponerle la excepción de no paternidad en cualquier tiempo en que el o sus herederos les disputaren sus derechos.

TRATO DEL HIJO DURANTE EL JUICIO

Art. 155.- Durante el juicio el hijo será considerado y tratado como del marido, pero declarada judicialmente la no paternidad, el marido o cualquier otro reclamante tendrá derecho a que la madre les indemnice de todo perjuicio que la pretendida paternidad les haya irrogado.

IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO

Art. 156.- El reconocimiento voluntario de paternidad podrá ser impugnado por el hijo, por los ascendientes del padre y por los que tuvieren interés actual, probando que el hijo no ha podido tener por padre el reconociente. Con relación al hijo la acción es imprescriptible.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Art. 157.- Los ascendientes del padre no podrán impugnar el reconocimiento, transcurridos noventa días después de aquél en que tuvieron conocimiento del acto.

Los demás interesados no podrán impugnar el reconocimiento transcurridos trescientos días después de aquél en que tuvieron interés actual en ello y pudieron hacer valer sus derechos.

ACCIÓN DE NULIDAD DEL RECONOCIMIENTO

Art. 158.- La nulidad del reconocimiento voluntario de paternidad, por vicios del consentimiento, deberá pedirla el reconociente dentro del plazo de noventa días desde que cesó o se conoció el vicio que la invalida.

SECCIÓN SEGUNDA DE LA MATERNIDAD

RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO

Art. 159.- El reconocimiento voluntario de maternidad puede efectuarse por cualquiera de las formas de reconocimiento voluntario de paternidad.

Es aplicable en este caso lo dispuesto en el artículo 145.

PRESUNCIÓN DE RECONOCIMIENTO

Art. 160.- Se presume que una mujer ha reconocido como suyo a un hijo, cuando en la partida de nacimiento aparece consignado el nombre de aquélla en concepto de madre.

DECLARACIÓN JUDICIAL DE MATERNIDAD

Art. 161.- Cuando no haya tenido lugar el reconocimiento voluntario de maternidad, el hijo tiene derecho a solicitar la declaración judicial de la misma.

La maternidad será declarada por el juez cuando aparezca probado en el proceso el hecho del parto y la identidad del hijo, o cuando resulte de la manifestación expresa o tácita de la madre, o de la posesión de estado.

En los juicios de maternidad son aplicables los artículos 148 y 150 inciso primero.

IMPUGNACIÓN DE LA MATERNIDAD

Art. 162.- La maternidad podrá ser impugnada por falso parto, o por suplantación del pretendido hijo al verdadero.

Tienen este derecho:

- 1º) El hijo;
- 2º) El verdadero padre o madre, o ambos, para conferir al hijo o a los descendientes de éste, los derechos de familia;
- 3º) La supuesta madre para desconocer al hijo que pasa por suyo;
- 4º) El cónyuge de la supuesta madre para desconocer al hijo que pasa por suyo; y,
- 5º) Toda otra persona a quien la maternidad putativa perjudique actualmente en sus derechos sobre la sucesión testamentaria o abintestato, de los supuestos padre o madre.

PLAZOS DE IMPUGNACIÓN

Art. 163.- Las personas designadas en los ordinales 3o) y 4o) del artículo precedente no podrán impugnar la maternidad después de transcurrido un año, contado desde el conocimiento de la fecha en que el hijo se hizo pasar por suyo. Con todo, en el caso de conocerse algún hecho nuevo incompatible con la maternidad putativa, podrá impugnarse por las mismas personas durante el período de noventa días contados desde el conocimiento del hecho.

Las personas mencionadas en el ordinal 5o) del artículo anterior, no podrán impugnar la maternidad, transcurridos noventa días después de aquél en que se enteren del fallecimiento de dichos padre o madre, si estuvieren presentes, o desde su regreso, si estuvieren ausentes.

Para las personas a que se refieren los ordinales 1o) y 2o) del mismo artículo, la acción es imprescriptible.

SANCIÓN POR FRAUDE

Art. 164.- A ninguno de los que hayan participado en el fraude de falso parto o de suplantación, aprovechará en manera alguna el descubrimiento de tales hechos, ni aún para ejercer sobre el hijo los derechos de autoridad parental, o para exigirle alimentos, o para sucederle en sus bienes por causa de muerte.

CAPÍTULO III

FILIACIÓN ADOPTIVA

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES COMUNES

FINALIDAD

Art. 165.- DEROGADO. (15)

CLASES DE ADOPCIÓN

Art. 166.- DEROGADO. (15)

Art. 167.- DEROGADO. (15)

GARANTÍA ESPECIAL

Art. 168.- DEROGADO. (3) (15)

ADOPCIÓN CONJUNTA Y ADOPCIÓN INDIVIDUAL

Art. 169.- DEROGADO. (15)

FINALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD PARENTAL Y DE LA TUTELA

Art. 170.- DEROGADO. (15)

REQUISITOS PARA TODO ADOPTANTE

Art. 171.- DEROGADO. (15)

PROHIBICIÓN

Art. 172.- DEROGADO. (15)

DIFERENCIA DE EDADES

Art. 173.- DEROGADO. (15)

CONSENTIMIENTO Y CONFORMIDAD

Art. 174.- DEROGADO. (15)

EXISTENCIA DE OTROS HIJOS VARIAS ADOPCIONES

Art. 175.- DEROGADO. (15)

CONVIVENCIA PARA ADOPTAR A UN MENOR DETERMINADO

Art. 176.- DEROGADO. (15)

ADOPCIÓN POR EL TUTOR

Art. 177.- DEROGADO. (15)

CONSTITUCIÓN E IRREVOCABILIDAD

Art. 178.- DEROGADO. (15)

NULIDADES

Art. 179.- DEROGADO. (15)

CONSECUENCIA DE OTRAS INFRACCIONES

Art. 180.- DEROGADO. (15)

ADOPTANTES

Art. 181.- DEROGADO. (15)

ADOPTADOS

Art. 182.- DEROGADO. (15)

ADOPTANTE INDIVIDUAL CASADO

Art. 183.- DEROGADO. (15)

**SECCIÓN SEGUNDA
ADOPCIÓN POR EXTRANJEROS****REQUISITOS ESPECIALES**

Art. 184.- DEROGADO. (3) (15)

ESTUDIOS TÉCNICOS

Art. 185.- DEROGADO. (15)

TÍTULO II

ESTADO FAMILIAR

CAPÍTULO I

CLASES DE ESTADO FAMILIAR

CONCEPTO

Art. 186.- EL ESTADO FAMILIAR ES LA CALIDAD JURÍDICA QUE TIENE UNA PERSONA EN RELACIÓN A LA FAMILIA, Y POR EL CUAL LA LEY LE ATRIBUYE DETERMINADOS DERECHOS Y DEBERES. **(16)**

EL ESTADO FAMILIAR SE PUEDE ORIGINAR POR VÍNCULO MATRIMONIAL O POR VÍNCULO PARENTAL. **(16)**

EN RELACIÓN AL MATRIMONIO, UNA PERSONA PUEDE TENER CUALQUIERA DE LOS ESTADOS FAMILIARES SIGUIENTES: **(16)**

- 1º) CASADA O CASADO, QUIEN HA CONTRAÍDO MATRIMONIO. **(16)**
- 2º) VIUDA O VIUDO, AQUEL CUYO MATRIMONIO SE HA DISUELTO POR LA MUERTE DE SU CÓNYUGE. **(16)**
- 3º) SOLTERA O SOLTERO, QUIEN NO HA CONTRAÍDO MATRIMONIO, O CUYO MATRIMONIO HA SIDO ANULADO, O DISUELTO POR DIVORCIO. **(16)**

EN RELACIÓN CON EL PARENTESCO, UNA PERSONA PUEDE TENER ESTADOS FAMILIARES TALES COMO PADRE, MADRE, HIJA O HIJO, HERMANA O HERMANO, TÍA O TÍO, SOBRINA O SOBRINO. **(16)**

CAPÍTULO II

REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

SECCIÓN PRIMERA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

OBJETO, REGISTRO CENTRAL Y REGISTROS LOCALES

Art. 187.- EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR TIENE POR OBJETO LA INSCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS CONSTITUTIVOS, MODIFICATIVOS O EXTINTIVOS DEL ESTADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS NATURALES, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. **(19)**

HABRÁ UN REGISTRO CENTRAL DEL ESTADO FAMILIAR QUE ADMINISTRARÁ, ORIENTARÁ, COORDINARÁ, Y CONTROLARÁ EL TRABAJO DE TODOS LOS REGISTROS LOCALES. **(19)**

PARA LOS ANTERIORES EFECTOS, EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES, SERÁ QUIEN CENTRALICE Y ADMINISTRE CON SISTEMAS INFORMÁTICOS MODERNOS, TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS CONSTITUTIVOS, MODIFICATIVOS O EXTINTIVOS DEL ESTADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS NATURALES Y SOBRE LOS DEMÁS HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS QUE DETERMINEN LAS LEYES. **(19)**

CORRESPONDE A LAS MUNICIPALIDADES LLEVAR EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR A NIVEL LOCAL. CADA REGISTRO DEBERÁ INGRESAR E INSCRIBIR EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS PROPORCIONADOS POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES, LOS HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS CONSTITUTIVOS, MODIFICATIVOS O EXTINTIVOS DEL ESTADO FAMILIAR, PARA QUE LA INFORMACIÓN PUEDA SER CONSULTADA Y UTILIZADA EN TIEMPO REAL, FACILITANDO A LA POBLACIÓN, LA EMISIÓN, CERTIFICACIÓN Y AUTÉNTICA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN DICHOS HECHOS Y ACTOS, SO PENA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE INEXACTITUD DE LA INFORMACIÓN POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN DICHO SISTEMA. **(19)**

LA EMISIÓN DE LAS CERTIFICACIONES Y AUTÉNTICAS A LAS QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, PODRÁ A SOLICITUD DEL INTERESADO, REALIZARSE POR EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES O POR EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR DEL RESPECTIVO MUNICIPIO. **(19)**

HECHOS Y ACTOS INSCRIBIBLES

Art. 188.- En el Registro del Estado Familiar se inscribirán los nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones, divorcios y demás hechos o actos jurídicos de las personas naturales que determine la ley.

ESTADO FAMILIAR ADQUIRIDO EN EL EXTRANJERO

Art. 189.- Los matrimonios celebrados en países extranjeros ante los Jefes de Misión Diplomática Permanente y Cónsules de Carrera, así como el régimen patrimonial del matrimonio, se inscribirán en el Registro Central del Estado Familiar.

Los matrimonios de nacionales celebrados en el extranjero ante funcionarios distintos de los mencionados en el inciso anterior, así como los nacimientos y defunciones de salvadoreños ocurridos en el extranjero, deberán registrarse en el Consulado de El Salvador que corresponda, con base en los documentos legales expedidos por las autoridades competentes del respectivo país, dejándose constancia precisa de los documentos en el asiento que al efecto se verifique en la sede consular, procediéndose en lo demás conforme se dispone en la Ley Orgánica del Servicio Consular de la República de El Salvador.

Si no se hubieren hecho las inscripciones a que se refiere el inciso anterior, los documentos acreditantes procedentes del extranjero, podrán presentarse directamente para su inscripción en la oficina del Registro Central del Estado Familiar, siempre que se encuentren debidamente autenticados, y en su caso traducidos al castellano.

OBLIGACIÓN DE INFORMAR Y PLAZO

Art. 190.- Tienen obligación de comparecer a las oficinas del Registro del Estado Familiar que corresponda, a proporcionar la información necesaria de los hechos o actos sujetos a inscripción, aquellas personas a las cuales tales hechos o actos generen derechos o deberes, quienes deberán hacerlo dentro de los quince días útiles siguientes a aquel en que ocurrieron.

Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 del presente Código.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y SANCIONES

Art. 191.- Los hechos y actos jurídicos sujetos a inscripción, deberán registrarse dentro del plazo de quince días útiles, contados desde el día siguiente de aquél en que se tenga en la oficina la información o los documentos en que aparezcan consignados los datos de los hechos constitutivos de un estado familiar, sin necesidad de calificación alguna.

Incurrirá en una sanción establecida en la Ley de la materia, el encargado del registro que no practicará la inscripción de un estado familiar dentro del plazo establecido.

La multa a que se refiere este artículo será aplicable por el superior jerárquico del encargado del Registro del Estado Familiar, conforme al procedimiento que la ley prescribe.

RESPONSABILIDAD DE LOS ENCARGADOS

Art. 192.- Los encargados de llevar el Registro del Estado Familiar serán responsables de los perjuicios que se causaren a los interesados por la omisión o inexactitud de alguna inscripción o marginación, por no asentarla en legal forma, por su falsificación y por inserción de hechos, circunstancias o declaraciones prohibidas por la ley; igual responsabilidad tendrán por las falsedades o inexactitudes que cometieren en las certificaciones que expidan, todo sin perjuicio de la responsabilidad penal.

ERRORES DEL FONDO Y OMISIONES NO SUBSANADOS EN TIEMPO

Art. 193.- Los errores de fondo y las omisiones que tuvieren las inscripciones, cuya subsanación no se pida dentro del año siguiente a la fecha en que se asentó la partida, solo podrán rectificarse en virtud de sentencia judicial o actuación notarial.

SANCIÓN POR FALTA DE AVISO

Art. 194.- La persona que debiendo dar aviso para que se efectúe alguna de las inscripciones prevenidas en este título, no lo hiciere dentro del plazo señalado, y el funcionario o notario que hubiere autorizado un matrimonio o el reconocimiento de un hijo y no remitiere dentro del término prescrito por la ley, a la oficina del Registro correspondiente, el instrumento en que conste el acto otorgado para efecto de su inscripción, incurrirán en las sanciones establecidas en la ley de la materia.

Las multas a que se refiere este artículo serán aplicadas por el respectivo funcionario del Registro del Estado Familiar, conforme al procedimiento que la ley de la materia establece.

SECCIÓN SEGUNDA PRUEBA DEL ESTADO FAMILIAR

PRUEBA PREFERENTE

Art. 195.- EL ESTADO FAMILIAR DE CASADA, CASADO, VIUDA, VIUDO, Y EL DE PADRE, MADRE, HIJA O HIJO, ASÍ COMO LOS ACTOS Y HECHOS JURÍDICOS QUE LO MODIFIQUEN, DEBERÁN PROBARSE CON LA CERTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE MATRIMONIO, DIVORCIO, NACIMIENTO O DE DEFUNCIÓN SEGÚN EL CASO.
(16)

AUTENTICIDAD DE LOS ASIENTOS

Art. 196.- Se presume legalmente la autenticidad de los hechos y actos jurídicos, tal como aparecen consignados en las correspondientes inscripciones, siempre que éstas se hubieren asentado de conformidad a la ley.

Los registros hacen fe, de las declaraciones hechas por las personas que hubieren suministrado los datos para el asentamiento de inscripciones, pero no garantizan la veracidad de esas declaraciones en ninguna de sus partes.

Las certificaciones de las inscripciones extendidas de conformidad con la ley por el funcionario encargado, hacen plena prueba.

No obstante, las certificaciones del Registro podrán rechazarse probando que la persona a que el documento se refiere no es la misma a la que se pretende aplicar, o la falsedad de las declaraciones en ellas consignadas.

OMISIÓN O DESTRUCCIÓN DE INSCRIPCIONES

Art. 197.- Cuando se hubiere omitido o destruido la inscripción de un estado familiar, podrá éste declararse judicialmente probando los hechos o actos jurídicos que lo originaron o la posesión notoria del mismo.

Si se omitiere o destruyere la inscripción de la muerte de una persona, también podrá establecerse judicialmente.

Para tales efectos, el encargado del Registro del Estado Familiar competente expedirá una constancia que acredite la omisión o la destrucción.

POSESIÓN DEL ESTADO FAMILIAR DEL HIJO

Art. 198.- La posesión del estado familiar de hijo consiste en un conjunto de hechos que armónicamente considerados, demuestran la filiación de una persona con su progenitor y el parentesco de ella con la familia a que pertenece. Para establecer la posesión de dicho estado deberá comprobarse, entre otros hechos, que el padre ha tratado al hijo como tal, que ha proveído a su crianza y educación, presentándolo en ese carácter a sus parientes y amigos, habiendo éstos y el vecindario del lugar de residencia del hijo reconocido aquel estado, y durado tres años por lo menos, salvo que antes de cumplirse este plazo hubiere fallecido uno u otro.

POSESIÓN DEL ESTADO FAMILIAR DE CASADO

Art. 199.- La posesión del estado familiar de casado, consiste en haberse tratado el hombre y la mujer como cónyuges y en ese carácter haber sido reconocidos por sus parientes, amigos y vecinos; debiendo haber durado dicha posesión por lo menos tres años consecutivos, a menos que antes de haberse cumplido el término, hubiere fallecido uno de ellos.

En todo caso deberá comprobarse que los documentos en que conste la celebración del matrimonio se han destruido o extraviado.

CAPÍTULO III

REGISTRO DE RÉGIMENES PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO

OBJETO

Art. 200.- En el Registro de Régimenes Patrimoniales del Matrimonio se inscribirá, conservará y suministrará la información relativa a dichos regímenes, así como a su modificación, sustitución o extinción.

NORMA SUPLETORIA

Art. 201.- Lo dispuesto en el capítulo anterior para el estado familiar y su registro, se aplicará en lo que fuere conducente, al Registro de Régimenes Patrimoniales del Matrimonio.

LIBRO TERCERO DE LAS RELACIONES PATERNO FILIALES

TÍTULO I DERECHOS Y DEBERES DE LOS HIJOS

CAPÍTULO ÚNICO

IGUALDAD

Art. 202.- Todos los hijos, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, tienen los mismos derechos y deberes familiares.

DERECHOS

Art. 203.- Son derechos de los hijos:

- 1º) Saber quiénes son sus padres, ser reconocidos por éstos y llevar sus apellidos;
- 2º) Vivir en el seno de su familia, sin que pueda separárseles de sus padres sino por causas legales;
- 3º) Recibir de sus padres: crianza, educación, protección, asistencia y seguridad; y,
- 4º) Heredar de sus padres, en igualdad de condiciones cualquiera que sea su filiación.

DEBERES

Art. 204.- Son deberes de los hijos:

- 1º) Guardar a sus padres respeto y consideración;
- 2º) Obedecerles mientras estén bajo su cuidado personal;
- 3º) Asistirlos en todas las circunstancias que lo requieran, especialmente en la ancianidad. Esta obligación se deberá cumplir en relación a los demás ascendientes, cuando falten los padres; y,
- 4º) Contribuir a los gastos familiares, según sus posibilidades, mientras convivan con sus padres.

OTROS DERECHOS Y DEBERES

Art. 205.- La enumeración de los derechos y deberes señalados en este título, no excluyen los demás reconocidos o establecidos en las convenciones internacionales, en este código y demás leyes de protección del menor y de las personas ADULTAS MAYORES. (5)

TÍTULO II DE LA AUTORIDAD PARENTAL

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CONCEPTO

Art. 206.- La autoridad parental es el conjunto de facultades y deberes, que la ley otorga e impone al padre y a la madre sobre sus hijos menores de edad o declarados incapaces, para que los protejan, eduquen, asistan y preparen para la vida, y además, para que los representen y administren sus bienes.

Hijo de familia es quien está sujeto a autoridad parental.

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD PARENTAL

Art. 207.- El ejercicio de la autoridad parental corresponde al padre y a la madre conjuntamente, o a uno solo de ellos cuando falte el otro.

Se entenderá que falta el padre o la madre, no sólo cuando hubiere fallecido o se le hubiere declarado muerto presunto, sino cuando se ausentare del territorio nacional, se ignore su paradero o estuviere imposibilitado.

Cuando los padres ejerzan conjuntamente la autoridad parental, podrán designar de común acuerdo quien de ellos representará a sus hijos menores o declarados incapaces, así como quien administrará sus bienes. El acuerdo respectivo se otorgará en escritura pública o en acta ante el Procurador General de la República o ante los Procuradores Auxiliares Departamentales.

Cuando la filiación del hijo existiere solo respecto de alguno de los padres, éste ejercerá la autoridad parental. Si se hubiere establecido con oposición del otro progenitor, éste no ejercerá la autoridad parental; no obstante, el juez, atendiendo al interés del hijo, podrá autorizar que la ejerza, cuando a su vez faltare el otro progenitor.

ACTOS DE UNO DE LOS PADRES

Art. 208.- Los actos realizados en ejercicio de la autoridad parental por uno de los padres, en situaciones de suma urgencia en consideración a los usos o en circunstancias especiales, se presumirá que cuentan con el consentimiento del otro.

Esta presunción no operará cuando el menor necesite salir del país.

DESACUERDO DE LOS PADRES

Art. 209.- Si surgieren desacuerdos en el ejercicio de la autoridad parental, cualquiera de los padres podrá acudir al juez, quien procurará avenirles, y si esto no fuere posible resolverá sin formación de juicio lo que más convenga al interés del hijo.

Si los desacuerdos fueren reiterados o existiere causa de gravedad que entorpeciere el ejercicio de la autoridad parental, podrá el juez atribuirle total o parcialmente a uno de los padres. Esta medida tendrá vigencia durante el período que fije el juez, el cual no podrá exceder de dos años.

PADRES MENORES DE EDAD

Art. 210.- El padre y la madre menores de edad, ejercerán la autoridad parental sobre sus hijos, pero la administración de los bienes y la representación en actos y contratos relacionados con los mismos, será asumida por los que tuvieren la autoridad parental o la tutela de los padres, quienes la ejercerán conjuntamente. En caso de desacuerdo la decisión se tomará por mayoría.

Si quienes tienen la autoridad parental, incurrieren en frecuentes desacuerdos que entorpecieren gravemente el ejercicio de la administración y representación señaladas, el juez a petición de persona interesada o del Procurador General de la República, designará un administrador observando lo dispuesto en el artículo 277.

También se aplicará la regla anterior, si el tutor no fuere común a ambos padres.

Si sólo uno de los padres fuere menor, el mayor administrará los bienes y representará al hijo en los actos y contratos expresados.

CAPÍTULO II CUIDADO PERSONAL

CRIANZA

Art. 211.- El padre y la madre deberán criar a sus hijos con esmero; proporcionarles un hogar estable, alimentos adecuados y proveerlos de todo lo necesario para el desarrollo normal de su personalidad, hasta que cumplan su mayoría de edad.

En la función de cuidado debe tenerse en cuenta las capacidades, aptitudes e inclinaciones del hijo.

CUANDO SE TRATARE DE HIJAS E HIJOS CON DISCAPACIDAD Y ÉSTOS ALCANCEN LA MAYORÍA DE EDAD, CONTINUARÁN GOZANDO DEL DERECHO DE ALIMENTOS NECESARIOS ACORDE A SU CONDICIÓN, SIEMPRE QUE DICHA CAPACIDAD ESPECIAL, SEA ACREDITADA ANTE LA AUTORIDAD LEGAL COMPETENTE. **(10)**

Si el hijo llega a su mayoría de edad y continúa estudiando con provecho tanto en tiempo como en rendimiento, deberán proporcionársele los alimentos hasta que concluya sus estudios o haya adquirido profesión o oficio.

El padre y la madre, estarán obligados a cuidar de sus hijos desde su concepción.

DEBER DE CONVIVENCIA

Art. 212.- El hijo bajo autoridad parental deberá vivir en compañía de su padre y madre o con aquél de ellos que lo tenga bajo su cuidado personal. No puede, sin su permiso dejar el hogar y si lo hiciere podrán los padres hacerlo volver usando el procedimiento establecido en la ley, si fuere necesario.

Lo anterior es aplicable al caso en que el cuidado personal del hijo haya sido confiado por los padres o el juez, a otra persona.

FORMACIÓN MORAL Y RELIGIOSA

Art. 213.- El padre y la madre dirigirán la formación de sus hijos dentro de los cánones de moralidad, solidaridad humana y respeto a sus semejantes; fomentarán en ellos la unidad de la familia y su responsabilidad como hijos, futuros padres y ciudadanos.

La formación religiosa de los hijos será decidida por ambos padres.

EDUCACIÓN

Art. 214.- Es deber del padre y de la madre educar y formar integralmente a sus hijos, facilitarles el acceso al sistema educativo y orientarles en la elección de una profesión u oficio.

Si el hijo adoleciere de deficiencia física o mental, deberán los padres procurarle educación especial y si fuere discapacitado o minusválido, procurarle además, su rehabilitación. En todo caso, velarán por su bienestar, aun cuando hubiere alcanzado la mayoría de edad. Si la deficiencia física o mental le impidiere valerse por sí mismo.

Cuando en el hijo menor de edad exista causa de incapacidad y se prevea razonablemente que continuará después de alcanzar su mayoría de edad, antes de que la cumpla, los padres deberán solicitar la declaratoria correspondiente, para los efectos previstos en este Código.

CORRECCIÓN Y ORIENTACIÓN

Art. 215.- Es deber del padre y de la madre corregir adecuada y moderadamente a su hijos y auxiliarse, en caso necesario, de profesionales especializados o de los servicios de orientación sicopedagógica a cargo de centros educativos o entidades de protección de menores o de la familia.

En caso que la conducta del hijo no pudiese ser corregida por los medios indicados, el padre o la madre podrán solicitar al juez que provea medidas tutelares, quien para decidir, ordenará los estudios técnicos del grupo familiar que estime convenientes.

ACUERDOS SOBRE EL CUIDADO PERSONAL

Art. 216.- El padre y la madre deberán cuidar de sus hijos. No obstante, en situaciones de suma urgencia podrán, de común acuerdo, confiar tal cuidado mientras dure la misma a persona de su confianza, sin que por tal razón desatiendan sus deberes paternos; esta facultad la tiene también el padre o la madre que ejerza exclusivamente el cuidado personal del hijo.

Cuando los padres no hicieren vida en común, se separaren o divorciaren, el cuidado personal de los hijos lo tendrá cualquiera de ellos, según lo acordaren.

De no mediar acuerdo entre los padres o ser éste atentatorio al interés del hijo, el juez confiará su cuidado personal al padre o madre que mejor garantice su bienestar, tomando en cuenta su edad y las circunstancias de índole moral, afectiva, familiar, ambiental y económica que concurren en cada caso. Se oirá al hijo si fuere mayor de doce años y, en todo caso, al Procurador General de la República, quien fundamentará su opinión en estudios técnicos.

Si ninguno de los padres fuere apto para cuidar al hijo, podrá el juez confiarlo a otra persona aplicándose en este caso lo dispuesto en el artículo 219.

SIEMPRE QUE LA O EL JUEZ CONFÍE EL CUIDADO PERSONAL DE LA O EL HIJO, FIJARÁ LA CUANTÍA DE LOS ALIMENTOS CON QUE LOS PADRES DEBERÁN CONTRIBUIR, DE ACUERDO A SUS RESPECTIVAS POSIBILIDADES; ASÍ MISMO, ESTABLECERÁ QUE A LA O EL CÓNYUGE AL QUE SE LE HUBIERE CONFIADO EL CUIDADO PERSONAL DE LAS Y LOS HIJOS, LE CORRESPONDERÁ EL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA PRESENTE LEY. (12)

RELACIONES Y TRATO

Art. 217.- El padre y la madre, aunque no convivieren con su hijo, deberán mantener con él las relaciones afectivas y el trato personal que favorezca el normal desarrollo de su personalidad. Cuando sea necesario, el juez podrá regular el tiempo, modo y lugar que para ello se requiera.

Quien tuviere el cuidado personal del hijo no podrá impedir tales relaciones y trato, a no ser que a criterio del juez se estimaren contrarios al interés del hijo. Si no lo fueren el juez tomará las medidas que mejor protejan tal interés.

También tienen derecho de comunicación con el hijo los abuelos, los parientes y otras personas que demuestren un interés legítimo, siempre que esto no resultare perjudicial a la salud física y mental del menor.

ASISTENCIA

Art. 218.- Los padres deben asistir moral y económicamente a sus hijos sujetos a autoridad parental, que se hallaren involucrados en procesos de menores o penales y suministrar los gastos que requiera su asistencia legal.

DESAMPARO DEL HIJO

Art. 219.- En caso de muerte, enfermedad grave de sus padres o cuando por cualquier otra causa el hijo quedare desamparado, el juez con la urgencia del caso confiará temporalmente su cuidado a cualesquiera de sus abuelos y si ello no fuere posible, recurrirá a una entidad especializada.

El juez, en la elección de la persona preferirá a los consanguíneos de grado más próximo y en especial a los ascendientes, tomando en cuenta el interés del hijo.

HIJOS AUSENTES DEL HOGAR

Art. 220.- Siempre que el hijo bajo autoridad parental o cuidado personal, se ausentare del hogar y se hallare en urgente necesidad y no pudiese ser asistido por sus padres ni por quien lo tuviere bajo su cuidado personal, se presumirá la autorización de éstos para que cualquier persona le suministre alimentos.

El que hiciere los suministros, avisará lo más pronto que fuere posible a los padres o al que tuviere el cuidado personal o al Procurador General de la República o Procuradores Auxiliares Departamentales y tendrá derecho en ese caso, a que se le restituya el valor de lo suministrado.

GASTOS OCASIONADOS POR LOS HIJOS

Art. 221.- Los gastos que ocasiona el cumplimiento de los deberes contemplados en este capítulo, corresponden a ambos padres en proporción a sus recursos económicos, o a uno sólo de ellos por insuficiencia del otro.

Si el hijo tuviere bienes propios o rentas, deberá proveer especialmente a sus gastos de crianza y educación y contribuir a los gastos de su familia.

Los abuelos están obligados de acuerdo a sus posibilidades económicas a asumir los gastos de crianza y demás contemplados en este capítulo, cuando los padres carezcan de recursos.

RESPONSABILIDAD PENAL

Art. 222.- Los padres que abandonaren moral y materialmente a sus hijos, o dejaren de cumplir los deberes inherentes a la autoridad parental o abusaren en el ejercicio del derecho de corrección, serán responsables conforme a la legislación penal, sin perjuicio de exigírseles el cumplimiento de los deberes que este Código y demás leyes establecen.

CAPÍTULO III REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN DE LOS HIJOS

Art. 223.- El padre y la madre que ejercieren la autoridad parental, representarán a sus hijos menores o incapaces y velarán por la conservación o defensa de los que hubieren concebido. El padre o la madre a quien se hubiere confiado mediante resolución judicial el cuidado personal del hijo, tendrá exclusivamente la representación legal del mismo.

Se exceptúan de tal representación:

- 1º) Los actos relativos a derechos de la personalidad y otros que el hijo, de acuerdo con la ley y las condiciones de su madurez, pueda realizar por sí mismo;
- 2º) Los actos relativos a bienes excluidos de la administración de los padres; y,
- 3º) Cuando existieren intereses contrapuestos entre uno o ambos padres y el hijo.

REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Art. 224.- El Procurador General de la República tendrá la representación legal de los menores huérfanos de padre y madre o de filiación desconocida, o abandonados, de los mayores incapaces, de los hijos que por causas legales hubieren salido de la autoridad parental y de los que por cualquier motivo carecieren de representante legal, mientras no se les provea de tutor. También la tendrá en el caso del ordinal 3º del artículo anterior.

REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ADMINISTRADOR

Art. 225.- La persona designada conforme a las reglas de este título sólo para administrar bienes del hijo, tendrá la representación legal de éste en los actos relativos a dichos bienes.

CAPÍTULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES

DILIGENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN

Art. 226.- Los padres administrarán y cuidarán los bienes de los hijos que estén bajo su autoridad parental; realizarán todos los actos administrativos ordinarios a fin de conservar y hacer más productivos dichos bienes y serán solidariamente responsables hasta de la culpa leve.

BIENES QUE LOS PADRES NO ADMINISTRAN

Art. 227.- Los padres no administrarán los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado, cuando el donante o testador así lo hubiere dispuesto expresamente, en cuyo caso la administración estará a cargo de la persona designada por el donante o testador y, en su defecto, por la que nombrare el juez.

Si sólo a uno de los padres se hubiere impuesto la prohibición, la administración corresponderá al otro.

El padre o la madre tampoco administrarán los bienes que hubieren pasado al hijo por indignidad o incapacidad del padre o de la madre o de ambos.

BIENES ADMINISTRADOS POR EL HIJO

Art. 228.- El hijo administrará los bienes adquiridos con su trabajo o industria, si ya hubiere cumplido catorce años de edad.

DISPENSA DE INVENTARIO O CAUCIÓN

Art. 229.- Los padres no estarán obligados a inventariar los bienes que administren. No obstante, deberán llevar una descripción circunstanciada de dichos bienes desde que empiecen a administrarlos.

Tampoco estarán obligados a prestar caución de conservación y restitución. Sin embargo, cuando la administración ejercida pusiere en peligro los bienes del hijo, el juez, de oficio o a petición del menor o del Procurador General de la República o de los parientes de aquél hasta el cuarto grado de consanguinidad, podrá exigir caución y dictar las medidas que estime necesarias para la seguridad de los bienes o nombrar otro administrador.

NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Art. 230.- Los padres no podrán transferir el dominio de los bienes corporales e incorporeales del hijo, inclusive los adquiridos con su trabajo o industria, ni hipotecar sus bienes ni adquirir créditos, sin que preceda autorización del juez, quien sólo la dará cuando se acredite la necesidad o la utilidad manifiesta de la operación.

SI LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL FUERE PARA VENDER, LA VENTA SE HARÁ EN PÚBLICA SUBASTA Y EL PRECIO DE LA MISMA NO PODRÁ SER INFERIOR AL VALOR QUE LOS PERITOS ASIGNAREN A LOS BIENES. **(13)**

La venta de los bienes muebles cuyo valor no exceda de un mil colones, no requerirá autorización judicial. Tampoco la requerirá el arrendamiento de los bienes, sea de la clase que fueren; pero el plazo del arrendamiento no deberá exceder de tres años, ni el que faltare para que el hijo cumpla la mayoría de edad, salvo lo dispuesto por leyes especiales.

MANEJO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN

Art. 231.- Los padres deberán invertir el producto de la venta o el monto del crédito en aquello que el juez autorice y el saldo, si lo hubiere, depositarlo de inmediato en una institución de crédito a favor del menor y utilizarlo para lo que mejor convenga a éste, todo lo cual comprobarán al Procurador General de la República.

Los padres que destinaren el producto de la venta o el monto del crédito a fines diferentes de los autorizados, serán responsables conforme a la ley y deberán indemnizar al hijo por los daños que le causaren.

PROHIBICIONES ESPECIALES

Art. 232.- Los padres no podrán repudiar una donación, herencia o legado a favor del hijo, si no es con autorización judicial, ni aceptar una herencia que se le hubiere diferido, sino con beneficio de inventario.

En ningún caso podrán obligar al hijo como codeudor o fiador.

DESTINO DE LOS FRUTOS

Art. 233.- Pertenecen al hijo los frutos de todos sus bienes. Si los padres carecieren de recursos económicos o éstos fueren insuficientes, deberán destinar de los frutos de los bienes que administren, las sumas necesarias para los gastos de crianza y educación del hijo, y si éste conviviere con ellos, también para los gastos de la familia.

Cuando la administración sea ejercida por otra persona, ésta deberá entregar a los padres o a quien tuviere el cuidado personal del hijo, la parte de los frutos necesarios para los fines indicados.

RETRIBUCIÓN POR ACTOS DE ADMINISTRACIÓN

Art. 234.- El padre y la madre que ejercieren una administración complicada o de difícil manejo, o que demandare atención permanente, tendrán derecho a percibir

una retribución económica que será fijada por el juez, tomando en cuenta la cuantía de los bienes administrados y la atención o el esfuerzo que requiera su administración.

PRIVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Art. 235.- El padre y la madre serán privados de la administración de los bienes del hijo, cuando fueren culpables de dolo o de negligencia grave, en cuyo caso, la administración será ejercida por la persona que nombre el juez. Si sólo uno de ellos fuere el culpable, el otro conservará la administración.

ADMINISTRACIÓN POR TERCERO

Art. 236.- El administrador nombrado de conformidad a las reglas de este título, estará sujeto a los deberes y prohibiciones impuestas a los padres para la administración de los bienes del hijo y además, tendrá las facultades y los deberes de los tutores.

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O DEL ADMINISTRADOR

Art. 237.- El hijo de familia, fuera del caso contemplado en el artículo 228 de este Código, no podrá celebrar ningún acto o contrato sin la autorización de los padres o de la persona que en su defecto ejerza la administración; si lo hiciere, no será obligado sino hasta concurrencia del beneficio que haya reportado de ellos y responderá con los bienes que hubiere adquirido mediante su trabajo o industria.

Los actos o contratos que el hijo de familia celebre con autorización de sus padres o de la persona que ejerza la administración, o que éstos ratificaren, obligarán directamente a los padres o al administrador y subsidiariamente al hijo, hasta concurrencia del beneficio que éste hubiere reportado.

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL QUE ESTA POR NACER

Art. 238.- Los padres o la madre en su caso, administrarán los bienes que eventualmente pertenecerán al hijo que está por nacer, con las mismas facultades y restricciones impuestas en este capítulo, en lo que fuere aplicable.

CAPÍTULO V EXTINCIÓN, PÉRDIDA, SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA DE LA AUTORIDAD PARENTAL

CAUSAS DE EXTINCIÓN

Art. 239.- La autoridad parental se extingue por las siguientes causas:

- 1ª) Por la muerte real o presunta de los padres o por la del hijo;
- 2ª) Por la adopción del hijo, salvo en el caso del inciso segundo del artículo 170;
- 3ª) Por el matrimonio del hijo; y,
- 4ª) Por haber cumplido el hijo la mayoría de edad.

CAUSAS DE PÉRDIDA

Art. 240.- El padre, la madre o ambos perderán la autoridad parental sobre todos sus hijos, por cualquiera de las causas siguientes:

- 1ª) Cuando corrompieren a alguno de ellos o promovieren o facilitaren su corrupción;
- 2ª) Cuando abandonaren a alguno de ellos sin causa justificada;
- 3ª) Cuando incurrieren en alguna de las conductas indicadas en el artículo 164; y,
- 4ª) Cuando fueren condenados como autores o cómplices de cualquier delito doloso, cometido en alguno de sus hijos.

CAUSAS DE SUSPENSIÓN

Art. 241.- El ejercicio de la autoridad parental se suspenderá al padre, o a la madre o a ambos, por las siguientes causas:

- 1ª) Por maltratar habitualmente al hijo o permitir que cualquier otra persona lo haga;
- 2ª) Por alcoholismo, drogadicción o inmoralidad notoria que ponga en peligro la salud, la seguridad o la moralidad del hijo;
- 3ª) Por adolecer de enfermedad mental; y,
- 4ª) Por ausencia no justificada o enfermedad prolongada.

SENTENCIA JUDICIAL

Art. 242.- La pérdida y la suspensión de la autoridad parental deberán decretarse por sentencia judicial, a petición de cualquier consanguíneo del hijo, o del Procurador General de la República o por el juez de oficio. En la sentencia de suspensión el juez podrá ordenar, según el caso, que el padre o madre a quien se le suspenda la autoridad parental se someta a tratamientos sicopedagógicos o médicos, a fin de propiciar su curación o regeneración.

Si la pérdida o suspensión de la autoridad parental se decretare contra uno de los padres, aquélla será ejercida plenamente por el otro, pero si a ambos padres se les privare o se les suspendiere tal autoridad, se nombrará tutor como se establece en el Art. 299 del presente Código.

MEDIDA CAUTELAR

Art. 243.- Mientras se tramita el juicio de pérdida o de suspensión de la autoridad parental, el juez podrá ordenar la exclusión del ámbito familiar del padre o madre que haya dado lugar a la demanda y podrá decidir el cuidado del hijo a cualquiera de sus parientes más próximos, o en su defecto, a persona confiable y a falta de unos y otra, el ingreso del hijo a una entidad de protección, procurando en todo caso lo más conveniente para éste.

RECUPERACIÓN DE LA AUTORIDAD PARENTAL

Art. 244.- La autoridad parental podrá recuperarse cuando cesaren las causas que dieron lugar a la suspensión, o cuando se probare la regeneración o la curación del padre o de la madre.

PRÓRROGA Y RESTABLECIMIENTO DE LA AUTORIDAD PARENTAL

Art. 245.- No obstante lo dispuesto en la causal 4ª) del artículo 239 de este Código, la autoridad parental quedará prorrogada por ministerio de ley, si el hijo por motivo de enfermedad hubiere sido declarado incapaz antes de llegar a su mayoría de edad.

La autoridad parental se restablecerá sobre el hijo mayor de edad incapaz, que no hubiere fundado una familia.

La autoridad parental prorrogada o restablecida, será ejercida por los padres a quienes correspondería si el hijo fuere menor de edad, y se extinguirá, perderá o suspenderá por las causas establecidas en este capítulo, en lo aplicable.

PERSISTENCIA DE LOS DEBERES ECONÓMICOS

Art. 246.- La pérdida de la autoridad parental o la suspensión de su ejercicio, no eximen a los padres del cumplimiento de los deberes económicos que este Código les impone para con sus hijos.

LIBRO CUARTO ASISTENCIA FAMILIAR Y TUTELA

TÍTULO I LOS ALIMENTOS

CAPÍTULO ÚNICO

CONCEPTO

Art. 247.- Son alimentos las prestaciones que permiten satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario.

SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA

Art. 248.- Se deben recíprocamente alimentos:

- 1º) Los cónyuges;
- 2º) Los ascendientes y descendientes; hasta el segundo grado de consanguinidad; y,
- 3º) Los hermanos.

ALIMENTOS A LA MUJER EMBARAZADA

Art. 249.- Definida la paternidad conforme lo establece este Código, toda mujer embarazada tiene derecho a exigir alimentos al padre de la criatura, durante todo el tiempo del embarazo y los tres meses siguientes al parto, incluidos los gastos del parto.

ALIMENTARIO CON VARIOS TÍTULOS

Art. 250.- Quien reúna varios títulos para pedir alimentos, sólo podrá hacer uso de uno de ellos, debiendo exigirlos en primer lugar al cónyuge y en su defecto, al alimentante que esté con el alimentario en más cercano grado de parentesco.

PLURALIDAD DE ALIMENTARIOS

Art. 251.- Cuando dos o más alimentarios tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y los recursos de ésta no fueren suficientes para pagar a todos, se deberán en el orden siguiente:

- 1º) Al cónyuge y a los hijos;

2º) A los ascendientes y a los demás descendientes; hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad;

3º) A los hermanos.

No obstante, el juez podrá distribuir los alimentos a prorrata de acuerdo con las circunstancias del caso.

PLURALIDAD DE ALIMENTANTES

Art. 252.- Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos por un mismo título, el pago de los mismos será proporcional a la capacidad económica de cada quien; sin embargo, en caso de urgente necesidad el tribunal podrá obligar a uno solo de los alimentantes a que los preste en su totalidad, sin perjuicio del derecho de éste a reclamar a los demás obligados la parte que les correspondiere pagar. En la sentencia se establecerá el monto de la cuantía que le corresponderá pagar a cada uno, dicha sentencia tendrá fuerza ejecutiva.

EXIGIBILIDAD

Art. 253.- La obligación de dar alimentos es exigible desde que los necesita el alimentario, pero se deberán desde la fecha de la interposición de la demanda.

SOLVENCIA DE PRESTACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA

Art. 253-A.- TODA PERSONA NATURAL MAYOR DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD PARA EFECTOS DE LA EXTENSIÓN O RENOVACIÓN DE PASAPORTE, LICENCIA DE CONDUCIR, TARJETA DE CIRCULACIÓN Y LICENCIA PARA TENENCIA Y PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, ASÍ COMO PARA LA CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS MERCANTILES, DEBERÁ ESTAR SOLVENTE DE LA OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR EL DERECHO DE HABITACIÓN SOBRE UN INMUEBLE PARA LA VIVIENDA FAMILIAR, O EN SU DEFECTO, DE LA CUOTA PARA VIVIENDA Y POR OTRA PARTE DE PRESTACIÓN DE ALIMENTOS; DETERMINADA EN EL PRIMER CASO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 111 DE ESTA LEY, Y EN EL SEGUNDO CON BASE A RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA O CONVENIO CELEBRADO ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA O FUERA DE ELLA, SEGÚN SEA EL CASO. LAS OFICINAS COMPETENTES PREVIO A LA EXTENSIÓN DE DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN CONSTATAR LA SOLVENCIA DE DICHA OBLIGACIÓN. **(6) (12)**

LA SOLVENCIA A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR SERÁ CONFIRMADA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUIEN DEBERÁ ADMINISTRAR EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DEBIENDO ACTUALIZARLO Y CONSOLIDARLO CON LA PERIODICIDAD NECESARIA PARA GARANTIZAR SU EFECTIVIDAD Y EVITAR CUALQUIER VIOLACIÓN A DERECHOS. PARA ESTE FIN, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MANTENDRÁ DICHO REGISTRO

EN LÍNEA CON LAS OFICINAS ENCARGADAS DE EXTENDER LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL INCISO ANTERIOR. **(6)**

PARA LOS EFECTOS DEL REGISTRO EN MENCIÓN, LOS TRIBUNALES DE FAMILIA Y LOS JUZGADOS DE PAZ, DEBERÁN BRINDAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA PERIODICIDAD QUE ÉSTA DETERMINE. **(6)**

EN CASO DE FALLA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEBERÁ GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN MENCIÓN CON MEDIDAS ALTERNAS O SISTEMAS PARALELOS DE RESPALDO QUE SEAN NECESARIOS. **(6)**

PARA LA OBTENCIÓN DE LA SOLVENCIA QUE EXIMA DE LA OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR EL DERECHO DE HABITACIÓN SOBRE UN INMUEBLE PARA LA VIVIENDA FAMILIAR, BASTARÁ LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46 DE LA PRESENTE LEY, O ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE LA CUOTA PARA VIVIENDA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 111 DE LA MISMA LEY. **(12)**

LA INFRACCIÓN A LO PREVISTO EN ESTE ARTÍCULO HARÁ INCURRIR AL FUNCIONARIO O EMPLEADO RESPONSABLE EN LAS SANCIONES PENALES CORRESPONDIENTES. **(6)**

PROPORCIONALIDAD

Art. 254.- Los alimentos se fijarán por cada hijo, sin perjuicio de las personas establecidas en el Art. 251 del presente Código, en proporción a la capacidad económica de quien esté obligado a darlos y a la necesidad de quien los pide. Se tendrá en cuenta la condición personal de ambos y las obligaciones familiares del alimentante.

ALIMENTOS PROVISIONALES

Art. 255.- Mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez podrá ordenar que se den provisionalmente desde que se ofrezca fundamento razonable para ello, sin perjuicio de su restitución si la persona de quien se demandan obtuviere sentencia absolutoria. No habrá derecho de restitución contra el que de buena fe hubiere intentado la demanda.

PAGO ANTICIPADO Y SUCESIVO

Art. 256.- Las pensiones alimenticias se pagarán mensualmente en forma anticipada y sucesiva, pero el juez, según las circunstancias podrá señalar cuotas por períodos más cortos. Para los herederos del alimentario, no habrá obligación de devolver lo que éste hubiere recibido anticipadamente a título de alimentos.

PAGO EN ESPECIE

Art. 257.- Se podrá autorizar el pago de la obligación alimenticia, en especie o en cualquier otra forma, cuando a juicio prudencial del juez hubiere motivos que lo justificaren.

RESTRICCIÓN MIGRATORIA

Art. 258.- EL TRIBUNAL DE FAMILIA, DE PAZ O EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA A PETICIÓN DE PARTE, PODRÁ ORDENAR QUE UNA PERSONA OBLIGADA AL PAGO DE ALIMENTOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS, POR SENTENCIA, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O CONVENIO, NO PUEDA SALIR DEL PAÍS MIENTRAS NO CAUCIONE PREVIA Y SUFICIENTEMENTE DICHA OBLIGACIÓN. LA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENE LA RESTRICCIÓN MIGRATORIA DEBERÁ SER EMITIDA DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES A LA PRESTACIÓN DE LA SOLICITUD. **(6)**

EL INCISO ANTERIOR, TAMBIÉN SERÁ APLICABLE A QUIEN INCUMPLIERE LA OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR EL DERECHO DE HABITACIÓN SOBRE UN INMUEBLE PARA LA VIVIENDA FAMILIAR O CON EL PAGO DE LA CUOTA PARA VIVIENDA, SEGÚN SEA EL CASO, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 111 DE ESTA LEY. **(12)**

DURACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTARIA

Art. 259.- Los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos por toda la vida del alimentario, siempre que persistan las circunstancias que legitimaron la demanda.

Podrá modificarse la pensión alimenticia si cambiaren la necesidad del alimentario o las posibilidades económicas del alimentante.

INALIENABILIDAD E IRRENUNCIABILIDAD

Art. 260.- EL DERECHO A PEDIR ALIMENTOS ES INALIENABLE E IRRENUNCIABLE, PERO LAS PENSIONES ALIMENTICIAS ATRASADAS PODRÁN COMPENSARSE. **(14)**

El obligado a dar los alimentos no podrá oponer en compensación al alimentario lo que éste le deba.

PRESCRIPCIÓN

Art. 261.- EL DERECHO A COBRAR LAS PENSIONES ALIMENTICIAS ATRASADAS ES IMPRESCRIPTIBLE. **(14)**

INEMBARGABILIDAD

Art. 262.- La pensión alimenticia es su totalidad está exenta de embargo.

CONVENIOS ANTE EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y RESOLUCIONES

Art. 263.- Tendrán fuerza ejecutiva los convenios sobre alimentos celebrados entre el alimentante y el alimentado ante el Procurador General de la República o los Procuradores Auxiliares Departamentales.

También tendrán fuerza ejecutiva las resoluciones de la Procuraduría General de la República, que fijen pensiones alimenticias.

PREFERENCIA Y RETENCIÓN DE SALARIOS

Art. 264.- Las pensiones alimenticias gozarán de preferencia en su totalidad y cuando afecten sueldos, salarios, pensiones, indemnizaciones u otro tipo de emolumentos o prestaciones de empleados o trabajadores públicos o privados, se harán efectivas por el sistema de retención, sin tomar en cuenta las restricciones que sobre embargabilidad establezcan otras leyes. La retención ordenada deberá acatarse inmediatamente por la persona encargada de hacer los pagos y, de no cumplirla, será solidariamente responsable con el obligado al pago de las cuotas alimenticias no retenidas, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurriere por su desobediencia.

El envío de las referidas retenciones deberá hacerse por la persona encargada, dentro de los tres días hábiles siguientes del pago del salario respectivo.

LAS CUOTAS ALIMENTICIAS SON MATERIA DE ORDEN PÚBLICO. (8)

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA DEMANDA

Art. 265.- Podrá pedirse la anotación preventiva de la demanda de alimentos en el registro correspondiente.

El juez la ordenará al tener conocimiento de la existencia de bienes o derechos inscritos a favor del alimentante, en cualquier registro público.

EFFECTOS DE LA ANOTACIÓN

Art. 266.- La anotación preventiva de la demanda anula cualquier enajenación posterior a la misma y sus efectos durarán hasta que por decreto judicial se ordene la cancelación.

Sin embargo, no habrá nulidad en la enajenación si ésta se verificare por remate o adjudicación judicial, siempre que la anotación preventiva de la demanda de alimentos sea posterior a la fecha en que se promovió la ejecución o las diligencias que dieron origen a la enajenación.

CANCELACIÓN

Art. 267.- El juez ordenará de oficio la cancelación de la anotación preventiva de la demanda cuando se absolviera al demandado o se le presente por el alimentante garantía suficiente que cubra la pensión alimenticia fijada por resolución judicial, por todo el tiempo que faltare para que el menor alimentario llegue a su mayoría de edad, o por período no inferior a cinco años a las personas establecidas en el Art. 248 de este Código.

También procederá dicha cancelación cuando se consignare la cantidad de dinero suficiente para el pago de los alimentos, por los mismos períodos a que se refiere el inciso anterior.

DOLO Y FALSEDAD

Art. 268.- En caso de dolo para obtener alimentos, serán obligados solidariamente a la restitución y a la indemnización de daños, todos los que hubieren participado en él.

La falsedad en que hubieren incurrido el alimentante, su patrono, jefe o encargado de hacer las retenciones, con el fin de ocultar o alterar los verdaderos ingresos del primero, los hará incurrir en responsabilidad penal.

PÉRDIDA DEL DERECHO

Art. 269.- Perderá el derecho de pedir alimentos:

- 1º) El que hubiere cometido delito contra los bienes jurídicos del alimentante;
- 2º) El que hubiere perdido la autoridad parental; y
- 3º) El padre o la madre que hubiere sido suspendido en el ejercicio de la autoridad parental, salvo cuando la causa de la suspensión fueren la demencia o la enfermedad prolongada del alimentante, pero la pérdida se limitará al lapso en que tal ejercicio esté suspendido; y,
- 4º) Cuando el alimentario maltrate física o moralmente al alimentante;

CESACIÓN DE LA OBLIGACIÓN

Art. 270.- La obligación de dar alimentos cesará:

- 1º) Por la muerte del alimentario;
- 2º) Cuando el alimentario, por su indolencia o vicios no se dedicare a trabajar o estudiar con provecho y rendimiento, pudiendo hacerlo;
- 3º) Cuando el alimentario deja de necesitarlos;

- 4º) Cuando el alimentante, por darlos, se pusiere en situación de desatender sus propias necesidades alimentarias, o las de otras personas que tengan derecho preferente, respecto al alimentante; y,
- 5º) Cuando el alimentario maltrate física y moralmente al alimentante;

ASIGNACIONES ALIMENTICIAS VOLUNTARIAS

Art. 271.- Las asignaciones alimenticias voluntarias hechas en testamento o por donación entre vivos y los hechos ante el Procurador General de la República, se registrarán por la voluntad del testador o donante y el convenio respectivo, siempre que no contraríen las disposiciones del presente Código.

TÍTULO II LA TUTELA

CAPÍTULO DISPOSICIONES COMUNES

CONCEPTO

Art. 272.- La tutela o guarda es un cargo impuesto a ciertas personas a favor de los menores de edad o incapaces no sometidos a autoridad parental, para la protección y cuidado de su persona y bienes y para representarlos legalmente.

La tutela del menor casado se limitará a la administración de sus bienes y a la representación en actos y contratos relacionados con los mismos.

Las personas que ejercen la tutela se llaman tutores o guardadores; y pupilos o tutelados los sujetos a ella.

OBLIGATORIEDAD

Art. 273.- Están obligados a desempeñar la tutela del menor o incapaz los parientes que sean plenamente capaces.

A falta de parientes del menor o incapaz, podrá ejercer el cargo cualquier persona que cumpliera los requisitos legales y consienta en ello.

CLASES

Art. 274.- La tutela puede ser testamentaria, legítima o dativa.

Es testamentaria la que se constituye por testamento; legítima, la que se confiere por la ley; y dativa, la que confiere el juez.

PLURALIDAD DE TUTORES

Art. 275.- Por regla general la tutela será ejercida por una persona; sin embargo podrán ejercerla varias cuando el testador así lo hubiese dispuesto; o el juez lo considerare conveniente a los intereses del pupilo.

PLURALIDAD DE PUIPILOS

Art. 276.- Cuando se sometan a guarda varios hermanos, se nombrará un solo tutor para todos ellos, salvo que en interés de los mismos convenga nombrarles diferente tutor a cada uno. Igual regla se aplicará cuando se trate de cónyuges menores de edad.

También podrá colocarse bajo una misma tutela a dos o más personas, con tal que haya entre ellas indivisión de patrimonios. Divididos los patrimonios, se consideran tantas tutelas como patrimonios resulten.

IDONEIDAD DEL TUTOR

Art. 277.- El nombramiento de tutor recaerá en quien por sus condiciones personales y sus relaciones con el menor o incapaz sea el más conveniente para éste. Por regla general se procurará que tutor y pupilo sean del mismo sexo.

TUTORES ESPECÍFICOS

Art. 278.- Cuando hubiere conflicto de intereses entre pupilos sujetos a una misma tutela, el juez les proveerá de tutores específicos para la atención y terminación del conflicto, concluido el cual cesarán en el cargo.

Cuando el conflicto tuviere lugar entre el tutor y el pupilo, la representación de éste corresponderá al Procurador General de la República y Procuradores Auxiliares Departamentales.

PROVIDENCIAS NECESARIAS

Art. 279.- Mientras no se nombre tutor o no se discierna el cargo, el juez, de oficio o a solicitud del Procurador General de la República o Procuradores Auxiliares Departamentales, deberá dictar las providencias necesarias para el cuidado del menor o incapaz y la seguridad de sus bienes.

AUDIENCIA A MENORES

Art. 280.- Los menores que ya hubieren cumplido doce años de edad serán oídos previamente al nombramiento de tutor legítimo o dativo, o al discernimiento del cargo con respecto al tutor testamentario.

Si el menor manifestare que la persona que ha de ejercer la tutela no es idónea conforme se dispone en el artículo 277, el juez hará las investigaciones que estime

oportunas y, si lo considera conveniente, oír al Procurador General de la República, luego de lo cual hará o no el nombramiento, o discernirá el cargo, o dejará sin efecto el nombramiento del tutor testamentario, todo si el beneficio del menor así lo exigiere.

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR DE BIENES

Art. 281.- El que dispusiere de bienes a título gratuito en favor de menores o incapaces, sujetos a tutela, podrá condicionar la liberalidad, a que los bienes no los administre el tutor, sino otra persona que designe al efecto. En tal caso el juez, previa audiencia al Procurador General de la República o al Procurador Auxiliar Departamental que corresponda, autorizará la aceptación de la liberalidad, salvo que sea inconveniente a los intereses del menor, aceptarla en los términos en que se le hace.

Caso de autorizarse la aceptación, si no hubiere persona asignada para la administración o ella no aceptare el cargo o no fuere idónea, hará el juez la designación.

REGLAS APLICABLES A LOS ADMINISTRADORES DE BIENES

Art. 282.- Los administradores de determinados bienes de un menor o incapaz, estarán sujetos a las disposiciones relativas a los tutores, en lo que fuere aplicable.

CONTROL JUDICIAL DE LA TUTELA

Art. 283.- La tutela se ejercerá bajo la supervisión del juez, quien actuará de oficio, a solicitud del Procurador General de la República o Procuradores Auxiliares Departamentales, o de cualquier interesado. El juez podrá establecer en la resolución mediante la cual se discierne la tutela, o en otra posterior, las medidas de supervisión y control que estime oportunas en beneficio del pupilo.

Asimismo podrá en cualquier momento, exigir del tutor que informe sobre la situación del tutelado y del estado de la administración.

CAPÍTULO II DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CADA CLASE DE TUTELA

SECCIÓN PRIMERA TUTELA TESTAMENTARIA

DERECHO A NOMBRAR TUTOR

Art. 284.- Podrán nombrar tutor por testamento:

- 1º) El padre o la madre para los hijos que estén bajo su autoridad parental;

- 2º) Los abuelos, para los nietos que estén sujetos a su tutela; y,
- 3º) Cualquier otra persona, para el menor o incapaz al que instituya heredero o legatario.

Cuando los padres ejerzan la autoridad parental de consuno, o cuando los abuelos ejerzan la tutela conjuntamente, sólo tendrá eficacia el nombramiento de tutor hecho por cualesquiera de los padres o abuelos que falleciere por último.

TUTORES SUSTITUTOS

Art. 285.- Cuando el testador nombrare varios tutores para que se sustituyan unos a otros, y no fijare el orden en que deban ejercer la tutela, el juez nombrará de entre ellos al que le parezca más idóneo, de conformidad a los criterios fijados por el artículo 277 de este Código.

TRANSFERENCIA DE LA TUTELA

Art. 286.- Si hallándose en ejercicio un tutor legítimo o dativo, se presentare el testamentario, se transferirá inmediatamente a éste la tutela, salvo que el juez decida otra cosa en interés del tutelado.

SECCIÓN SEGUNDA TUTELA LEGÍTIMA

PARTE PRIMERA TUTELA LEGÍTIMA DE MENORES DE EDAD

PERSONAS LLAMADAS

Art. 287.- A falta de tutela testamentaria tiene lugar la legítima.

Son llamados a la tutela legítima de los menores de edad, en el orden en que se enuncian:

- 1º) Los abuelos;
- 2º) Los hermanos;
- 3º) Los tíos; y,
- 4º) Los primos hermanos.

El juez podrá variar el orden anterior, o prescindir de él, cuando existan motivos justificados.

PARIENTES DE IGUAL GRADO

Art. 288.- Cuando hubiere dos o más parientes de igual grado, el juez nombrará tutor entre ellos al que fuere más idóneo conforme al artículo 277.

TUTOR PARA MENORES CASADOS

Art. 289.- No obstante el orden de llamamiento a que se refiere el artículo 287, cuando se trate de un menor casado será llamado a su guarda legítima, en primer lugar su cónyuge, si fuere mayor de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final de ese mismo artículo.

Cuando ambos fueren menores, se estará a lo dispuesto en el artículo 276 de este Código.

PARTE SEGUNDA

TUTELA LEGÍTIMA DE MAYORES DE EDAD INCAPACITADOS

PRESUPUESTOS DE LA TUTELA DE MAYORES

Art. 290.- Los mayores de edad estarán sujetos a tutela cuando fueren declarados incapacitados y siempre que no se encuentren bajo autoridad parental prorrogada o restablecida.

PERSONAS LLAMADAS

Art. 291.- Son llamados a la tutela legítima de los mayores de edad incapacitados, en el orden siguiente:

- 1º) El cónyuge;
- 2º) Los hijos;
- 3º) Los padres;
- 4º) Los abuelos;
- 5º) Los hermanos;
- 6º) Los tíos; y
- 7º) Los primos hermanos

Para el nombramiento del tutor se aplicará lo dispuesto en el artículo 277 de este Código.

INCAPACIDAD

Art. 292.- Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial, en virtud de causas legales y con la intervención, en su defensa, del Procurador General de la República o Procuradores Auxiliares Departamentales.

CAUSAS DE INCAPACIDAD

Art. 293.- Son causas de incapacidad:

- 1ª) La enfermedad mental crónica e incurable, aunque existan intervalos lúcidos y,
- 2ª) La sordera, salvo que el sordo pueda entender y darse a entender de manera indudable.

AUTORIZACIÓN PARA INTERNAMIENTO

Art. 294.- El internamiento de un presunto enfermo mental en un centro psiquiátrico, requerirá de autorización judicial previa; salvo que por grave urgencia fuere necesario tomar tal medida, en cuyo caso el titular del centro que aceptare el internamiento dará cuenta inmediatamente al juez, y a la familia de aquél o a su representante si fueren conocidos, y en todo caso al Procurador General de la República o Procuradores Auxiliares Departamentales, so pena de incurrir en responsabilidad el mencionado titular.

ACTOS Y CONTRATOS DEL ENFERMO MENTAL

Art. 295.- Los actos y contratos del enfermo mental, posteriores a la declaratoria de incapacidad, son nulos, aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido; por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados antes del decreto de incapacidad, son válidos, a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces mentalmente enfermo.

INCAPACIDAD DE MENORES

Art. 296.- Los menores de edad podrán ser declarados incapaces, a solicitud de quienes ejerzan la autoridad parental o la tutela, o del Procurador General de la República o Procuradores Auxiliares Departamentales, cuando se prevea razonablemente que la causa de incapacidad persistirá después de alcanzada la mayoría de edad. Esta declaratoria tendrá por finalidad la prórroga de pleno derecho de la autoridad parental o de la tutela.

PRÓRROGA DE LA TUTELA

Art. 297.- El tutor del menor incapaz continuará de pleno derecho en el desempeño del cargo, después de haber alcanzado el pupilo la mayoría de edad.

REHABILITACIÓN

Art. 298.- El incapaz por enfermedad mental podrá ser rehabilitado, si apareciere que ha recobrado la razón permanentemente.

También podrá rehabilitarse al incapaz sordo, cuando se haya hecho capaz de entender y darse a entender de manera indudable, si él mismo lo solicitare.

SECCIÓN TERCERA TUTELA DATIVA

NOMBRAMIENTO DE TUTOR

Art. 299.- A falta de tutela legítima tiene lugar la dativa. El juez nombrará tutor a la persona que reúna las condiciones señaladas en el artículo 277 de este Código.

Quien hubiere acogido un niño expósito o abandonado, será preferido en el nombramiento de tutor, siempre que reúna las condiciones legales.

OBLIGACIÓN DE PROVEER DE TUTOR

Art. 300.- El juez de oficio, proveerá de tutor al menor o incapacitado que no lo tenga, en cuanto tuviere conocimiento del hecho por cualquier medio.

El Procurador General de la República o Procuradores Auxiliares Departamentales, velarán porque no haya menores o incapaces sin guardador.

CAPÍTULO III INHABILIDADES, EXCUSAS Y REMOCIÓN DEL TUTOR

INHABILIDADES

Art. 301.- No pueden ser tutores:

- 1º) Los menores de edad y los incapaces;
- 2º) Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén cumpliendo la condena, y los procesados por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñarán convenientemente la tutela;
- 3º) Los que hubieren sido removidos de otra tutela, o no hubieren obtenido la aprobación de las cuentas de su administración o no hubieren pagado el saldo que resultare en su contra;

- 4º) Los que observaren conducta inmoral o padecieren de enfermedad o vicio que pudiese poner en peligro la salud, la seguridad o la moral del menor o incapaz;
- 5º) Los declarados en quiebra o concurso;
- 6º) Los que tuvieran pendiente litigio propio o de su cónyuge o compañero de vida, sus ascendientes, descendientes, o cónyuge o conviviente de cualquiera de éstos, contra el menor o incapaz;
- 7º) Los que hubieren perdido la autoridad parental o hubieren sido suspendidos en el ejercicio de la misma, o se les hubiere privado de la administración de los bienes de los hijos;
- 8º) Los acreedores o deudores del menor o incapaz, por cantidad apreciable en relación con los bienes de éstos, a criterio del juez, a menos que con conocimiento de la deuda o crédito, hayan sido nombrados por testamento;
- 9º) Los ciegos; y los sordos cuando no pudieren darse a entender;
- 10º) Los que carezcan de domicilio en la República;
- 11º) Los que tuvieran importantes conflictos de intereses con el menor o incapaz; y,
- 12º) Los enemigos de los padres y de los ascendientes del menor o incapaz.

EXCUSAS

Art. 302.- Podrán excusarse de la tutela:

- 1º) Los que tuvieran a su cargo otra tutela, salvo si se tratare de pupilos hermanos;
- 2º) Los mayores de sesenta años;
- 3º) Los que tuvieran bajo su autoridad parental tres o más hijos;
- 4º) Los que por su limitados recursos no puedan atender el cargo sin menoscabo de su subsistencia;
- 5º) Los que padezcan enfermedad crónica que les impida cumplir los deberes del cargo; y,
- 6º) Los que tengan que ausentarse de la República por más de seis meses o lo hicieren reiteradamente.

Mientras se resuelve acerca de la excusa, el que la haya propuesto estará obligado a ejercer el cargo, salvo que el juez resuelva otra cosa en interés del pupilo.

SANCIÓN AL TUTOR TESTAMENTARIO

Art. 303.- El tutor testamentario que se excusare del cargo perderá todo lo que se le hubiere asignado en el testamento.

CAUSAS DE REMOCIÓN

Art. 304.- Serán removidos de la tutela:

- 1º) Aquéllos a quienes, después de discernido el cargo, les sobrevenga alguna de las inhabilidades enumeradas en el artículo 301 de este Código;
- 2º) Los que desempeñaren el cargo con negligencia, ineptitud o infidelidad;
- 3º) Los que promovieren o favorecieren la corrupción o delincuencia del pupilo;
- 4º) Los que maltrataren o abandonaren al tutelado;
- 5º) Los que a sabiendas hubieren cometido inexactitud en el inventario;
- 6º) Los que se ausentaren del lugar de su domicilio por más de seis meses; y,
- 7º) Los que incumplieren grave o reiteradamente los demás deberes que impone el cargo.

SANCIÓN AL TUTOR LEGÍTIMO

Art. 305.- El tutor legítimo que fuere removido de la tutela, perderá el derecho de suceder abintestato al pupilo.

CAPÍTULO IV EJERCICIO DE LA TUTELA

DISCERNIMIENTO DEL CARGO

Art. 306.- El tutor no entrará a ejercer el cargo, sino después de discernido por el juez. El discernimiento se marginará en la partida de nacimiento del pupilo. Ninguna tutela podrá ser discernida sin haberse cumplido todos los requisitos que para su ejercicio exige este Código. Con todo, podrá discernirse sin haberse cumplido los de facción de inventario y avalúo y de constitución de garantía, para el solo efecto de representar al tutelado en juicio, pero no se conferirá al guardador la administración hasta que cumpla con estos requisitos.

INVENTARIO Y AVALUO DE BIENES DEL PUPILO

Art. 307.- El tutor deberá iniciar las diligencias de inventario y avalúo de los bienes del menor o incapaz, dentro de los ocho días siguientes a la aceptación del cargo. El inventario deberá practicarse conforme a lo dispuesto en el Código Civil, dentro de un plazo que no excederá los treinta días, con intervención del Procurador General de la República o del Procurador Auxiliar Departamental, en su caso. El plazo anterior podrá ampliarse por el juez, de acuerdo a las circunstancias.

En ningún caso, ni aun por disposición del testador, estará el tutor exento de esta obligación.

GARANTÍA DE ADMINISTRACIÓN

Art. 308.- Practicado el inventario y avalúo, el tutor deberá constituir garantía de administración, salvo que hubiere sido relevado de esta obligación por el testador.

GARANTÍA POR CAUSA SOBREVINIENTE

Art. 309.- Cuando con posterioridad al discernimiento de la tutela, sobrevenga o se descubra causa que hiciere obligatoria la caución, lo hará saber al juez el propio tutor, o el Procurador General de la República o los Procuradores Auxiliares Departamentales, para el efecto de constituir la garantía.

COBERTURA DE LA GARANTÍA

Art. 310.- La garantía deberá cubrir, cuando menos:

- 1º) El importe de los bienes muebles que reciba el tutor;
- 2º) El promedio de la renta de los bienes en los últimos tres años anteriores a la tutela; y,
- 3º) Las utilidades que el pupilo pueda recibir de cualquier empresa durante un año.

La garantía deberá aumentarse o disminuirse, según se alteren o varíen los valores expresados.

GARANTIA ADMISIBLE

Art. 311.- La garantía podrá consistir en hipoteca o prenda, o en fianza otorgada por instituciones de crédito o empresas de seguros o de fianzas. La garantía personal, aun la caución juratoria, será admisible, siempre que a criterio del juez fuere suficiente, tomando en cuenta el valor de los bienes inventariados y la solvencia y buena reputación del tutor.

Los efectos o valores dados en prenda, serán depositados en una institución de crédito u organización auxiliar.

PRESUPUESTO

Art. 312.- Dentro de los treinta días posteriores al del inicio del ejercicio de la tutela, el guardador deberá someter a la aprobación del juez el presupuesto de los gastos necesarios para los alimentos del pupilo y la administración de sus bienes, y el proyecto de empleo de las rentas excedentes. Para los años posteriores, tales presupuestos y proyectos deberán someterse a aprobación judicial, cuando menos treinta días antes de que se inicie cada ejercicio anual.

Para cubrir gastos no presupuestados superiores a un mil colones, el tutor necesitará de autorización judicial previa; a menos que se trate de una grave y urgente necesidad, en cuyo caso se podrá efectuar el gasto y someterlo a ratificación del juez, dentro de los quince días posteriores a su erogación.

EJERCICIO DE LA TUTELA POR VARIOS GUARDADORES

Art. 313.- Cuando la tutela se ejerza por varios guardadores, se observarán las reglas siguientes:

- 1ª) Las facultades que les corresponden habrán de ser ejercitadas por ellos conjuntamente, pero valdrá lo que se haga con el acuerdo del mayor número. A falta de acuerdo, el juez, después de oírlos a ellos y al pupilo si éste fuere mayor de doce años, resolverá lo que estime conveniente. Si los desacuerdos fueren reiterados y entorpecieren gravemente el ejercicio de la tutela, podrá el juez reorganizar su composición o proveer de nuevos tutores al pupilo;
- 2ª) Si el testador lo hubiere dispuesto de modo expreso o los guardadores lo solicitaren, podrá el juez resolver que las funciones de la tutela se distribuyan entre los tutores, cada uno de los cuales actuará independientemente en el ámbito de su competencia, pero si hay decisiones que conciernan a todos, en cuanto a ellas se observará la regla precedente; y,
- 3ª) Cuando por cualquier causa falte alguno de los guardadores, la tutela subsistirá con los restantes, a no ser que al hacerse el nombramiento se hubiere dispuesto otra cosa.

DEBERES Y FACULTADES

Art. 314.- El tutor tiene respecto de su pupilo las mismas facultades y deberes que la ley otorga e impone a los padres en relación a sus hijos, con las modificaciones y limitaciones legales.

El pupilo debe respeto y obediencia a su tutor.

CUIDADO DEL PUPILO. CASOS DE INCAPACIDAD

Art. 315.- El tutor está obligado a cuidar del pupilo como buen padre de familia; y si el pupilo ha sido declarado incapaz, a hacer cuanto fuere necesario para que pueda valerse por sí mismo y sea rehabilitado.

Cuando en el pupilo menor de edad exista causa de incapacidad y se prevea razonablemente continuará después de alcanzar su mayoría de edad, antes de que la cumpla, el tutor deberá solicitar la declaratoria correspondiente, para los efectos previstos en este Código.

EDUCACIÓN DEL PUPILO. ELECCIÓN DE PROFESIÓN U OFICIO

Art. 316.- Es deber del tutor educar y formar integralmente al pupilo, facilitarle acceso al sistema educativo y orientarlo en la elección de una profesión u oficio.

Si el pupilo había iniciado estudios para obtener cualquier profesión u oficio, mientras estuvo bajo autoridad parental, el tutor no podrá variarlos sin autorización judicial, para lo cual el juez tomará en cuenta la opinión del menor y sus aptitudes y circunstancias.

FACULTADES ADMINISTRATIVAS DEL PUPILO

Art. 317.- El pupilo menor de edad tendrá las mismas facultades administrativas que el hijo de familia, respecto de los bienes adquiridos con su propio trabajo o industria.

DERECHO DEL PUPILO EN LA ADMINISTRACIÓN

Art. 318.- Los pupilos menores de edad, que hayan cumplido catorce años, tienen derecho a que el tutor los asocie en la administración de los bienes pupilares, para su entrenamiento, información y conocimiento. El ejercicio de este derecho no exime al guardador de responsabilidad.

DEPÓSITO EN INSTITUCIÓN DE CREDITO

Art. 319.- Las alhajas, muebles preciosos y títulosvalores que a criterio del juez no deban estar en poder del tutor, serán depositados en una institución de crédito a favor del pupilo.

DEPÓSITO DE DINERO

Art. 320.- El tutor deberá depositar el dinero del pupilo en una institución de crédito, manteniendo las cuentas de éste separadas de las propias.

OBLIGACIÓN DE RECONOCER INTERES LEGAL

Art. 321.- El tutor responderá de los intereses legales del capital del pupilo, cuando por su omisión o negligencia quedare improductivo.

AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Art. 322.- El tutor necesita autorización judicial:

- 1º) Para internar al pupilo en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial;

- 2º) Para enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales del pupilo; para dar los primeros en arrendamiento por más de tres años, o por más tiempo del que falte al menor para alcanzar su mayoría de edad, o con anticipo de renta por más de un año; para hacer o reconocer mejoras que no sean necesarias; para constituir servidumbres pasivas; y, en general, para celebrar otra clase de contratos que afecten el patrimonio del pupilo, siempre que sean de valor superior a un mil colones. Los contratos de arrendamiento a que se refiere este ordinal no podrán ser prorrogados voluntariamente;
- 3º) Para repudiar herencias, legados y donaciones a favor del pupilo;
- 4º) Para transigir o comprometer en árbitros las cuestiones en que el pupilo tuviere interés;
- 5º) Para pagarse créditos que tenga contra el pupilo;
- 6º) Para resolver sobre la forma, condiciones y garantías en que debe colocar a crédito el dinero del pupilo; y,
- 7º) En los demás casos previstos por la ley.

VENTA DE TÍTULOS VALORES, FRUTOS Y GANADOS

Art. 323.- La venta de títulosvalores podrá hacerse sin autorización judicial, pero nunca por menos del valor contable, o del que se cotice el día de la venta si existiere bolsa de valores.

Los frutos y ganados podrán venderse sin autorización judicial, siempre que su valor no sea inferior del que se cotice en plaza el día de la venta.

Las operaciones a que se refiere este artículo las deberá comprobar el tutor al rendir cuentas.

AUTORIZACIÓN POR UTILIDAD O NECESIDAD

Art. 324.- La autorización para enajenar o gravar los bienes inmuebles, los derechos reales y los bienes muebles del pupilo que valgan más de un mil colones, procederá sólo por causa de utilidad o de necesidad comprobadas.

La autorización no es necesaria cuando la venta de los bienes del pupilo corresponda al giro ordinario de sus negocios.

ACTOS PROHIBIDOS AL TUTOR

Art. 325.- Queda prohibido al tutor:

- 1º) Contratar por sí, por interpósita persona o a nombre de otro con el pupilo, o aceptar contra él créditos, derechos o acciones, a no ser que resulten de subrogación legal. Esta prohibición se extiende al cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos del tutor;

- 2º) Disponer a título gratuito de los bienes del pupilo, excepto las donaciones en dinero y otros bienes muebles a favor de un consanguíneo necesitado, autorizadas por el juez, por causa razonable;
- 3º) Aceptar donaciones del que fue su pupilo, sin estar aprobadas las cuentas de su administración y cancelado el saldo que resultare en su contra, salvo cuando el tutor fuere ascendiente, cónyuge, conviviente o hermano del donante;
- 4º) Hacer remisión de derechos del pupilo;
- 5º) Aceptar sin beneficio de inventario las herencias deferidas al pupilo; y,
- 6º) Aceptar sin reserva las cesiones de derechos o créditos que los acreedores del pupilo hagan a terceros.

PROHIBICIÓN ESPECIAL

Art. 326.- Cuando la persona o bienes del pupilo sean los asegurados, se prohíbe designar como beneficiario al tutor. Esta prohibición es aplicable al cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes y hermanos del guardador.

RETRIBUCIÓN DEL TUTOR

Art. 327.- La tutela da derecho a una retribución, que se pagará anualmente y que no bajará del cinco por ciento anual ni excederá del quince por ciento anual de las rentas y productos líquidos de los bienes del pupilo.

Cuando la retribución no hubiere sido fijada en el testamento, o cuando sin mediar negligencia del tutor, no hubiere rentas ni productos, el juez la fijará teniendo en cuenta la importancia del caudal del pupilo y el trabajo que ocasione el ejercicio de la tutela.

Si el pupilo no tuviere bienes o éstos fueren exiguos, el tutor ejercerá el cargo gratuitamente.

PÉRDIDA DE LA RETRIBUCIÓN

Art. 328.- Cuando el tutor hubiere sido removido por causa imputable a él, no tendrá derecho a retribución alguna.

OBLIGACIÓN DE LLEVAR CUENTAS

Art. 329.- El tutor está obligado a llevar cuentas exactas y comprobables de todas las operaciones de su administración, en libros autorizados por el juez que discernió la tutela. Al finalizar su cargo, presentará una memoria que resuma los actos de su administración.

FIN DE LA TUTELA

Art. 330.- La tutela termina:

- 1º) Por alcanzar el pupilo su mayoría de edad, salvo que la tutela se haya prorrogado;
- 2º) Por la muerte del pupilo o del tutor;
- 3º) Por rehabilitación del incapacitado; y,
- 4º) Por quedar el pupilo sujeto a autoridad parental.

La terminación se marginará en la partida de nacimiento del pupilo.

CAPÍTULO V RENDICIÓN DE CUENTAS

OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS

Art. 331.- El tutor deberá rendir cuentas al final de cada año de su gestión y al terminar la tutela o cesar en su cargo.

La rendición de cuentas la hará ante el juez, con intervención del Procurador General de la República o del Procurador Auxiliar Departamental.

La rendición anual de cuentas deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes a la terminación del año de gestión. Esto mismo se aplicará cuando el tutor ha cesado en el cargo.

En todo caso las cuentas estarán sujetas a la aprobación del juez.

PLAZO PARA LA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS

Art. 332.- La rendición final de cuentas la hará el tutor o sus herederos al pupilo, o a los herederos de éste, o a quien lo represente, dentro de los sesenta días siguientes a la terminación de la tutela. Si no la rindiere, será responsable por los daños que irrogare al pupilo o a sus herederos, aparte de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle.

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

Art. 333.- Las cuentas deben ir acompañadas de documentos justificativos.

GASTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Art. 334.- Los gastos de la rendición de cuentas serán a cargo del que estuvo sometido a tutela.

OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LOS BIENES DEL PUPILO

Art. 335.- El tutor, al terminar la tutela, deberá entregar al que fue su pupilo todos los bienes y documentos que pertenezcan a este último.

OBLIGACIONES DEL TUTOR QUE SUSTITUYE A OTRO

Art. 336.- El tutor que sustituya a otro, deberá exigir entrega de bienes y rendición de cuentas al que lo ha precedido, so pena de responder por los daños que por su omisión se causaren al pupilo.

INTERESES

Art. 337.- El saldo de las cuentas a favor o en contra del tutor, devengará el interés legal; en el primer caso, desde que el pupilo sea requerido para el pago, previa entrega de los bienes; y en el segundo, desde el día siguiente a la expiración del plazo para rendir las cuentas.

PRESCRIPCIÓN

Art. 338.- Las acciones y obligaciones que recíprocamente correspondan al tutor o al que fue su pupilo, por razón del ejercicio de la tutela, prescriben en cuatro años de concluida ésta.

CAPÍTULO VI REGISTRO DE TUTELAS

INSTITUCIONES DE REGISTRO Y MATERIAS A INSCRIBIRSE

Art. 339.- En los juzgados de primera instancia con jurisdicción en materia familiar se llevará un registro de tutelas, en el cual se inscribirán el discernimiento y la terminación de la tutela, las remociones y las excusas de los tutores, los resultados de los inventarios y de la rendición de cuentas, los presupuestos de gastos de administración, así como todas las resoluciones que puedan modificar el estado personal o patrimonial de tutelado.

El inventario, con los recibos de depósito y los demás documentos justificativos de las cuentas que rinda el tutor, se llevarán en expediente separado.

ÍNDICE

Art. 340.- Se llevará un índice de las tutelas, por orden alfabético del apellido de los tutelados.

ENCARGADO DEL REGISTRO

Art. 341.- El registro será llevado por el juez, quien ordenará los asientos y sus modificaciones y expedirá las certificaciones.

MARGINACIONES SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS

Art. 342.- Al comienzo de cada ejercicio anual de la tutela, se hará constar, al margen de cada inscripción, si el tutor obligado a dar cuentas de su gestión, las ha rendido o no.

REVISIÓN OBLIGATORIA DE INSCRIPCIONES

Art. 343.- Para cumplir con la atribución que le confiere el artículo 283 de este Código, el juez deberá examinar frecuentemente las inscripciones del registro, a fin de adoptar las providencias necesarias para la defensa de los intereses de los tutelados.

LIBRO QUINTO

LOS MENORES Y LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (5)

TÍTULO PRIMERO

LOS MENORES

CAPÍTULO I. DEROGADO (11)

PRINCIPIOS RECTORES, DERECHOS FUNDAMENTALES Y DEBERES DE LOS MENORES

REGIMEN ESPECIAL

Art. 344.- DEROGADO (11)

DEFINICIÓN DE MENOR DE EDAD

Art. 345.- DEROGADO (11)

PROTECCIÓN INTEGRAL

Art. 346.- DEROGADO (11)

RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO

Art. 347.- DEROGADO (11)

PROTECCIÓN ESPECIAL DEL ESTADO

Art. 348.- DEROGADO (11)

NO DISCRIMINACIÓN

Art. 349.- DEROGADO (11)

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

Art. 350.- DEROGADO (11)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MENORES

Art. 351.- DEROGADO (11)

DEBERES DE LOS MENORES

Art. 352.- DEROGADO (11)

CAPÍTULO II- DEROGADO (11) PROTECCIÓN DEL MENOR

PROTECCIÓN A LA VIDA Y LA SALUD

Art. 353.- DEROGADO (11)

OBLIGACIÓN DEL ESTADO

Art. 354.- DEROGADO (11)

ASISTENCIA MÉDICA

Art. 355.- DEROGADO (11)

PROTECCIÓN EDUCATIVA

Art. 356.- DEROGADO (11)

INVOLUCRADOS EN LA PROTECCIÓN EDUCATIVA

Art. 357.- DEROGADO (11)

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Art. 358.- DEROGADO (11)

EDUCACIÓN INICIAL

Art. 359.- DEROGADO (11)

OBLIGADOS A VELAR POR LA ASISTENCIA AL CENTRO EDUCATIVO

Art. 360.- DEROGADO (11)

MEDIDAS PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR

Art. 361.- DEROGADO (11)

OBJETO PRIORITARIO DE ESTUDIO

Art. 362.- DEROGADO (11)

APOYO PARA CONTINUAR ESTUDIOS SUPERIORES

Art. 363.- DEROGADO (11)

EDUCACIÓN ESPECIAL

Art. 364.- DEROGADO (11)

PROTECCIÓN MORAL DEL MENOR

Art. 365.- DEROGADO (11)

PROTECCIÓN A LA DIGNIDAD DEL MENOR

Art. 366.- DEROGADO (11)

PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL MENOR

Art. 367.- DEROGADO (11)

ESPECTÁCULOS NO APTOS PARA MENORES

Art. 368.- DEROGADO (11)

PROHIBICIÓN DE VENDER PRODUCTOS NOCIVOS

Art. 369.- DEROGADO (11)

PROHIBICIÓN EN MENSAJES COMERCIALES

Art. 370.- DEROGADO (11)

LUGARES NO APTOS PARA MENORES

Art. 371.- DEROGADO (11)

PROHIBICIÓN DE VENDER MATERIAL INMORAL

Art. 372.- DEROGADO (11)

PROHIBICIÓN DE PUBLICACIONES

Art. 373.- DEROGADO (11)

SANCIÓN

Art. 374.- DEROGADO (11)

GARANTÍA DE RESERVA

Art. 375.- DEROGADO (11)

PROTECCIÓN LABORAL

Art. 376.- DEROGADO (11)

PROHIBICIÓN

Art. 377.- DEROGADO (11)

TRABAJO INDEPENDIENTE

Art. 378.- DEROGADO (11)

DEL MENOR TRABAJADOR MINUSVÁLIDO

Art. 379.- DEROGADO (11)

PROTECCIÓN DEL MENOR TRABAJADOR

Art. 380.- DEROGADO (11)

ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA

Art. 381.- DEROGADO (11)

APRENDIZAJE

Art. 382.- DEROGADO (11)

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES

Art. 383.- DEROGADO (11)

LIBERTAD ARTÍSTICA

Art. 384.- DEROGADO (11)

ERRADICACIÓN DE MENDICIDAD

Art. 385.- DEROGADO (11)

GARANTÍA CONTRA LA VIOLENCIA

Art. 386.- DEROGADO (11)

MALTRATO FÍSICO Y MENTAL

Art. 387.- DEROGADO (11)

ASISTENCIA LEGAL

Art. 388.- DEROGADO (11)

TÍTULO II

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (5) (18)

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS RECTORES, DERECHOS FUNDAMENTALES Y DEBERES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (5) (18)

CONCEPTO

Art. 389.- DEROGADO. (5) (18)

RÉGIMEN ESPECIAL

Art. 390.- DEROGADO. (5) (18)

PROTECCIÓN INTEGRAL

Art. 391.- DEROGADO. (5) (18)

RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO

Art. 392.- DEROGADO. (5) (18)

PREVENCIÓN

Art. 393.- DEROGADO. (5) (18)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (5)

Art. 394.- DEROGADO. (5) (18)

DEBERES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (5)

Art. 395.- DEROGADO. (5) (18)

NORMAS SUPLETORIAS

Art. 396.- DEROGADO. (5) (18)

TÍTULO III

DEBERES DEL ESTADO, SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA, AL MENOR Y PERSONAS ADULTAS MAYORES (5)

CAPÍTULO ÚNICO

DEBERES DEL ESTADO

DEBERES

Art. 397.- El Estado deberá propiciar por todos los medios la estabilidad de la familia y su bienestar en materia de salud, trabajo, vivienda, educación y seguridad social, a fin de que pueda asumir plenamente las responsabilidades que le competen en la formación y protección del menor y de todo el grupo familiar.

En consecuencia:

- a) Garantizará el ejercicio eficaz de los derechos reconocidos en este Código;
- b) Desarrollará políticas de protección al menor, a la familia y personas ADULTAS MAYORES; **(5)**
- c) Impulsará programas de atención, protección y rehabilitación, en beneficio de la familia, del menor y de las personas ADULTAS MAYORES; **(5)**
- d) Coordinará las actividades desarrolladas por las instituciones que realicen actividades en beneficio del menor, la familia y personas ADULTAS MAYORES; **(5)**
- e) Propiciará la participación de la comunidad y de los organismos no gubernamentales en los programas de protección a la familia, al menor y las personas ADULTAS MAYORES; **(5)**
- f) Ejecutará programas especiales de protección para los discapacitados o minusválidos;
- g) Realizará programas de alimentación, vacunación, nutrición, educación sanitaria y de rehabilitación especial;
- h) Prestará asistencia médica y jurídica gratuitas;
- i) Velará porque los medios de comunicación social cumplan con las obligaciones contenidas en este Código;
- j) Dará preferencia a la formulación y ejecución de programas que beneficien al menor, la familia y las personas ADULTAS MAYORES, los que deberán contar con la asignación presupuestaria suficiente y privilegiada; **(5)**

- k) Vigilará que los patronos que empleen menores de edad, cumplan lo dispuesto en este Código y demás leyes aplicables;
- l) Ejecutará programas culturales, recreativos y deportivos con la participación de la comunidad;
- m) Ejecutará campañas para erradicar la mendicidad y ofrecerá escolaridad y capacitación a los menores para reintegrarlos adecuadamente a la sociedad;
- n) Dará impulso y ayuda económica a las artesanías domésticas y otras actividades que permitan la elaboración de trabajos y generación de ingresos a través de la industria familiar; y
- o) Vigilará que en toda planificación urbana se destinen espacios suficientes y adecuados para la construcción de campos de juegos, parques y casas comunales dedicadas a la recreación de todos los miembros de la familia.

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y PERSONAS ADULTAS MAYORES (5)

Art. 398.- La protección integral de la familia y personas ADULTAS MAYORES, a cargo del Estado, se hará a través de un conjunto de acciones gubernamentales y no gubernamentales, coordinadas por la Secretaría Nacional de la Familia, con la participación de la comunidad y el apoyo de los organismos internacionales, los que conforman el Sistema Nacional de Protección a la Familia y Personas ADULTAS MAYORES. Dicho sistema garantizará la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación y estabilidad de la unidad familiar. **(5)**

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN AL MENOR

Art. 399.- La Protección integral de los menores a cargo del Estado, se hará mediante un conjunto de acciones gubernamentales y no gubernamentales, coordinadas por el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, con la participación de la familia, la comunidad y el apoyo de los organismos internacionales, los que conforman el Sistema Nacional de Protección al Menor. **(*)**

El sistema nacional garantizará la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación y desarrollo integral del menor.

INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS

Art. 400.- Integran los Sistemas Nacionales de Protección a la Familia, Personas ADULTAS MAYORES y al Menor: **(5)**

- a) La Procuraduría General de la República;
- b) La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos;

- c) El Ministerio de Justicia;
- d) El Ministerio de Educación;
- e) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social;
- f) El Ministerio de Trabajo y Previsión Social;
- g) El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano;
- h) La Secretaría Nacional de la Familia;
- i) El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (*); y,
- j) Las asociaciones comunitarias y de servicio y los organismos no gubernamentales que tuvieran actividades afines a las de las anteriores.

PERMANENCIA Y OBLIGATORIEDAD

Art. 401.- Las instituciones que conforman los Sistemas Nacionales de Protección a la Familia y Personas ADULTAS MAYORES y al Menor, ejecutarán programas y actividades de atención en forma permanente y obligatoria, encaminados a beneficiar a la familia y personas ADULTAS MAYORES y a satisfacer las necesidades relacionadas con el desarrollo integral del menor; cumplirán y harán cumplir en sus respectivas áreas de competencia, las normas que para la protección de dichas personas se consagran en este Código. (5)

TÍTULO IV DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIA Y VIGENCIA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Art. 402.- INCISO DEROGADO. (2)

El régimen patrimonial de los matrimonios celebrados con anterioridad a la vigencia de este Código, continuará inalterable, a menos que los cónyuges expresamente dispusieran lo contrario.

Los guardadores válidamente constituidos conforme al Código Civil, seguirán ejerciendo sus cargos, pero sus funciones, remuneraciones, incapacidades y excusas supervinientes, quedarán sujetas a este Código.

Mientras no se establezca el régimen del Registro del Estado Familiar estos actos se registran de conformidad a lo dispuesto por el Registro Civil de las Personas.

DEROGATORIA

Art. 403.- Quedan derogados: el ordinal segundo del Art. 15, los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 69 y 990 del Código Civil; los títulos III, IV, V, VI VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII XXIII, XXV, XXVII, XXVIII y XXIX del Libro Primero y el Título XXII del Libro Cuarto, ambos del Código Civil; el Código de Menores y la Ley de Adopción.

Asimismo quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a las contenidas en este Código.

VIGENCIA

Art. 404.- El presente Código de Familia entrará en vigencia el uno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. **(1)**

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los once días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres.

LUIS ROBERTO ANGULO SAMAYOA
PRESIDENTE

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA
VICEPRESIDENTE

RUBÉN IGNACIO ZAMORA RIVAS
VICEPRESIDENTE

MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS
VICEPRESIDENTE

RAÚL MANUEL SOMOZA ALFARO
SECRETARIO

JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA
SECRETARIO

SILVIA GUADALUPE BARRIENTOS
SECRETARIO

RENÉ MARIO FIGUEROA FIGUEROA
SECRETARIO

REYNALDO QUINTANILLA PRADO
SECRETARIO

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintidós días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y tres.

PUBLIQUESE,

ALFREDO FÉLIX CRISTIANI BURKARD,
Presidente de la República

RENÉ HERNÁNDEZ VALIENTE,
Ministro de Justicia.

REFORMAS:

(1) Decreto Legislativo No. 830 de fecha 11 de marzo de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 60, Tomo 322 de fecha 25 de marzo de 1994.

(2) Decreto Legislativo No. 133, Ley Procesal de Familia, de fecha 14 de septiembre de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 173, Tomo 324 de fecha 20 de septiembre de 1994.

(3) Decreto Legislativo No. 145 de fecha 22 de septiembre de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 180, Tomo 324 de fecha 29 de septiembre de 1994. **NOTA**

***INICIO DE NOTA:** Por ser el Decreto anterior de carácter TRANSITORIO, y dentro del contexto del Decreto Legislativo N° 677, del Código de Familia que ha derogado ciertas leyes se transcribe textualmente dicho Decreto:

DECRETO N° 145.-**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,****CONSIDERANDO:**

- I.- Que por Decreto Legislativo N° 677, de fecha 11 de octubre de 1993, publicado en el Diario Oficial N° 231, Tomo 321, de fecha 13 de diciembre del mismo año, se emitió el Código de Familia, el cual entrará en vigencia el 1° de octubre del corriente año;
- II.- Que el Referido Código deroga, entre otras leyes, el Código de Menores, ya que muchas de sus disposiciones se regulan en la Ley del Menor Infractor, la cual su vigencia se había establecido también para el 1° de octubre del corriente año;
- III.- Que así mismo, por Decreto Legislativo N° 135 de fecha 14 de septiembre, se prorrogó la vigencia de la Ley del Menor Infractor hasta el 1° de marzo de 1995;
- IV.- Que tal prórroga causa algunos inconvenientes en cuanto a la competencia y procedimientos que llevan a cabo los actuales Jueces de Menores, por lo que es procedente, emitir las disposiciones legales que resuelvan tal situación;

POR TANTO,

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados Walter René Araujo Morales y Juan Duch Martínez,

DECRETA:

Art. 1.- Déjase sin efecto la derogatoria el Código de Menores, que establece el Código de Familia, en lo relativo a las normas relacionadas con las infracciones, consideradas como delitos o faltas atribuidas a menores, el procedimiento, las medidas tutelares, así como las normas que tratan sobre la creación y competencia de los Tribunales Tutelares de Menores.

Art. 2.- Lo dispuesto en este Decreto es de naturaleza transitoria y quedará sin efecto, al entrar en vigencia la Ley del Menor Infractor.

Art. 3.- El presente Decreto entrará en vigencia el 1º de octubre del corriente año, previa publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS,
PRESIDENTA.

ANA GUADALUPE MARTÍNEZ MENÉNDEZ,
VICEPRESIDENTA.

ALFONSO ARÍSTIDES ALVARENGA,
VICEPRESIDENTE.

JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
VICEPRESIDENTE.

JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
VICEPRESIDENTE.

JOSÉ EDUARDO SANCHO CASTAÑEDA,
SECRETARIO.

GUSTAVO ROGELIO SALINAS OLMEDO,
SECRETARIO.

CARMEN ELENA CALDERÓN DE ESCALÓN,
SECRETARIA.

WALTER RENE ARAUJO MORALES,
SECRETARIO.

RENÉ MARIO FIGUEROA FIGUEROA,
SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintinueve días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

PUBLIQUESE,

ARMANDO CALDERÓN SOL,
Presidente de la República

RUBEN ANTONIO MEJÍA PEÑA,
Ministro de Justicia.

FIN DE NOTA.

- (4) Decreto Legislativo No. 317 de fecha 04 de junio de 1998, publicado en el Diario Oficial No. 121, Tomo 340 de fecha 01 de julio de 1998.
- (5) Decreto Legislativo No. 811 de fecha 06 de enero de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 31, Tomo 346 de fecha 14 de febrero de 2000. **NOTA.**

INICIO DE NOTA: Por medio del presente Decreto Legislativo, en su Art. 1, se DECRETA QUE SE SUSTITUYA LA PALABRA "TERCERA EDAD" POR "ADULTO MAYOR" E IGUALMENTE EN TODO ACTO OFICIAL SE PRONUNCIARA "ADULTO MAYOR" EN REFERENCIA A LAS PERSONAS QUE SEAN MAYORES DE 60 AÑOS EN SU EDAD, POR LO QUE SE TRANSCRIBE TEXTUALMENTE DICHO ARTICULO, ASI: *Art. 1.- Sustitúyase la expresión "tercera edad" en todas las leyes de la República que la contengan, por la de "adulto mayor". Igualmente, en todo acto oficial se utilizará esta última expresión, cuando se haga referencia a las personas mayores de sesenta años.* **FIN DE NOTA.**

- (6) Decreto Legislativo No. 212 de fecha 25 de noviembre del 2003, publicado en el Diario Oficial No. 4, Tomo 362 de fecha 08 de enero del 2004.
- (7) Decreto Legislativo No. 575, del 06 de enero del 2005, publicado en el Diario Oficial N° 26, Tomo 366, del 07 de febrero del 2005.
- (8) Decreto Legislativo No. 956 de fecha 03 de febrero del 2006, publicado en el Diario Oficial No. 37, Tomo 370 de fecha 22 de febrero del 2006.
- (9) Decreto Legislativo No. 843 de fecha 26 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 76, Tomo 383 de fecha 28 de abril de 2009.
- (10) Decreto Legislativo No. 39 de fecha 05 de junio de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 121, Tomo 384 de fecha 01 de julio de 2009.
- (11) Decreto Legislativo No. 839, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, de fecha 26 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 68, Tomo 383 de fecha 16 de abril de 2009.
- (12) Decreto Legislativo No. 766 de fecha 23 de junio de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 136, Tomo 392 de fecha 20 de julio de 2011.
- (13) Decreto Legislativo No. 112 de fecha 30 de agosto de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 177, Tomo 396 de fecha 24 de septiembre de 2012.
- (14) Decreto Legislativo No. 989 de fecha 16 de abril de 2015, publicado en el Diario Oficial No. 79, Tomo 407 de fecha 05 de mayo de 2015.
- (15) Decreto Legislativo No. 282, Ley Especial de Adopciones, de fecha 17 de febrero de 2016, publicado en el Diario Oficial No. 205, Tomo 413 de fecha 04 de noviembre de 2016.

- (16) Decreto Legislativo No. 605 de fecha 09 de febrero de 2017, publicado en el Diario Oficial No. 36, Tomo 414 de fecha 21 de febrero de 2017.
- (17) Decreto Legislativo No. 754 de fecha 17 de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial No. 164, Tomo 416 de fecha 05 de septiembre de 2017.
- (18) Decreto Legislativo No. 817, Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulto Mayor, de fecha 27 de enero de 2021, publicado en el Diario Oficial No. 74, Tomo 431 de fecha 22 de abril de 2021.
- (19) Decreto Legislativo No. 403 de fecha 07 de junio de 2022, publicado en el Diario Oficial No. 123, Tomo 435 de fecha 30 de junio de 2022.
- (20) Decreto Legislativo No. 591 de fecha 7 de diciembre de 2022, publicado en el Diario Oficial No. 241, Tomo 437 de fecha 21 de diciembre de 2022.

Se hace mención que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia No. 190-2016, de fecha 17 de enero de 2022, declaró inconstitucional de un modo general y obligatorio el Art. 151 del Código de Familia. Asimismo, ordenó a la Asamblea Legislativa reformar dicha disposición legal en el sentido, de adicionar la legitimación procesal activa de la persona que afirme ser el padre biológico y señalar las medidas para que su reconocimiento no sea objeto de abusos por parte de las personas legitimadas.

NOTA: (*)

INICIO DE NOTA: Se relaciona al Decreto Legislativo No. 431, de fecha 22 de junio de 2022, Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, publicado en Diario Oficial No. 117, Tomo No. 435, 22 de junio de 2022, se transcribe literalmente:

Art. 289.- De la disolución de ISNA y CONNA

Decláranse disueltos el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia; cuyas funciones serán asumidas por el CONAPINA, creado en la presente Ley.

El CONAPINA sucede a partir de la vigencia de esta Ley en las funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y obligaciones que corresponden al ISNA y CONNA; por tanto, en todas Leyes, Decretos, convenios, contratos y otros instrumentos y documentos en los que se haga referencia al ISNA y CONNA se entenderá que se refiere al CONAPINA. **FIN DE NOTA.**

LEY PROCESAL DE FAMILIA



DECRETO N° 133.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

- I. Que los Artículos del 32 al 36 de la Constitución, establecen los principios fundamentales que deben desarrollarse en la legislación secundaria, a fin de garantizar la aplicación de las Leyes que regulen los derechos de la familia y de los menores;
- II. Que de acuerdo al Decreto Legislativo N° 677, de fecha 11 de octubre de 1993, publicado en el Diario Oficial N° 231, Tomo 321, de fecha 13 de diciembre del mismo año, se promulgó el Código de Familia, por lo que se hace indispensable dictar la Ley que desarrolle los principios de la doctrina procesal moderna, para lograr el cumplimiento eficaz de los derechos reconocidos en dicho Código y demás Leyes sobre la materia; y,
- III. Que sin desconocer la naturaleza indivisible de la función jurisdiccional, es conveniente el establecimiento de tribunales especializados que conozcan en materia de familia.

POR TANTO,

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Justicia y de los Diputados Walter René Araujo Morales, Arturo Argumedo h., Francisco Alberto Jovel Urquilla, Gerardo Antonio Suvillaga, José Vicente Machado Salgado, Jorge Alberto Carranza Álvarez, José Armando Cienfuegos Mendoza, José Daniel Vega, David Acuña, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Segundo Alejandro Dagoberto Marroquín, Elí Avileo Díaz Álvarez y Marcos Alfredo Valladares Melgar.

DECRETA: La siguiente,

LEY PROCESAL DE FAMILIA

TÍTULO PRELIMINAR

OBJETO

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer la normativa procesal para hacer efectivos los derechos y deberes regulados en el Código de Familia y otras Leyes sobre la materia.

INTERPRETACIÓN

Art. 2.- La interpretación de las disposiciones de esta Ley, deberá hacerse con el propósito de lograr la efectividad de los derechos reconocidos por la

normativa en materia de familia, en armonía con los principios generales del derecho procesal.

PRINCIPIOS RECTORES

Art. 3.- En la aplicación de la presente Ley, deberán tenerse en cuenta los siguientes principios:

- a) El proceso se inicia a instancia de parte, salvo las excepciones legales. Las partes podrán ofrecer pruebas, presentar alegatos y disponer de sus derechos, excepto cuando éstos fueren irrenunciables;
- b) Iniciado el proceso, éste será dirigido e impulsado de oficio por el Juez, quien evitará toda dilación o diligencia innecesaria y tomará las medidas pertinentes para impedir su paralización;
- c) El Juez deberá estar presente en todas las actuaciones y procurará la concentración de las mismas;
- d) Las audiencias serán orales y públicas, el Juez de Oficio o a instancia de parte, podrá ordenar la reserva de la audiencia;
- e) El Juez garantizará la igualdad de las partes durante todo el proceso;
- f) Las partes deberán plantear simultáneamente todos los hechos y alegaciones en que fundamenten sus pretensiones o defensas y las pruebas que pretendan hacer valer;
- g) El Juez deberá resolver exclusivamente los puntos propuestos por las partes y los que por disposición legal correspondan; y
- h) Los sujetos que actúen en el proceso deberán comportarse con lealtad, probidad y buena fe.

TÍTULO I SUJETOS PROCESALES

CAPÍTULO I TRIBUNALES

COMPETENCIA Y AUXILIO MULTIDISCIPLINARIO

Art. 4.- LOS JUZGADOS Y CÁMARAS DE FAMILIA TENDRÁN LA COMPETENCIA TERRITORIAL QUE DETERMINA LA LEY ORGÁNICA JUDICIAL. LOS PRIMEROS CONTARÁN CON UN EQUIPO DE ESPECIALISTAS INTEGRADO, AL MENOS, POR UN TRABAJADOR SOCIAL, UN PSICÓLOGO Y UN EDUCADOR. (6)

El Juez podrá auxiliarse, cuando lo considere necesario, de los especialistas del Instituto de Medicina Legal, del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor*, de la Procuraduría General de la República o de otros especialistas con los que no contaren dichas instituciones.

JUEZ Y MAGISTRADO DE CÁMARA DE FAMILIA

Art. 5.- Para ser Juez de Familia o Magistrado de Cámara de Familia, se deberán cumplir los requisitos que señala la Constitución para ser Juez de Primera Instancia o Magistrado de Cámara de Segunda Instancia, respectivamente, y tener competencia notoria en materia de familia.

En el texto de la presente Ley tanto los Magistrados como los Jueces de Familia podrán ser nombrados con las expresiones genéricas Magistrados, "Juez" o "Jueces".

ATRIBUCIONES DEL JUEZ

Art. 6.- El Juez de Oficio está autorizado para:

- a) Calificar su competencia;
- b) Rechazar las pruebas impertinentes o inútiles;
- c) Imponer a las partes o a sus apoderados las sanciones previstas en la Ley;
- d) Decretar medidas cautelares; y,
- e) Retirar de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.

DEBERES DEL JUEZ

Art. 7.- El Juez está obligado a:

- a) Emplear las facultades que le concede la presente Ley para la dirección del proceso;
- b) Dar el trámite que legalmente corresponda a la pretensión;
- c) Ordenar las diligencias necesarias para establecer la verdad de los hechos controvertidos, sometidos a su conocimiento y decisión, respetando el derecho de defensa de las partes;
- d) Declarar las nulidades y disponer las diligencias que persigan evitarlas;
- e) Ordenar las medidas conducentes para evitar una sentencia inhibitoria;
- f) Resolver los asuntos sometidos a su decisión, no obstante oscuridad, insuficiencia o vacío legal;
- g) Decidir las peticiones de las partes en los plazos previstos en la Ley;

- h) Impedir el fraude procesal y cualquier conducta ilícita; así como prevenir o sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe;
- i) Motivar las resoluciones que pronuncie; y,
- j) Oír al menor cuando hubiere cumplido doce años de edad, en todos los procesos y diligencias que le afecten; antes de dicha edad, el Juez tendrá contacto con el menor y de ser posible dialogará con él.

INDELEGABILIDAD

Art. 8.- El Juez no podrá comisionar al Secretario o a los empleados subalternos, la práctica de ningún acto procesal propio del ejercicio de sus funciones, bajo pena de nulidad; sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria a que hubiere lugar.

Cuando fuere necesario, el Juez se trasladará al lugar en que se deban practicar las pruebas anticipadas.

ATRIBUCIONES DE LOS ESPECIALISTAS

Art. 9.- Corresponde a los especialistas de los Juzgados de Familia realizar los estudios y dictámenes que el Juez les ordene, a fin de procurar la estabilidad del grupo familiar, la protección del menor y de las personas ADULTAS MAYORES. (2)

CAPÍTULO II PARTES

SECCIÓN PRIMERA PROCURACIÓN

PROCURACIÓN OBLIGATORIA

Art. 10.- Toda persona que haya de comparecer al proceso por derecho propio o como representante legal, lo hará por medio de apoderado constituido con arreglo a la Ley, salvo que la misma estuviere autorizada para ejercer la procuración.

Las personas de escasos recursos económicos podrán solicitar ser representadas por auxiliar designado por el Procurador General de la República.

OTORGAMIENTO DEL PODER

Art. 11.- El poder para intervenir en un proceso de familia, se otorgará en escritura pública.

Para intervenir en un proceso específico, el poder también podrá otorgarse mediante escrito firmado por la parte, dirigido al Juez o Tribunal. Dicho escrito podrá presentarse personalmente o con firma legalizada.

También podrá designarse al apoderado en audiencia, de lo que se dejará constancia en el acta respectiva.

El apoderado tiene la facultad de ejecutar en el proceso todos los actos que le corresponden al mandante, salvo aquellos en que, de acuerdo a la Ley, la parte deba actuar personalmente.

En el proceso de familia nadie podrá tomar, por sí, la función de procurador para demandar o contestar la demanda.

PLURALIDAD DE APODERADOS

Art. 12.- Cuando la parte o su representante legal hubiere designado varios apoderados, la notificación hecha a alguno de ellos valdrá respecto de todos, y la actuación de uno vincula a los otros.

SECCIÓN SEGUNDA PLURALIDAD DE SUJETOS

INTERVENCIÓN LITISCONSORCIAL

Art. 13.- Podrán intervenir en el proceso los terceros que sean titulares de un derecho vinculado al objeto de la pretensión y puedan resultar afectados por la sentencia.

Al demandar o al contestar la demanda las partes pueden solicitar al Juez que emplace a un tercero, respecto de quien consideren común la pretensión u oposición.

Hecho el emplazamiento el tercero queda vinculado al proceso y la sentencia surte efectos respecto de él.

LITISCONSORCIO FACULTATIVO

Art. 14.- Varias personas podrán demandar o ser demandadas en un mismo proceso, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto.

Los litisconsortes facultativos serán considerados partes independientes respecto de su pretensión.

LITISCONSORCIO NECESARIO

Art. 15.- Cuando en razón del objeto de la pretensión la sentencia afecte directamente a varias personas, éstas deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso.

Los litisconsortes necesarios serán considerados como una sola parte; sin embargo, se requiere del consentimiento de todos para transigir, allanarse o realizar cualquier acto que signifique la disposición del derecho en litigio.

Las actuaciones procesales de cada litisconsorte favorecerán a los demás.

CONFORMACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO

Art. 16.- En los casos del litisconsorcio necesario, el Juez ordenará la integración del mismo; tratándose de la parte demandante, ordenará la comparecencia de todos los interesados en la forma que establece esta Ley y cuando se refiera a la parte demandada, requerirá al demandante que proporcione los datos necesarios a fin de emplazar a todos los litisconsortes.

Si antes de pronunciar el fallo, el Juez advirtiere la ausencia de personas que conforman el litisconsorcio necesario, ordenará su integración.

INTERVENCIÓN DE TERCEROS

Art. 17.- Los terceros coadyuvantes que intervengan en el proceso lo tomarán en el estado en que se encuentre al momento de su comparecencia; sin embargo, si aquellos propusieren pruebas sobre hechos que no han sido alegados por las partes, el Juez resolverá sobre su recepción.

Los terceros excluyentes también tomarán el proceso en el estado en que se encuentre y podrán proponer las pruebas necesarias para la defensa de sus pretensiones.

SUCESIÓN PROCESAL

Art. 18.- Cuando la parte falleciere o fuere declarada su muerte presunta, el proceso continuará con sus herederos o con quienes representen a la sucesión, siempre que la naturaleza de la pretensión lo permita.

Si se desconociere quien representa a la sucesión, se le emplazará por edicto y si no compareciere, el procurador de familia representará sus intereses, salvo que la otra parte esté representada por la Procuraduría General de la República, en cuyo caso el Juez le asignará un representante.

CAPÍTULO III PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCURADORES DE FAMILIA

Art. 19.- En cada Juzgado de Familia habrá un Procurador de Familia, delegado del Procurador General de la República, quien velará por el interés de la familia, de

los menores, incapaces y de las personas ADULTAS MAYORES, y además actuará en representación de la parte demandada en los casos previstos por la Ley. **(2)**

El Procurador de Familia podrá intervenir y hacer uso de sus derechos en todos los actos procesales.

CARENCIA O AUSENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE MENORES E INCAPACES

Art. 20.- Cuando un menor o un incapaz haya de ser demandado y carezca de representante legal o se ignore el paradero de éste, se expresará tal circunstancia en la demanda y comprobada aquella lo representará el Procurador General de la República, a través de sus auxiliares.

Para comprobar la circunstancia indicada en el Inciso anterior, el Juez señalará audiencia para recibir la prueba y dictar resolución.

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

Art. 21.- Los Procuradores de Familia serán notificados en todos los procesos y diligencias de jurisdicción voluntaria regulados en esta Ley.

TÍTULO II ACTOS PROCESALES

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

IDIOMA

Art. 22.- En todos los actos procesales se empleará el idioma castellano.

Cuando deba ser oído, quien no comprenda, no hable el idioma castellano o sólo pueda darse a entender mediante lenguaje especializado, el Juez nombrará un intérprete.

FORMA DE LOS ACTOS PROCESALES

Art. 23.- La forma de los actos procesales será la necesaria para la finalidad perseguida, salvo cuando la Ley la determine expresamente y en todo caso, se evitará el ritualismo.

PLAZOS

Art. 24.- Los actos procesales deben cumplirse en los plazos establecidos y se contarán en días hábiles.

PERENTORIEDAD E IMPRORROGABILIDAD

Art. 25.- Los plazos señalados para realizar los actos procesales son perentorios, salvo que exista impedimento por justa causa. Vencido el plazo, sin necesidad de petición alguna, se dictará la resolución que corresponda al estado del proceso.

Los plazos señalados para realizar los actos procesales son improrrogables, salvo que exista impedimento por justa causa.

HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS

Art. 26.- Podrá pedirse la habilitación de días inhábiles para la realización de diligencias, cuando diferirlas produzca riesgo para el ejercicio de un derecho o para garantizar el cumplimiento de una providencia judicial. La habilitación deberá ordenarse por lo menos cuarenta y ocho horas antes de los días y horas inhábiles y podrá prorrogarse hasta la conclusión de la diligencia que se trate.

SUSPENSIÓN DE OFICIO

Art. 27.- El Juez decretará la suspensión del proceso, cuando la sentencia que deba dictar dependa de lo que se resuelva en otro proceso que verse sobre una pretensión que no sea procedente resolver en el proceso de familia.

El Juez decretará la continuación del proceso al presentársele la certificación de la sentencia ejecutoriada, que resolvió el conflicto que originó la suspensión. En todo caso, si transcurridos tres años de la suspensión no se presentare dicha certificación, el Juez continuará el proceso de oficio o a instancia de parte.

SUSPENSIÓN A INSTANCIA DE PARTE

Art. 28.- Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar la suspensión del proceso por un plazo que no exceda de tres meses. La solicitud de suspensión podrá presentarse oralmente durante audiencia o por escrito firmado por las partes.

Vencido el término de la suspensión, el Juez continuará el proceso.

SUSPENSIÓN DE PROCESOS ACUMULADOS

Art. 29.- Cuando existiere acumulación de procesos la suspensión de uno de ellos no afectará el curso de los demás; en este caso, el proceso suspendido se excluirá de la acumulación.

NULIDAD

Art. 30.- La nulidad de un acto no afecta la de los posteriores que sean independientes de aquel. La nulidad parcial de un acto no afecta a las otras partes del mismo, cuando sean independientes de ella, ni impide que produzca los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición legal expresa en contrario.

CAPÍTULO II

ACTOS DE DOCUMENTACIÓN

CONTENIDO DE LAS ACTAS

Art. 31.- Cuando de conformidad a la presente Ley se deba levantar Acta, ésta indicará:

- a) El lugar, fecha y hora en que se realiza la diligencia y el proceso a que se refiere;
- b) El nombre del Juez, de las partes y demás personas que intervienen en la diligencia y constancia de la inasistencia de quienes debieron asistir;
- c) El resumen de las actuaciones realizadas y de su resultado;
- d) Las solicitudes y decisiones producidas;
- e) Los recursos interpuestos; y,
- f) Las constancias que la Ley exija.

Previo lectura firmarán el acta todos los intervinientes y cuando alguno no pueda o no quiera firmar, se hará mención de ello y se dará copia a las partes o a sus apoderados.

EXPEDIENTE

Art. 32.- Con la demanda y demás actuaciones se formará el expediente el cual se podrá prestar para su lectura en la sede del Tribunal a las partes, a sus apoderados, representantes legales, abogados y a cualquiera otra persona autorizada por el Juez.

CAPÍTULO III

ACTOS DE COMUNICACIÓN

REGLAS DE NOTIFICACIÓN

Art. 33.- Toda providencia debe ser notificada a las partes o a sus apoderados, entregándoseles una esquila que contenga la resolución respectiva.

En el primer escrito o comparecencia el demandante, el demandado y los demás sujetos que comparezcan al proceso, deberán señalar un lugar para citaciones y notificaciones en la ciudad donde tenga su sede el Tribunal. El Juez mandará subsanar en cualquier momento que lo advierta, la omisión de este requisito.

Las resoluciones que ordenen citar a un tercero o a las partes para que comparezcan a determinado acto serán notificadas en el lugar que al efecto se hubiere señalado.

Las resoluciones pronunciadas en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o debieron concurrir al acto.

El Juez podrá aceptar la proposición de formas especiales de notificación respecto de la parte solicitante, inclusive cualquier medio electrónico, en cuyo caso, el acto se tendrá por notificado transcurridas veinticuatro horas de su realización o envío.

REGLAS DEL EMPLAZAMIENTO

Art. 34.- Cuando el domicilio del demandado fuere conocido, se notificará y emplazará personalmente o por esquila, en su caso.

Si el domicilio del demandado se encontrare fuera de la sede en donde tiene su asiento el Tribunal, se procederá a emplazarlo mediante provisión o exhorto.

Si el domicilio del demandado se encontrare en el extranjero se procederá de conformidad a lo dispuesto en los tratados internacionales o en su defecto, mediante suplicatorio.

Cuando se ignore el paradero del demandado, se le emplazará por edicto, mediante un aviso que se publicará tres veces en un diario de circulación nacional, con intervalos de cinco días.

El edicto deberá contener el nombre del demandante y del demandado, la clase del proceso y la prevención al demandado para que se presente dentro de los quince días siguientes a su última publicación, para ejercer sus derechos; si no lo hiciere se le designará al Procurador de Familia adscrito al Tribunal para que lo represente.

Practicado el emplazamiento, las partes deberán estar a derecho en el proceso y respecto de ellas, se tendrán por notificadas las resoluciones, transcurridas veinticuatro horas de la fijación del edicto en el tablero del Tribunal, tal edicto se fijará el día siguiente de pronunciada la resolución.

En el proceso de familia no se aplicarán las reglas de la declaratoria de ausencia, ni las del término de la distancia.

ANULABILIDAD DE LA NOTIFICACIÓN

Art. 35.- La notificación es anulable:

- a) Si se comprobare error sobre la identidad de la persona notificada;

- b) Si la resolución ha sido notificada en forma incompleta;
- c) Si en el acta no consta la fecha de la notificación;
- d) En caso de disconformidad entre el original y la copia de la esquila; y,
- e) En cualquier falsedad en el acto de comunicación.

SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA

Art. 36.- Cuando el Juez señale una audiencia indicará el lugar, fecha y hora en que deba celebrarse, dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de treinta, contado a partir de la fecha del acto en que se hizo el señalamiento.

Si las partes que han de estar presentes en la audiencia no han sido citadas, por lo menos tres días antes de la fecha señalada para su celebración, dicha audiencia no se llevará a cabo, bajo pena de nulidad, se hará otro señalamiento y se citará de nuevo a las partes.

CAPÍTULO IV ACTOS DE DECISION

PODER COERCITIVO

Art. 37.- El Juez en el ejercicio de sus funciones podrá disponer todas las medidas necesarias para el eficaz cumplimiento de los actos que ordene y si fuere necesario, requerirá la intervención del organismo de seguridad pública.

ERRORES MATERIALES

Art. 38.- Se pueden corregir, en cualquier momento, los errores puramente materiales que contengan las resoluciones judiciales.

REVOCABILIDAD

Art. 39.- Los Decretos de sustanciación podrán revocarse de oficio en cualquier estado del proceso, antes del fallo.

RESOLUCIÓN FIRME

Art. 40.- Las resoluciones judiciales quedan ejecutoriadas transcurridos los plazos para su impugnación, sin necesidad de declaración expresa.

TÍTULO III

ACTIVIDAD PROCESAL

CAPÍTULO I

INICIACIÓN DEL PROCESO

SECCIÓN PRIMERA

INICIACIÓN OFICIOSA

INICIO OFICIOSO

Art. 41.- Cuando de conformidad al Código de Familia el proceso se iniciare de oficio, el Juez dictará resolución en que relacione los hechos en que se fundamenta y la finalidad que se propone, la cual se notificará al Procurador de Familia y a los interesados; y se les citará o emplazará, según el caso, para que comparezcan al proceso.

El proceso también se podrá iniciar de oficio con sólo la manifestación verbal de los hechos por el interesado, en vista de la urgencia del asunto, calificada por el Juez, en el interés de la familia. En estos casos, se procederá de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior.

Si se desconociere el paradero de los interesados o éstos no se apersonaren, el proceso continuará conforme a lo establecido para ello en la presente Ley.

SECCIÓN SEGUNDA

LA DEMANDA

REQUISITOS

Art. 42.- La demanda se presentará por escrito y contendrá los siguientes requisitos:

- a) La designación del Juez a quien se dirige, en los lugares en donde no hubiere oficina receptora de demandas;
- b) El nombre, calidad de mayor o menor de edad y domicilio del demandante y del apoderado; y en su caso, los mismos datos del representante legal;
- c) El nombre, calidad de mayor o menor de edad y domicilio del demandado; en su caso, los mismos datos del representante legal o apoderado. Si se ignorare su paradero, se manifestará esta circunstancia y se solicitará su emplazamiento por edicto;

- d) La narración precisa de los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones;
- e) La pretensión, expresada con precisión y claridad. Cuando se acumulen varias pretensiones, éstas se formularán con la debida separación;
- f) El ofrecimiento y la determinación de los medios de prueba que el demandante pretenda hacer valer;
- g) La designación del lugar que señale el apoderado para recibir notificaciones; así como el lugar donde se pueda emplazar al demandado o citar a la parte demandante, cuando deba comparecer personalmente;
- h) La solicitud de medidas cautelares, cuando fuere procedente;
- i) Los demás requisitos y datos que por la naturaleza de la pretensión exija la Ley o sea indispensable expresar; y,
- j) El lugar, fecha y firma del peticionario;

EN LOS CASOS QUE SE PRETENDA ALIMENTOS DEBERÁ ANEXAR, EN FORMATO PROPORCIONADO POR EL JUZGADO DE FAMILIA, UNA DECLARACIÓN JURADA DE SUS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, LO CUAL SE TOMARÁ COMO PARÁMETRO PARA LA FIJACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA DE ACUERDO AL ART. 254 DEL CÓDIGO DE FAMILIA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN O BIEN LA FALSEDAD EN LOS DATOS O LA OMISIÓN DE INFORMACIÓN HARÁ INCURRIR EN RESPONSABILIDAD PENAL. **(4)**

De la demanda y de los documentos que se presenten se deberá entregar tantas copias como demandados haya y una copia adicional para el archivo del Juzgado.

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

Art. 43.- La demanda sólo podrá modificarse o ampliarse antes de su contestación. Sin embargo, si después de contestada sobreviniere algún hecho nuevo con influencia sobre el derecho invocado por las partes, podrán éstas alegarlo en audiencia.

OFRECIMIENTO DE PRUEBA

Art. 44.- A la demanda se acompañará la prueba documental que se pretenda hacer valer; si no se dispusiere de ella se mencionará su contenido, el lugar en que se encuentra y se pedirá su incorporación al proceso.

Si se solicitare prueba testimonial se indicarán las generales de los testigos y el lugar donde puedan ser citados.

Si se tratase de otros medios de prueba deberá solicitarse su práctica, concretando su objeto y finalidad.

Posteriormente se podrán ofrecer pruebas sobre hechos sobrevinientes o relacionados con los hechos que el demandado aduzca en la contestación.

IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA

Art. 45.- El Juez declarará improcedente la demanda cuando hubiere caducado el plazo para iniciar la acción, exista cosa juzgada o litigio pendiente, siempre que de la demanda o de sus anexos se comprobare esa circunstancia.

SECCIÓN TERCERA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

CONTESTACIÓN

Art. 46.- La contestación de la demanda deberá presentarse por escrito y el demandado se pronunciará sobre la verdad de los hechos alegados en la misma.

El demandado, al contestar la demanda, deberá ofrecer y determinar la prueba que pretenda hacer valer en defensa de sus intereses.

EN LOS CASOS QUE EN LA DEMANDA SE PRETENDA LA FIJACIÓN DE UNA PENSIÓN ALIMENTICIA, EL DEMANDADO DEBERÁ ADJUNTAR A LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA UNA DECLARACIÓN JURADA DE SUS INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, PARA SER TOMADA COMO PARÁMETRO PARA LA FIJACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA DE ACUERDO AL ART. 254 DEL CÓDIGO DE FAMILIA. SI EL DEMANDADO NO CONTESTARE LA DEMANDA PERO SE PRESENTARE POSTERIORMENTE AL PROCESO, DEBERÁ IGUALMENTE HACER LA DECLARACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN O BIEN LA FALSEDAD EN LOS DATOS O LA OMISIÓN DE INFORMACIÓN HARÁ INCURRIR EN RESPONSABILIDAD PENAL. (4)

LA DECLARACIÓN JURADA A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR DEBERÁ HACERSE EN FORMATO PROPORCIONADO AL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUZGADO DE FAMILIA. (4)

ALLANAMIENTO

Art. 47.- En cualquier estado del proceso antes de la sentencia de primera instancia, el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones del demandante, reconociendo sus fundamentos de hecho y de derecho, caso en el cual se procederá sin más trámite a dictar sentencia de conformidad con lo pedido.

IMPROCEDENCIA DE ALLANAMIENTO

Art. 48.- El allanamiento no produce efectos y el Juez podrá rechazarlo y practicar pruebas de oficio cuando:

- a) Advirtiere fraude;
- b) Lo pidiere un tercero excluyente;
- c) El demandado no tuviere la libre disposición del derecho o éste es irrenunciable;
- d) Lo hiciere el apoderado que no esté especialmente facultado;
- e) Los hechos admitidos no pudieren probarse por confesión, si la Ley exige prueba específica;
- f) La sentencia pudiere producir efectos de cosa juzgada respecto de terceros y,
- g) Existiere litisconsorcio necesario y no hubiere conformidad de todos los demandados.

RECONVENCIÓN

Art. 49.- Sólo al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención, siempre que la pretensión del demandado tenga conexión por razón del objeto o causa con la pretensión del demandante.

EXCEPCIONES

Art. 50.- El demandado al contestar la demanda, deberá alegar todas las excepciones dilatorias o perentorias que obren a su favor.

Las excepciones perentorias sobrevinientes podrán ser alegadas en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia.

CAPÍTULO II DESARROLLO DEL PROCESO SECCIÓN PRIMERA PRUEBAS

MEDIOS PROBATORIOS

Art. 51.- En el proceso de familia son admisibles los medios de prueba reconocidos en el derecho común, la prueba documental y los medios científicos.

PRUEBA TESTIMONIAL

Art. 52.- En el proceso de familia no se aplicarán las normas sobre incapacidades y tachas reguladas para la prueba testimonial en la legislación común.

PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA

Art. 53.- Todas las pruebas deben ser producidas en audiencia, salvo las excepciones legales, bajo pena de nulidad.

PRUEBA ANTICIPADA

Art. 54.- El Juez podrá ordenar la práctica anticipada de cualquier prueba cuando no pueda efectuarse en la audiencia o cuando la dilación pueda provocar grave riesgo para el ejercicio del derecho.

La prueba anticipada se practicará previa cita de las partes y del Procurador de Familia, pena de no hacer fe.

EXENCIÓN DE PRUEBA

Art. 55.- No requieren prueba los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la contraria, los hechos notorios y los evidentes.

No obstante lo dispuesto en el Inciso anterior, cuando la Ley exija prueba específica o el Juez la considere necesaria para mejor proveer, ordenará su recepción aún de oficio.

Si los hechos admitidos implican confesión, ésta deberá producirse en audiencia.

VALORACIÓN DE PRUEBA

Art. 56.- Las pruebas se apreciarán por el Juez según las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de la solemnidad instrumental que la Ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos.

SECCIÓN SEGUNDA INCIDENTES

PARTE PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES

PROCEDENCIA

Art. 57.- Se tramitará por vía incidental toda cuestión accesoria, sin abrir otro expediente.

AFECTACIÓN EN EL PROCESO

Art. 58.- Los incidentes no interrumpen el desarrollo del proceso, salvo en los casos de conflicto de competencia, recusación o impedimento y la acumulación de procesos, que se tramitarán conforme a lo dispuesto en esta Ley.

La resolución interlocutoria que decida los incidentes determinados en el Inciso anterior no admite recurso alguno.

PARTE SEGUNDA REQUISITOS

OPORTUNIDAD

Art. 59.- Desde la demanda hasta la celebración de la audiencia preliminar las partes pueden promover incidentes; después sólo podrán hacerlo, cuando se refieran a hechos sobrevinientes.

Los incidentes en segunda instancia se tramitarán de conformidad a lo dispuesto en la presente Ley.

Si en el incidente se declara la falsedad de un documento, se avisará a la Fiscalía General de la República.

FORMALIDADES

Art. 60.- Los incidentes deberán promoverse por escrito, salvo los planteados en audiencia que se podrán formular verbalmente.

El escrito en que se promueve un incidente no requiere formalidades especiales y bastará con indicar claramente la petición, los hechos en que se funda y la mención específica de los medios probatorios que se acompañan u ofrecen.

PARTE TERCERA PROCEDIMIENTO

INCIDENTE ANTES DE AUDIENCIA

Art. 61.- De la petición incidental presentada antes de cualquier audiencia se mandará oír a la parte contraria por tres días, la que deberá contestar mediante escrito con los requisitos señalados para aquella.

Durante el desarrollo de la audiencia y con carácter previo a la cuestión principal, se recibirá la prueba respecto del incidente si fuere necesario y evacuada, se resolverá éste.

INCIDENTE EN AUDIENCIA

Art. 62.- De los incidentes planteados en audiencia se oír a la parte contraria y se decidirán de inmediato.

Si el incidente se planteara en la audiencia y requiriere de prueba que no se pueda incorporar durante la misma, se resolverá en audiencia posterior con prelación a los demás asuntos.

PARTE CUARTA CONFLICTO DE COMPETENCIA

PROCEDENCIA

Art. 63.- Los conflictos de competencia serán dirimidos por la Corte Suprema de Justicia dentro de los ocho días siguientes al recibo de los expedientes. La resolución que dirima el conflicto, determinará el Juez que deba tramitar el proceso. Quien fuere designado para ello no podrá declararse incompetente.

No existe conflicto de competencia cuando ésta se hubiere prorrogado.

El proceso se suspenderá desde el momento en que un Juez se entere que otro Juez conoce del mismo litigio e inmediatamente deberá suscitar el conflicto de competencia.

La declaratoria de incompetencia no afecta la validez de los actos cumplidos.

DECLINATORIA DE COMPETENCIA

Art. 64.- Cuando un Juez se declare incompetente para conocer de un proceso, ordenará remitirlo al Juez que estime competente. Si el Juez que recibe el expediente también se declara incompetente, enviará el expediente dentro de los tres días siguientes a la Corte Suprema de Justicia para que dirima el conflicto.

INHIBITORIA DE COMPETENCIA

Art. 65.- Si un Juez se considera competente para conocer de un proceso que conoce otro Juez, le solicitará que se declare incompetente mediante resolución motivada; si el Juez requerido así lo hiciere, deberá remitirle el expediente dentro de los tres días siguientes, contados a partir de la fecha de recibo del requerimiento. En caso contrario, dentro del mismo plazo y mediante resolución motivada, reafirmará su competencia y solicitará al Juez requirente, la declaratoria de incompetencia y el envío del expediente para conocer del litigio o remitirlo

dentro de los tres días siguientes a su recibo a la Corte Suprema de Justicia, para que dirima el conflicto, si el Juez requirente insiste en su competencia.

Si ambos jueces hubieren formado proceso, deberán remitirlo en el plazo indicado al expresado Tribunal.

PARTE QUINTA RECUSACIÓN E IMPEDIMENTO

PROCEDENCIA

Art. 66.- El Juez o Magistrado podrá ser recusado en cualquier estado del proceso, cuando exista un motivo serio y razonable que no garantice su imparcialidad.

TRÁMITE

Art. 67.- La recusación se debe interponer ante el Juez que conoce del proceso, con expresión de los hechos en que se fundamenta y con el ofrecimiento de pruebas. Dicho funcionario remitirá el escrito que la contenga, al Tribunal Superior a más tardar en la siguiente audiencia, citando al recusante para que dentro de tercero día ocurra al Tribunal Superior a usar de su derecho.

Dentro de los tres días siguientes de recibido el expediente por el Tribunal Superior, éste ordenará las pruebas y fijará lugar, fecha y hora para celebrar audiencia dentro de los ocho días siguientes contados a partir de la fecha de la notificación del referido señalamiento.

En la audiencia se recibirá la prueba y se resolverá sobre la procedencia del incidente.

Si fuere procedente la recusación se ordenará separar al recusado del conocimiento del proceso y se designará al Juez que deba sustituirlo en el cargo; si se declara la improcedencia, el recusante será condenado en costas sin perjuicio de cualquier otra sanción a que hubiere lugar.

VALIDEZ DE LOS ACTOS

Art. 68.- Son válidos los actos realizados con anterioridad a la fecha de presentación del escrito de recusación. Salvo aquellos que causen grave daño o de difícil reparación a las partes antes de la sentencia.

RECUSACIÓN DE SECRETARIO Y ESPECIALISTAS

Art. 69.- El Secretario y los Especialistas podrán ser recusados cuando exista un motivo igual o semejante al que inhabilita al Juez.

De la recusación conocerá el Juez de la causa y deberá resolver dentro de los tres días siguientes de presentado el escrito, sin suspender el curso del proceso.

Si el Juez declara procedente la recusación, nombrará Secretario al interino o designará otros especialistas, según el caso; si la declara improcedente, condenará en costas al recusante, sin perjuicio de cualquier otra sanción a que hubiere lugar.

IMPEDIMENTO

Art. 70.- Cuando el Juez considere que concurre algún motivo serio y razonable que pueda afectar su imparcialidad, por resolución motivada, de oficio, se inhibirá de conocer en el proceso y remitirá el expediente dentro de los tres días siguientes al Tribunal Superior para que declare si es legal o no el impedimento y proceda conforme al trámite de la recusación.

Si el Juez que reciba el expediente considera que no procede el impedimento, fundamentará su resolución y lo remitirá al Tribunal Superior para que dirima el incidente, de conformidad al trámite de la recusación.

PARTE SEXTA ACUMULACIÓN DE PROCESOS

PROCEDENCIA

Art. 71.- Procede de oficio o a petición de parte la acumulación de procesos en trámite, ante el mismo o diferentes Juzgados, cuando concurren las circunstancias siguientes:

- a) Que el Tribunal en el que se realice la acumulación sea competente en razón de la materia para conocer de todos los procesos;
- b) Que los procesos se encuentren en primera instancia y no estén en estado de dictarse el fallo; y,
- c) Que los procesos se refieran a pretensiones idénticas entre las mismas partes; o sobre pretensiones diferentes pero provenientes de las mismas causas, sean iguales o diferentes las partes; o sobre pretensiones diferentes siempre que las partes sean idénticas y recaigan sobre las mismas cosas.

Procederá la acumulación durante la ejecución de la sentencia entre procesos de diferente materia, cuando se trate del cumplimiento de obligaciones de contenido económico y el demandado fuere el mismo.

En general, la acumulación será procedente cuando la sentencia que deba pronunciarse en un proceso produzca efecto de cosa juzgada con relación a los restantes.

COMPETENCIA

Art. 72.- De la acumulación conocerá el Juez que tramite el proceso más antiguo.

La antigüedad se determinará por la fecha de notificación de la resolución que admite la demanda o de la que ordena la práctica de medidas cautelares.

TRÁMITE

Art. 73.- En la solicitud de acumulación se expresarán los motivos que la fundamentan y si los procesos se tramitan en distintos Juzgados se anexará constancia sobre la existencia de ellos, el estado en que se encuentran, la fecha de notificación de la resolución que admite la demanda y la fecha de la práctica de las medidas cautelares, cuando fuere el caso y copia de la demanda y del escrito de excepciones.

El escrito que solicite la acumulación de procesos será notificado a la otra parte para que dentro de los tres días siguientes se oponga, si fuere el caso y el Juez resolverá sobre la procedencia de la acumulación, dentro de los tres días siguientes de efectuada la notificación.

El Juez denegará la acumulación si de la certificación y demás documentos se comprueba su improcedencia.

Si declara procedente la acumulación, mediante oficio requerirá al Juez que conoce de los otros procesos para que se los remita dentro de los tres días siguientes. Si el Juez requerido se negare a la remisión del expediente lo manifestará dentro del mismo plazo y el Juez requirente remitirá la solicitud de acumulación y los anexos a la Corte Suprema de Justicia quien decidirá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones.

Si la instancia hubiere terminado, el Juez requerido lo informará al Juez requirente y no remitirá el expediente.

Cuando los procesos se tramiten en el mismo Juzgado, el Secretario pasará los expedientes al Juez para que resuelva sobre la acumulación.

El proceso en que se pide la acumulación se suspenderá desde que se presente la solicitud respectiva y el requerimiento tendrá igual efecto en los restantes procesos. Todo sin perjuicio de las medidas de urgencia que sean procedentes.

EFFECTOS DE LA RESOLUCIÓN

Art. 74.- Si el Juez declara improcedente la acumulación, condenará a la parte y a su apoderado en costas y a petición de parte, previo trámite incidental, podrá condenar al pago de los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del proceso.

Decretada la acumulación, el proceso más adelantado en su tramitación detendrá su curso, hasta que todos lleguen al mismo estado y se decidirán en la misma sentencia.

SECCIÓN TERCERA MEDIDAS CAUTELARES

PARTE PRIMERA REGLAS GENERALES

APLICACIÓN GENÉRICA

Art. 75.- Las medidas cautelares se podrán decretar en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte.

Las medidas cautelares como acto previo, por regla general sólo se decretarán a petición de parte, bajo la responsabilidad del solicitante y cesarán de pleno derecho si no se presenta la demanda dentro de los diez días siguientes a su ejecución. En este caso, el Juez tomará las medidas necesarias para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de decretarlas.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS

Art. 76.- El Juez podrá decretar las medidas cautelares establecidas en las Leyes y las que juzgue necesarias para la protección personal de los miembros de la familia o evitar que se causen daños graves o de difícil reparación a las partes antes de la sentencia o para asegurar provisionalmente los efectos de ésta.

La duración de la orden de protección será establecida por el Juez en la resolución.

La medida cautelar se mantendrá hasta la ejecución de la sentencia, salvo que para garantizar el cumplimiento de la misma sea necesario prorrogar su vigencia.

FACULTADES DEL JUEZ

Art. 77.- El Juez deberá establecer el alcance de las medidas cautelares y disponer su modificación, sustitución o cesación.

PARTE SEGUNDA PROCEDIMIENTO

EXTENSIÓN DE COMPETENCIA

Art. 78.- La competencia en razón del territorio de los Jueces de Familia, se extiende a toda la República para conocer y decidir las medidas cautelares que les sean solicitadas.

FORMA Y CONTENIDO DE LA PETICIÓN

Art. 79.- La petición deberá hacerse por escrito con expresión de los hechos, el fundamento de las medidas, la determinación precisa de éstas y su alcance.

TRÁMITE

Art. 80.- La medida cautelar se decretará con la petición del interesado, sin notificación o audiencia previa de la contraparte y ninguna petición o incidente planteado por el destinatario de la medida impedirá su cumplimiento.

Una vez que se hubiere ejecutado la medida, se hará la notificación correspondiente si el destinatario de la medida no hubiere comparecido.

Cuando la medida cautelar consista en una orden de protección que genere una obligación de carácter personal, se establecerá en la resolución un plazo para su cumplimiento y se notificará al obligado.

RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE

Art. 81.- Cuando la medida cautelar sea decretada con base en hechos expresados por el peticionario cuya falsedad se comprobare, éste será responsable por los daños y perjuicios que la medida causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

En este caso, el Juez se pronunciará mediante resolución o en la sentencia sobre la responsabilidad del peticionario y previa comprobación de los daños y perjuicios causados fijará su cuantía y avisará a la Fiscalía General de la República.

CAPÍTULO III

CONCLUSIÓN DEL PROCESO

SECCIÓN PRIMERA

SENTENCIA

REQUISITOS

Art. 82.- La sentencia no requiere de formalidades especiales, será breve y contendrá:

- a) Lugar, día y hora de su pronunciamiento, el proceso a que se refiere e indicación de las partes;
- b) Relación sucinta de los hechos y cuestiones planteadas;
- c) Análisis de las pruebas producidas;

- d) Motivación, con expresión de los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustente la decisión;
- e) Pronunciamiento preciso y claro sobre las pretensiones deducidas en el proceso y lo que sea su consecuencia; y,
- f) Ordenar medidas de protección o la continuación de las ya existentes.

En la sentencia no se harán transcripciones íntegras de los pasajes del proceso y deberá estar firmada por el Juez y Secretario, so pena de nulidad.

SENTENCIAS QUE NO CAUSAN COSA JUZGADA

Art. 83.- Las sentencias sobre alimentos, cuidado personal, suspensión de autoridad parental, tutorías, fijación de regímenes de visitas, deber de convivencia y todas aquellas que no causan cosa juzgada de conformidad al Código de Familia, podrán modificarse o sustituirse de acuerdo a la Ley.

En el caso de las medidas de protección de menores, el Juez las revisará de oficio cada seis meses, a fin de mantenerlas, sustituirlas, modificarlas o cesarlas.

En los casos contemplados en los Incisos anteriores, el expediente respectivo no se archivará en forma definitiva y en el mismo se hará constar el mantenimiento de modificaciones, sustituciones, revocaciones o cesaciones y la sentencia causa ejecutoria, no obstante la interposición de recurso.

SECCIÓN SEGUNDA CONCLUSIÓN EXTRAORDINARIA PARTE PRIMERA CONCILIACIÓN Y TRANSACCIÓN

PROCEDENCIA

Art. 84.- Las partes podrán conciliar en cualquier estado del proceso antes del fallo de primera instancia; también podrán transigir antes de que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. En ambos casos, siempre que no sea en menoscabo de los derechos que por su naturaleza son irrenunciables. En relación a esos derechos tampoco podrá someterse la controversia a árbitros.

La conciliación se podrá solicitar por escrito firmado por las partes o en audiencia, en cuyo caso se hará constar en acta.

El Juez aprobará toda conciliación procesal o extra-procesal, así como cualquier transacción, siempre que se ajuste a lo establecido en el Inciso Primero de este Artículo.

Si el acuerdo versare sobre la totalidad de los puntos controvertidos declarará concluido el proceso; si el acuerdo fuere parcial, el proceso continuará sobre los puntos en que no hubo avenimiento o respecto de las personas no afectadas.

EFFECTOS

Art. 85.- El acuerdo a que llegaren las partes produce los mismos efectos que la sentencia ejecutoriada y se hará cumplir en la misma forma que ésta.

PARTE SEGUNDA DESISTIMIENTO

DESISTIMIENTO DEL PROCESO

Art. 86.- En cualquier estado del proceso, hasta antes del fallo de primera instancia, las partes de común acuerdo podrán desistir del mismo.

El Juez declarará concluido el proceso, volverán las cosas al estado que se encontraban antes de la presentación de la demanda y quedará a salvo el derecho de las partes de plantear nuevamente sus pretensiones.

DESISTIMIENTO DE ACTOS PROCESALES Y EXCEPCIONES

Art. 87.- Puede desistirse de un recurso, incidente o excepción sobre puntos que no dan fin al proceso y sobre una prueba propuesta, sin necesidad de aceptación de la otra parte.

DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN

Art. 88.- El demandante podrá desistir de la pretensión, en cualquier estado del proceso. En este caso, no se requerirá la conformidad del demandado y el Juez se limitará a examinar si es procedente por la naturaleza del derecho en litigio, en caso afirmativo, declarará terminado el proceso y el demandante no podrá plantear nuevamente la pretensión con base en los mismos hechos.

DESISTIMIENTO DE LA OPOSICIÓN

Art. 89.- Cuando el demandado desista de la oposición a la pretensión que hubiere formulado se tendrá como allanamiento a la pretensión del demandante y se regulará por lo establecido para el mismo.

PROHIBICIÓN

Art. 90.- No podrán desistir el representante legal, ni el Procurador de Familia, ni el apoderado que no esté especialmente facultado.

TÍTULO IV

PROCESO DE FAMILIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

FINALIDAD DEL PROCESO DE FAMILIA

Art. 91.- El proceso tiene por finalidad la decisión de los conflictos surgidos de las relaciones de familia.

REBELDÍA

Art. 92.- En el proceso de familia no habrá declaratoria ni acuse de rebeldía; el demandado podrá comparecer en cualquier estado del proceso, tomándolo en el estado en que se encuentre.

ESTUDIO SICOSOCIAL

Art. 93.- En el proceso de familia, siempre que la Ley lo ordene o el Juez lo considere conveniente, se realizarán estudios sicosociales por especialistas; dichos estudios se practicarán dentro de los diez días siguientes a la notificación respectiva.

Tales estudios son confidenciales; únicamente podrán conocerlos el Juez, las partes, los representantes legales y los apoderados. No podrá dárseles publicidad en forma alguna, ni extenderse certificación de los mismos.

INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN

Art. 94.- En cualquier estado del proceso, si se advirtiere que a un menor se le amenaza o vulnera algún derecho y requiere protección, se ordenarán las medidas necesarias y, si fuere el caso, se dispondrá que el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor* las ejecute. También se informará a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

CAPÍTULO II

ACTOS PREVIOS A LA AUDIENCIA PRELIMINAR

ADMISIÓN

Art. 95.- Presentada la demanda el Juez resolverá sobre su admisibilidad dentro de los cinco días siguientes al de su presentación, y si la admitiere ordenará el emplazamiento del demandado.

SUBSANACIÓN

Art. 96.- Si la demanda careciere de alguno de los requisitos exigidos, el Juez los puntualizará y ordenará al demandante que los subsane dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución respectiva, bajo prevención de declararla inadmisibile. Si la demanda se declara inadmisibile el derecho quedará a salvo y el demandante podrá plantear nueva demanda.

CONTESTACIÓN

Art. 97.- Emplazado el demandado deberá contestar la demanda dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación respectiva.

EXAMEN PREVIO

Art. 98.- Dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo para contestar la demanda el Juez examinará ésta, su contestación y los documentos presentados, de lo cual dejará constancia.

Si las excepciones dilatorias planteadas requieren de pruebas, éstas se recibirán en la audiencia preliminar. Si por la naturaleza de la prueba solicitada, ésta no pudiere practicarse en audiencia se procederá de conformidad con las reglas de la prueba anticipada.

CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA PRELIMINAR

Art. 99.- Concluido el examen previo, el Juez señalará fecha y hora para la audiencia preliminar.

La resolución que señale la fecha para la audiencia preliminar se notificará a las partes y a sus apoderados o representantes legales.

A la audiencia preliminar se citará al Procurador de Familia adscrito al Tribunal

COMPARECENCIA PERSONAL

Art. 100.- Las partes deberán comparecer personalmente a la audiencia y en ella serán asistidos por sus apoderados o representantes legales.

Si la parte se encontrare domiciliada fuera de la República la audiencia se celebrará con su apoderado o representantes legales, en su caso, quien podrá conciliar, admitir hechos y desistir si estuviere facultado para ello.

JUSTIFICACIÓN

Art. 101.- Antes de la audiencia las partes podrán probar justo impedimento para no comparecer personalmente, en cuyo caso el Juez señalará nueva fecha dentro de los quince días siguientes.

La audiencia se celebrará en la nueva fecha señalada, no obstante que se alegare por alguna de las partes fuerza mayor o caso fortuito para no comparecer; y en tal caso, aquella se llevará a cabo con el apoderado o representante de la parte ausente quien podrá conciliar, admitir hechos y desistir cuando estuviere especialmente facultado para ello.

CAPÍTULO III AUDIENCIA PRELIMINAR

SECCIÓN PRIMERA FASE CONCILIATORIA

COMPARENCIA

Art. 102.- La comparecencia a la conciliación debe ser personal, salvo las excepciones legales.

DESARROLLO

Art. 103.- La audiencia preliminar se celebrará en la fecha y hora señaladas. Una vez constatada la presencia de las partes, se iniciará con la fase conciliatoria y se desarrollará en la siguiente forma:

El Juez hará un resumen de los hechos y de las pretensiones de ambas partes e indicará a éstas la conveniencia de resolver el asunto en forma amigable, invitándolas a que propongan fórmulas de arreglo y en caso de que no lo hagan podrá proponérselas.

A continuación, serán oídas las partes, con iguales oportunidades de intervención, comenzando por el demandante y cuando el Juez considere que se ha discutido lo suficiente, dará por concluido el debate.

Si las partes llegaren a un acuerdo el Juez lo aprobará si lo estima legal, y si no se lograre la conciliación, ésta se podrá solicitar nuevamente en forma conjunta.

DOCUMENTACIÓN

Art. 104.- De lo ocurrido en la fase conciliatoria se dejará constancia en acta con los requisitos contemplados para ésta, consignándose además la conciliación acordada o la persistencia de las diferencias, indicándose con precisión los puntos sobre los cuales disienten las partes.

INASISTENCIA A LA CONCILIACIÓN

Art. 105.- Si las partes o alguna de ellas no compareciere a la conciliación no obstante estar citadas, se hará constar esta circunstancia y se continuará el proceso.

SECCIÓN SEGUNDA

FASE SANEADORA

EXCEPCIONES

Art. 106.- Concluida la fase conciliatoria dentro de la audiencia preliminar, el Juez si lo considera necesario, interrogará a las partes sobre los hechos relacionados con las excepciones dilatorias, recibirá la prueba y procederá a resolverlas.

Si se hubieren planteado excepciones perentorias se decidirán en el fallo.

MEDIDAS SANEADORAS

Art. 107.- Decididas las excepciones dilatorias el Juez decretará las medidas necesarias para sanear los vicios del proceso o precaverlos, corregir los errores y omisiones de derecho, integrar el litisconsorcio necesario y adecuar el trámite procesal a fin de evitar que el proceso concluya con sentencia inhibitoria y prevenir el fraude procesal.

FIJACIÓN DE LOS HECHOS

Art. 108.- Posteriormente se procederá a la fijación de los hechos alegados por las partes y se les oír al respecto para establecer aquellos en que estuvieren de acuerdo. Los hechos confesados que sean susceptibles de prueba de confesión quedarán relevados de otro medio probatorio.

Si el Juez lo considera necesario requerirá a las partes para que, sin alterar lo sustancial de la demanda y de la contestación, puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar los puntos controvertidos.

ORDENACIÓN DE PRUEBA

Art. 109.- A continuación, el Juez resolverá sobre los medios probatorios solicitados por las partes; rechazará los que fueren inadmisibles, impertinentes o inútiles y admitirá los medios probatorios que estime pertinentes al caso, para que sean presentados y ordenará de oficio los que considere necesarios.

FALLO EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR

Art. 110.- Si en la audiencia preliminar las partes están de acuerdo en los hechos y sólo se tratare de aplicar la Ley al objeto del proceso o si las pruebas presentadas en ella fueren concluyentes, el Juez fallará y si fuere posible dictará la sentencia en la misma audiencia; en caso contrario, pronunciará la sentencia dentro de los cinco días siguientes.

INASISTENCIA DEL DEMANDANTE

Art. 111.- La inasistencia no justificada del demandante y de su apoderado a la audiencia preliminar, producirá el efecto de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la presentación de la demanda, se dejarán sin efecto las medidas cautelares si las hubiere y se archivará el expediente, salvo cuando se trate de derechos indisponibles. Además se le impondrá al que no asista una multa equivalente al valor de uno a diez días de salario neto que devengare.

Si no se lograre establecer dicho salario se tomará como base el salario mínimo vigente.

INASISTENCIA DEL DEMANDADO

Art. 112.- Si la demanda no fuere contestada y además el demandado no se hiciere presente en la audiencia preliminar, concluida la fase conciliatoria, el Procurador de Familia asumirá la representación; sin embargo, se notificará personalmente al demandado la asunción de su representación, así como la sentencia definitiva.

El Procurador de Familia no representará al demandado cuando la demanda se promoviere por el Procurador General de la República como representante legal del demandante, en cuyo caso el Juez designará quien lo represente.

CITACIÓN PARA AUDIENCIA DE SENTENCIA

Art. 113.- Concluida la fase saneadora el Juez fijará la fecha para la celebración de la audiencia de sentencia y ordenará la citación de los testigos, especialistas, peritos y del Procurador de Familia. Esta resolución surtirá efectos de notificación y citación a las partes.

CAPÍTULO IV AUDIENCIA DE SENTENCIA

INICIACIÓN

Art. 114.- Verificada las citaciones se celebrará la audiencia en la fecha y hora señaladas; el Juez la declarará abierta con los presentes y se procederá a la lectura de las peticiones de la demanda y contestación en cuanto a los puntos controvertidos.

RECEPCIÓN DE PRUEBAS

Art. 115.- Resueltas las excepciones dilatorias que no lo fueron en la audiencia preliminar, así como los incidentes y demás asuntos pendientes el Juez procederá a la recepción de pruebas, se leerán y anexarán las pruebas anticipadas que existieren, las conclusiones de los dictámenes periciales y de los estudios sico-sociales, cuando fuere el caso; los que se podrán ampliar o aclarar en la audiencia.

El Juez podrá ordenar la grabación magnetofónica de lo actuado en la audiencia y conservará la grabación bajo su responsabilidad.

RECEPCIÓN DE TESTIMONIOS

Art. 116.- El Juez llamará a los testigos, uno a uno, comenzará por los que ofrece el demandante y continuará con los del demandado; sin embargo, podrá alterar ese orden cuando lo considere necesario, para el mejor esclarecimiento de los hechos.

Antes de declarar los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni recibir información de lo que ocurre en la audiencia. El incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo.

DECLARACIÓN E INTERROGATORIO

Art. 117.- El Juez preguntará a los peritos, especialistas y testigos sobre su identidad y les concederá la palabra para que informen lo que saben sobre los hechos alegados por las partes.

Los declarantes podrán consultar documentos, cuando el Juez lo autorice por tratarse de cifras o fechas o cuando no afecte la espontaneidad del testimonio. En este caso los documentos podrán ser leídos e incluidos como prueba, aún de oficio.

El Juez, las partes, los apoderados y el Procurador de Familia podrán interrogar directamente a los declarantes y a las partes para el esclarecimiento de la verdad.

El Juez moderará el interrogatorio, evitará las preguntas capciosas, sugestivas e impertinentes y procurará que el interrogatorio se produzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad del interrogado.

Los Apoderados y los Procuradores de Familia podrán pedir la revocatoria de las decisiones del Juez que limiten el interrogatorio y objetar las preguntas que se formulen.

PRUEBA DOCUMENTAL

Art. 118.- Los documentos deberán exhibirse en la audiencia, con indicación de su origen; los instrumentos podrán leerse y las partes o sus apoderados podrán controvertir el contenido de los mismos.

El Juez podrá ordenar que las grabaciones sean presenciadas u oídas únicamente por las partes, sus apoderados y el Procurador de Familia.

PRUEBA PARA MEJOR PROVEER

Art. 119.- Si en la audiencia de sentencia surgieren nuevos hechos que requieran su comprobación, el Juez podrá ordenar la recepción de las pruebas que considere necesarias.

SUSPENSIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA

Art. 120.- Si no fuere posible recibir toda la prueba en la audiencia, se ordenará suspenderla y se citará para continuarla dentro de los diez días siguientes.

ALEGACIONES DE LAS PARTES

Art. 121.- Recibidas las pruebas, se oirán a continuación las alegaciones del demandante, demandado y Procurador de Familia, si fuere el caso, en su orden, por un tiempo máximo de treinta minutos cada uno.

FALLO

Art. 122.- Concluidas las alegaciones se procederá en la misma audiencia a dictar el fallo en el que se resolverán todos los puntos propuestos y los que por mandato legal sean su consecuencia; si fuere posible se dictará la sentencia, caso contrario, se pronunciará ésta dentro de los cinco días siguientes.

PROVIDENCIA COMPLEMENTARIA

Art. 123.- Dentro de las veinticuatro horas de notificada la sentencia, las partes podrán solicitar modificación o ampliación en lo accesorio y el Juez deberá resolver dentro de los tres días siguientes.

CAPÍTULO V DISPOSICIONES ESPECIALES

SECCIÓN PRIMERA DIVORCIO Y NULIDAD

MEDIDAS CAUTELARES

Art. 124.- En los procesos de divorcio contencioso y nulidad de matrimonio, simultáneamente con la admisión de la demanda o antes, según la urgencia del caso, el Juez podrá decretar las siguientes medidas:

- Autorizar la residencia separada de los cónyuges y el uso provisional de la vivienda y de los bienes muebles de uso familiar;
- Disponer que uno de los cónyuges, ambos o un tercero se encarguen del cuidado de los hijos comunes, teniendo en cuenta el interés superior del menor;
- Determinar la cuantía que cada cónyuge deba aportar por concepto de alimentos, con base en la capacidad económica de los mismos, para los

gastos de los hijos y el sostenimiento del hogar. Cuando fuere el caso, también se determinará el valor de la cuota alimentaria para el sostenimiento del otro cónyuge; y,

- d) Decretar, a petición de parte, la anotación preventiva de la demanda en el registro donde se encuentren inscritos los bienes comunes o propios, anotación que surtirá efecto durante todo el tiempo que dure el proceso o hasta que se practique la liquidación correspondiente.

El Juez deberá ordenar la práctica de las pruebas relativas a las cuestiones accesorias que debe resolver en la sentencia.

DIVORCIO CONTENCIOSO Y NULIDAD

Art. 125.- En los procesos de divorcio contencioso y de nulidad del matrimonio, dentro de los tres días siguientes de ejecutoriada la sentencia, el Juez librará oficio al Registro del Estado Familiar del lugar donde se encuentre asentada la partida de matrimonio, ordenándosele su cancelación y la inscripción del divorcio, o de la sentencia de nulidad, en su caso; asimismo, librará oficio a la oficina del Registro del Estado Familiar donde se encuentren asentadas las partidas de nacimiento de quienes fueron partes en dichos procesos, para que se hagan las anotaciones marginales de Ley.

SECCIÓN SEGUNDA UNIÓN NO MATRIMONIAL Y CONVIVENCIA

DECLARATORIA DE LA UNIÓN NO MATRIMONIAL

Art. 126.- En la resolución que admite la demanda para la declaratoria de existencia de la unión no matrimonial, el Juez ordenará el emplazamiento del demandado y además que se emplace por edicto a quienes consideren que la sentencia les afectará en sus derechos, para que comparezcan a ejercer su defensa.

Si la declaratoria se pidiere en caso de fallecimiento de uno de los convivientes y se desconociere quienes son los herederos del demandado, se manifestará esta circunstancia en la demanda y en su admisión se ordenará el emplazamiento por edicto para los efectos señalados en el Inciso anterior.

El Juez ordenará la práctica de las pruebas tendientes a probar las cuestiones accesorias que debe resolver en la sentencia.

En este proceso podrán decretarse las medidas cautelares establecidas para el divorcio y la nulidad del matrimonio.

DECLARATORIA DE LA CALIDAD DE CONVIVIENTE

Art. 127.- La petición para acreditar la calidad de conviviente a fin de hacer uso de cualesquiera de los derechos otorgados por el Código de Familia, podrá ser presentada por uno sólo de los convivientes durante la existencia de ese estado y se tramitará de conformidad a las reglas del Proceso de Familia.

En la resolución que declare la calidad de conviviente, se autorizará el ejercicio del pretendido derecho.

SECCIÓN TERCERA RELACIONES PERSONALES Y PATRIMONIALES

DESACUERDO ENTRE CÓNYUGES Y CONVIVIENTES

Art. 128.- En los procesos por desacuerdos entre cónyuges y convivientes relativos a las relaciones personales o patrimoniales, que no signifiquen un proceso diferente, el Juez, al admitir la demanda ordenará la entrevista con el psicólogo del Tribunal, quien determinará la necesidad de asistencia a programas de orientación y apoyo sociofamiliar.

INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE RESPETO

Art. 129.- En el proceso por incumplimiento del deber de respeto entre cónyuges o convivientes, el Juez podrá decretar en la resolución que admite la demanda, las medidas cautelares que considere necesarias y además ordenar medidas de protección para los miembros de la familia afectada.

MEDIDA DE PROTECCIÓN

Art. 130.- La medida de protección podrá incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

- a) La obligación de abstención de todo acto molesto, hostigante, persecutorio, intimidatorio, amenazante o cualquier otro que genere perjuicio físico o psíquico a cualquier miembro de la familia;
- b) El confiar provisionalmente el cuidado personal de los hijos a uno de los cónyuges, a ambos o a un tercero;
- c) La exclusión del hogar familiar del infractor, independientemente de los derechos reales o personales que tenga sobre el mismo;
- d) La obligación alimentaria y la determinación de su cuantía;

- e) La prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, enervantes, estupefacientes, alucinógenos, o sustancias que generen dependencia física o psíquica;
- f) La prohibición de visitar el hogar familiar y lugares de trabajo o estudio u otros similares que frecuente algún miembro del grupo familiar;
- g) La prohibición de disposición de los bienes que constituyen el menaje familiar y la obligación de restitución de los mismos;
- h) La obligación de cancelar los gastos de mudanza de la familia, si a ello hubiere lugar;
- i) La prestación de caución juratoria, obligándose a no incurrir en los mismos hechos; y,
- j) La asistencia obligatoria a programas educativos o terapéuticos.

DISOLUCIÓN JUDICIAL

Art. 131.- En el proceso de disolución judicial de la comunidad diferida, se emplazará por edicto a los acreedores para que hagan valer sus créditos.

El demandante podrá solicitar como medida cautelar la anotación preventiva de la demanda y el secuestro preventivo sobre los bienes que puedan ser objeto de gananciales y de los comunes que estuvieren en cabeza de la otra parte. En este caso se respetarán los derechos de tercero.

Si se declarare la disolución del régimen patrimonial, la medida cautelar continuará vigente durante el trámite de liquidación del mismo.

Cualesquiera de los cónyuges podrá solicitar que se levanten por medio de incidentes las medidas cautelares que afecten sus bienes propios.

VENTA DE BIENES

Art. 132.- En el caso del Artículo anterior, si no hubiere dinero suficiente para el pago de las deudas y el acreedor pidiere con justa causa la venta de bienes, cualesquiera de las partes podrá solicitar que sean vendidos determinados bienes para efectuar el pago.

FORMACIÓN DE INVENTARIO

Art. 133.- En los casos en que la Ley exija el inventario de bienes se observarán las siguientes reglas:

- a) Las partes presentarán por escrito, bajo juramento, un inventario privado de los bienes, con expresión de su valor, así como del activo y del pasivo correspondiente y de los valores que asignen a los bienes;

- b) En el pasivo se incluirán las obligaciones que consten en título que tenga fuerza ejecutiva, así como las que a pesar de no tenerla sean aceptadas expresamente por las partes en la audiencia. Se entenderá que quienes estando obligados no concurren a la audiencia, aceptan las deudas que los demás hayan admitido, salvo prueba en contrario;
- c) No se incluirán las obligaciones que consten en título que tenga fuerza ejecutiva, si son objetadas por cualesquiera de las personas que intervienen en la audiencia.
- d) Los acreedores cuyos créditos no fueron inventariados podrán hacerlos valer mediante incidente o en proceso separado;
- e) Presentado el inventario el Juez citará a audiencia a las partes y a todas las personas que tengan interés en su formación y si hubiere acuerdo sobre el mismo se aprobará;
- f) Si hubieren oposiciones a que se incorpore al inventario alguno de los bienes, aquellas se resolverán conjuntamente mediante incidente; y,
- g) Si se hubiere dejado de inventariar bienes, se podrá solicitar inventario y evalúos adicionales.

Cuando se trate de formación de inventario para la disolución del régimen de comunidad diferida, se incluirán las compensaciones debidas a la masa de bienes, cuando se denuncien por la parte obligada o ésta acepte expresamente las que denuncia la otra. También se incluirán los reintegros que la masa común de bienes debe a cualesquiera de los cónyuges.

No se incluirán en el inventario los bienes propios de los cónyuges y en caso de incluirse podrán ser excluidos mediante incidente.

EXCLUSIÓN DE BIENES

Art. 134.- Cuando se promoviere proceso sobre la propiedad de bienes inventariados en un proceso de familia, las partes de éste podrán solicitar que se excluyan total o parcialmente del inventario; sin perjuicio de efectuar posteriormente un inventario y evalúo adicional.

Esta petición solo podrá formularse antes del fallo y a la misma se anexará constancia sobre la existencia del otro proceso.

PARTICIÓN DE BIENES¹

Art. 135.- Aprobado el inventario y evalúo de bienes las partes presentarán por escrito la participación respectiva; si no existiere ninguna objeción, el Juez la aprobará.

1 En el Diario Oficial el epígrafe del Art. 135 se ubica entre el inciso 1° y el inciso 2° del Art. 134, se considera que lo correcto es tal como se ha dejado consignado en la presente publicación.

Si existen objeciones se tramitarán y resolverán conjuntamente en un solo incidente. Si no prospera ninguna objeción el Juez aprobará la partición.

En caso contrario, ordenará que se hagan las modificaciones pertinentes en un término máximo de treinta días con expresión concreta del sentido en que deben ejecutarse las modificaciones.

El Juez ordenará que la partición se repita cuando no se esté conforme a derecho.

Elaborada nuevamente la partición, el Juez la aprobará si incluye las modificaciones que ordenó; en caso contrario, realizará las modificaciones necesarias.

La certificación de la sentencia será inscrita en el registro correspondiente cuando aquella contenga actos sujetos a dicha formalidad.

Las partes podrán pedir que el Juez les entregue materialmente los bienes que les corresponden.

PARTICIÓN ADICIONAL

Art. 136.- Si terminado el proceso aparecieren nuevos bienes que debieron haberse inventariado, se hará la solicitud de partición adicional por escrito que contendrá la relación de los bienes y el valor dado a los mismos.

La partición adicional se regirá por las reglas de los Artículos precedentes y se tramitará en el mismo expediente.

DESACUERDO

Art. 137.- Si no hubiere acuerdo en la partición de los bienes inventariados se nombrará partidador para que la realice y verificada ésta, será aprobada por el Juez si no hubiere objeción. En caso contrario se procederá según lo prescrito para ello en las reglas que lo anteceden.

INVENTARIO DE BIENES DEL PUPILO

Art. 138.- Para el inventario de los bienes del pupilo se observarán las reglas siguientes:

- a) Deberá practicarse dentro del plazo de los treinta días siguientes al discernimiento del cargo al tutor y antes de tomar parte alguna en la administración; en todo caso, el Juez puede ampliar el plazo según las circunstancias; y,
- b) Se hará relación de todos los inmuebles y muebles del pupilo, determinándolos o señalándolos colectivamente, si fueren fungibles con expresión del precio, cantidad y calidad; sin perjuicio de hacer las consideraciones necesarias para poner a salvo la responsabilidad del tutor.

Al inventario se anexarán los documentos con que deba comprobarse la propiedad sobre los muebles o inmuebles y las constancias sobre los créditos y deudas.

El tutor que sucede a otro recibirá los bienes por el inventario anterior y anotará su conformidad o hará las observaciones pertinentes.

ALIMENTOS

Art. 139.- En el proceso de alimentos se seguirán las siguientes reglas:

- a) El Juez ordenará el pago de alimentos provisionales desde la admisión de la demanda, cuando se ofrezca fundamento razonable para ello;
- b) El Juez de oficio ordenará la práctica de las pruebas necesarias para establecer la capacidad económica del demandado y la necesidad de alimentos del demandante, si las partes no las hubieren aportado;
- c) En la sentencia se podrá ordenar la constitución de garantía hipotecaria, prendaria o de cualquier otra clase para garantizar el pago de alimentos;
- d) Para hacer efectivo el pago de alimentos provisionales se seguirá ejecución en el mismo expediente y sólo podrá oponerse la excepción de cumplimiento de la obligación;
- e) En este proceso no se admite la intervención de terceros acreedores; y
- f) Si se hubiere incumplido con la obligación de presentar declaración jurada de ingresos, egresos y bienes, o se hubiera omitido o falseado información en la misma, certificará a la Fiscalía General de la República para que se siga el proceso penal correspondiente. (4)

SECCIÓN CUARTA FILIACIÓN

INVESTIGACIÓN

Art. 140.- En los procesos de investigación de la paternidad o de la maternidad, el Juez a solicitud de parte o de oficio, ordenará que se practiquen las pruebas científicas necesarias al hijo y a sus ascendientes y a terceros para reconocer pericialmente las características antropomórficas, hereditarias y biológicas del hijo y de su presunto padre o madre.

La negativa de la parte o de su representante legal, en su caso, a la práctica de estos exámenes, deberá ser apreciada por el Juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Cuando se trate de demandar a un menor de edad, éste podrá comparecer personalmente al proceso y nombrar apoderado.

EXENCIÓN DE TRÁMITE

Art. 141.- En cualquier estado del proceso en que se produzca el reconocimiento del hijo, conforme a lo establecido en el Código de Familia, el Juez fallará y pronunciará la sentencia correspondiente.

RESOLUCIÓN

Art. 142.- El Juez al decidir sobre la filiación demandada se pronunciará también sobre el ejercicio de la autoridad parental, la custodia y los alimentos cuando fuere el caso.

RECONOCIMIENTO PROVOCADO

Art. 143.- Presentada la solicitud de reconocimiento provocado, se citará en un plazo de 3 días hábiles al presunto padre a audiencia, para que bajo juramento declare si reconoce o no la paternidad que se le atribuye. Si la reconoce se asentará en acta e inmediatamente se dictará resolución y enviará certificación de la misma al registro correspondiente. **(1)**

Si el citado se negare a declarar o sus respuestas fueren evasivas o se negare a la práctica de la prueba científica, hereditaria, biológica o antropomórfica, se tendrá por reconocida la paternidad sin perjuicio del derecho a impugnarla. **(1)**

Si el citado no compareciere, se le citará por segunda vez, y si aún entonces no lo hiciere también se tendrá por reconocida la paternidad. **(1)**

Siempre que se tenga por reconocida la paternidad, se librárá oficio al registro respectivo, según lo estipula la ley. **(1)**

Si el citado niega la paternidad podrá promoverse el proceso correspondiente. **(1)**

La citación y la comparecencia deberán ser personales. **(1)**

IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD (7)

Art. 143-A.- CUANDO SE EJERCITARE LA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD ESTABLECIDA EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 151 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, EL JUEZ O JUEZA DEBERÁ IMPONER LA RESERVA DEL PROCESO A EFECTO DE SALVAGUARDAR EL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR, A LA PROPIA IMAGEN, Y A LA IDENTIDAD DE LOS INTERVINIENTES, Y ORDENARÁ LAS PRUEBAS CIENTÍFICAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI EXISTE EL VÍNCULO BIOLÓGICO, ASIMISMO IMPONDRÁ LAS CAUCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES PARA GARANTIZAR EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS DERIVADOS DEL POSIBLE EJERCICIO ABUSIVO DE LA FACULTAD OTORGADA EN DICHO ARTÍCULO, EN CUYO CASO, EL PADRE A QUIEN SE LE

HAYA IMPUGNADO SU PATERNIDAD, LA MADRE Y EL HIJO, PODRÁN RECLAMAR INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS MORALES QUE DICHO EJERCICIO ABUSIVO HUBIERE PODIDO CAUSAR, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 3 LITERAL A) Y 21 DE LA LEY DE REPARACIÓN POR DAÑO MORAL. (7)

EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE INVOLUCRADO Y EN ATENCIÓN A SUS CONDICIONES PARTICULARES, AL GRADO DE AUTONOMÍA Y EVOLUCIÓN DE SUS FACULTADES, EL JUEZ O JUEZA DEBERÁ ESCUCHAR SU OPINIÓN PARA IDENTIFICAR ELEMENTOS QUE DEBAN SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA DECISIÓN DEL PROCESO DE IMPUGNACIÓN Y EN SU CASO, ADOPTARÁ MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE CARÁCTER SOCIO FAMILIAR QUE CONTRIBUYAN A SU DESARROLLO Y PROTECCIÓN INTEGRAL. (7)

ORDENARÁ ADEMÁS LOS ESTUDIOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE CONSIDERE PERTINENTES: PARA LAS PARTES INTERVINIENTES. (7)

EN CASO DE SENTENCIA ESTIMATORIA, EL REGISTRADOR DEL ESTADO FAMILIAR, DEBERÁ CANCELAR MEDIANTE ANOTACIÓN MARGINAL LA PARTIDA DE NACIMIENTO ORIGINAL, SIN EXPRESAR EN EL ASIENTO LOS MOTIVOS DE LA CANCELACIÓN, E INSCRIBIR UNA NUEVA, DEBIENDO EFECTUAR EN LA PARTIDA CANCELADA, UNA ANOTACIÓN MARGINAL QUE CONSIGNE LOS DATOS DE LA NUEVA PARTIDA. (7)

SECCIÓN QUINTA

MENORES, INCAPACES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES (2)

CONTENIDO DE LA SENTENCIA

Art. 144.- En los procesos que tengan por objeto la protección del menor, el Juez podrá ordenar las medidas de protección y en la sentencia al reconocer el derecho deberá, cuando fuere el caso, además:

- a) Ordenar que cese la amenaza o vulneración del derecho y el restablecimiento del mismo;
- b) Ordenar al infractor que se abstenga de reincidir en su comportamiento;
- c) Ordenar que el grupo familiar o cualesquiera de sus miembros asistan a programas de orientación y apoyo socio familiar o médicos, si fuere el caso;
- d) Ordenar las medidas necesarias que garanticen el ejercicio del derecho amenazado o vulnerado;

- e) Librar los oficios correspondientes a las instituciones estatales que deben cumplir o hacer cumplir los derechos que se encuentren vulnerados o amenazados, para que a los responsables se les apliquen sanciones de conformidad a las normas respectivas, previniéndoles que deben informar al Juzgado el cumplimiento de dicha orden; y,
- f) Fijar la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios que a favor del menor deba pagar el infractor. La indemnización comprende el resarcimiento del daño moral y material ocasionado.

Lo anterior será aplicable en los procesos que tengan por objeto la protección del incapaz y de las PERSONAS ADULTAS MAYORES, cuando fuere el caso. **(2).**

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR INTERINO

Art. 145.- En los procesos de pérdida o suspensión de la autoridad parental, remoción del guardador o privación de la administración de los bienes del menor o incapaz, el Juez podrá ordenar la suspensión provisional de las facultades de disposición y administración de los bienes y el nombramiento de administrador interino.

CONTROL JURISDICCIONAL

Art. 146.- El Juez al ejercer control jurisdiccional sobre todas las medidas de protección que ordene o ejecute el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor* podrá confirmarlas, modificarlas, revocarlas o hacerlas cesar.

CAPÍTULO VI RECURSOS

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES COMUNES

CLASES

Art. 147.- Contra las resoluciones que se dicten proceden los recursos de revocatoria y apelación, conforme lo previsto en esta Ley.

También procederá el recurso de casación el cual se interpondrá y tramitará conforme a las reglas de la casación civil.

INTERPOSICIÓN

Art. 148.- Los recursos se interpondrán en forma oral en las audiencias o por escrito, en el tiempo y forma establecidos, bajo pena de inadmisibilidad.

Al interponer el recurso deberán indicarse los puntos impugnados de la decisión, la petición en concreto y la resolución que se pretende.

RESOLUCIÓN DEL RECURSO

Art. 149.- La resolución del recurso no requiere de formalidad especial y será breve pero motivada.

SECCIÓN SEGUNDA RECURSO DE REVOCATORIA

PROCEDENCIA

Art. 150.- El recurso de revocatoria procede contra los decretos de sustanciación, las sentencias interlocutorias y la sentencia definitiva en lo accesorio.

Simultáneamente con este recurso podrá interponerse, en forma subsidiaria, el de apelación, cuando proceda.

TRÁMITE

Art. 151.- El recurso deberá interponerse y fundamentarse por escrito, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación respectiva, salvo cuando ésta se hubiere dictado en audiencia o diligencia, en cuyo caso, deberá interponerse en forma oral inmediatamente después del pronunciamiento.

De la petición de revocatoria por escrito se mandará oír por veinticuatro horas a la otra parte y el recurso se resolverá dentro de los tres días siguientes.

Si la revocatoria fuere interpuesta en audiencia o diligencia, se otorgará la palabra a cada parte por un término máximo de quince minutos y se resolverá inmediatamente, aunque la parte contraria no estuviere presente.

RESOLUCIÓN DE LA REVOCATORIA

Art. 152.- La resolución que decide la revocatoria no admite recurso alguno, salvo que contenga puntos no decididos en la inicial, en cuyo caso podrán interponerse los recursos que procedan, únicamente sobre los puntos nuevos.

SECCIÓN TERCERA RECURSO DE APELACIÓN

PROCEDENCIA

Art. 153.- El recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas pronunciadas en primera instancia y contra las siguientes resoluciones:

- a) La que declare inadmisible la demanda, su modificación o ampliación;
- b) La que resuelva sobre la intervención de terceros, de sucesores procesales o rechace la representación de alguna de las partes;
- c) La que deniegue el aplazamiento de una audiencia;
- d) La que decida sobre la acumulación de procesos;
- e) La que decida sobre las excepciones dilatorias;
- f) La que decrete, modifique, sustituya o deje sin efecto medidas cautelares;
- g) La que deniegue la suspensión del proceso;
- h) La que rechace la práctica de una prueba solicitada oportunamente;
- i) La que deniegue la promoción de un incidente y la que lo resuelve;
- j) La que declare la conclusión extraordinaria del proceso; y
- k) La que deniegue la ampliación o reforma de la sentencia definitiva en lo accesorio.

APELANTES

Art. 154.- Podrá interponer el recurso de apelación el apoderado o el representante de la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia y el procurador de familia. También podrá apelar el coadyuvante cuando su interés no se oponga a los intereses de la parte que ayuda.

APELACIÓN DIFERIDA

Art. 155.- Las apelaciones interpuestas durante el curso del proceso, se acumularán para su conocimiento y decisión a la apelación de la sentencia o de las resoluciones interlocutorias que ponen fin al proceso haciendo imposible su continuación.

Se tramitarán inmediatamente a su interposición la apelación de la resolución:

- a) Que decrete, modifique, sustituya o deje sin efecto medidas cautelares; y
- b) Que declare inadmisible la modificación de la demanda o su ampliación; en este caso, el proceso se suspende hasta que se resuelva el recurso.

FORMA Y PLAZO

Art. 156.- El recurso de apelación deberá interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia interlocutoria, salvo cuando ésta se dictare en audiencia o diligencia, en cuyo caso se propondrá en forma verbal e inmediatamente después de pronunciada la resolución y el Juez tendrá por interpuesto el recurso.

Si se trata de la sentencia definitiva la apelación deberá interponerse y fundamentarse por escrito, dentro del plazo de cinco días contados desde la notificación de la sentencia. En el mismo escrito de interposición del recurso se fundamentarán las apelaciones interpuestas en el curso del proceso y toda aquella que no se fundamente se tendrá por no interpuesta.

Cuando se dictare una providencia complementaria o que niegue la complementación, el plazo para apelar de la principal se contará a partir de la notificación de la complementaria. La apelación de la providencia principal comprende la de la resolución complementaria.

Si se hubiere interpuesto el recurso de apelación antes de resolver sobre la complementaria, en la misma resolución se resolverá sobre el complemento y la admisión de la apelación.

APELACIÓN ADHESIVA

Art. 157.- Si una de las partes no apelare dentro del término correspondiente, podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. En este caso, el escrito de adhesión podrá presentarse ante el Juez que la dictó hasta antes del vencimiento del término para la fundamentación del recurso. La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.

MOTIVOS

Art. 158.- Cuando el recurso se interpusiere de la sentencia definitiva deberá fundamentarse en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal.

Si el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente que se subsane la falta, excepto cuando se trate de vicios de la sentencia.

PRUEBAS

Art. 159.- En la apelación habrá recepción de pruebas cuando hubieren sido solicitadas y no admitidas en la audiencia o cuando no se produjeron por algún motivo ajeno a la voluntad del apelante.

En el escrito que fundamente la apelación se ofrecerá la prueba pertinente; si se tratare de prueba documental, se anexará o se indicará el lugar donde se encontrare o el funcionario que lo tuviere para que la cámara respectiva la requiera.

Si se alegare la falsedad de un documento presentado en segunda instancia o se solicitare su verificación, se resolverá sobre la petición previo el trámite incidental regulado en esta Ley; en el primer caso se avisará a la Fiscalía General de la República.

TRÁMITE

Art. 160.- Fundamentado el recurso, el Juez mandará oír a la parte contraria en el plazo de cinco días, para que se manifieste sobre los argumentos del apelante. Concluido dicho término, haya contestado o no el apelado, sin más trámite se remitirán las actuaciones al Tribunal de Segunda Instancia.

El Tribunal de segunda instancia, dentro de los cinco días de recibidas las actuaciones, deberá resolver la admisión del recurso y el asunto planteado, salvo si se ofrecieren pruebas en cuyo caso, se fijará una audiencia para recibirlos dentro de los diez días siguientes de admitido el recurso.

El Tribunal resolverá el recurso dentro de los cinco días siguientes de celebrada la audiencia.

RESOLUCIÓN

Art. 161.- Al resolver el recurso la Cámara podrá confirmar, modificar, revocar o anular la resolución impugnada. Si la Cámara al resolver el recurso anula la resolución impugnada, podrá ordenar la reposición de la audiencia cuando el caso lo requiera o pronunciar directamente la resolución definitiva, según las circunstancias.

Si se ordenare la reposición de la audiencia no podrá intervenir el mismo Juez que conoció de la anterior y se celebrará de conformidad a las normas de la audiencia de sentencia, en un plazo que no exceda de quince días de recibidos los autos, por el Juez designado por la Cámara para realizarla.

DECLARACIÓN DE NULIDAD EN SEGUNDA INSTANCIA

Art. 162.- El Tribunal examinará previamente las nulidades alegadas y sólo en el caso de rechazarlas, se pronunciará sobre los argumentos de la apelación. Si la declaración de nulidad hiciere imposible el aprovechamiento de los actos procesales posteriores, se dispondrá la reanudación del proceso desde el estado en que se hallaba en el momento de causarse la nulidad.

SECCIÓN CUARTA INTERPOSICIÓN DE HECHO

PROCEDENCIA

Art. 163.- Cuando sea indebidamente denegado el recurso de apelación, el apelante podrá presentarse al Tribunal Superior competente pidiendo se le admita el recurso.

TÉRMINO Y FORMA

Art. 164.- El recurrente interpondrá su petición por escrito con expresión de los motivos en que la fundamenta, dentro de tres días contados desde el siguiente al de la notificación de la negativa.

TRÁMITE

Art. 165.- Recibida la solicitud del Tribunal libraré dentro de cinco días oficio al Juez inferior para que remita los autos, salvo que de la simple lectura de la solicitud se deduzca la ilegalidad de la alzada, en cuyo caso el Tribunal declarará sin lugar, por improcedente, la solicitud.

INFORME DEL JUEZ

Art. 166.- Si la negativa de la apelación hubiere sido cierta, el Juez remitirá la causa dentro de tercero día al Tribunal Superior; y si fuere falsa bastará que lo informe así.

ADMISIÓN POR LA CÁMARA

Art. 167.- Introducido el proceso en el Tribunal Superior, lo tomaré en consideración dentro de cinco días y si juzgare haber sido denegada indebidamente la apelación, la admitirá, ordenando que el proceso pase a la secretaria, que se emplace al apelado, para que concurra dentro del término de Ley a estar a derecho, y que el apelante exprese agravios.

IMPROCEDENCIA

Art. 168.- Si el Tribunal estimare que la apelación es improcedente, declarará sin lugar la petición y ordenará que los autos se devuelvan al Juez para que continúe la tramitación del proceso.

EFFECTOS DE LA SOLICITUD

Art. 169.- La solicitud a que se refiere el Art. 164 no suspende la ejecución de la sentencia ni el procedimiento, mientras no se pidan los autos por el Tribunal Superior.

CAPÍTULO VII EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

EJECUCIÓN

Art. 170.- La sentencia se ejecutará por el Juez que conoció en primera instancia sin formación de expediente separado.

EJECUCIÓN INMEDIATA O A PLAZO

Art. 171.- Deberá ejecutarse el cumplimiento de la sentencia a partir de la fecha en que ésta quedó ejecutoriada, salvo que se hubiere fijado algún plazo para su cumplimiento.

REGLAS COMUNES

Art. 172.- Con la sola petición de la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia, el Juez dictará el embargo de los bienes del ejecutado y se procederá de conformidad con las normas establecidas para el juicio ejecutivo, omitiéndose lo relativo al término de pruebas.

Si la sentencia condenada al pago de cantidad líquida e ilíquida, podrá procederse a hacer efectiva la primera sin esperar a que se liquide la segunda.

EJECUCIÓN POR SUMA ILÍQUIDA

Art. 173.- Si la sentencia condenare al pago de cantidad ilíquida, la parte a cuyo favor se pronunció promoverá la ejecución, y para tal efecto presentará planilla de liquidación, de la cual se oírán por tres días a la parte condenada.

Expresada la conformidad por el deudor o transcurrido el término sin que hubiere hecho uso de su derecho, se procederá a la ejecución por la suma que resultare, en la forma prescrita para la ejecución por suma líquida.

Si la parte condenada expresare disconformidad, el Tribunal procederá de acuerdo a las reglas establecidas para los incidentes, cuando fuere necesario.

En todo caso, si la parte a cuyo favor se pronunció la sentencia no promoviere ejecución en el plazo de quince días, contados a partir de la fecha en que la sentencia quedó firme, el obligado a pagar podrá presentar la planilla de liquidación y se procederá conforme a lo previsto en este Artículo.

EJECUCIÓN DE CONDUCTA ESPECÍFICA

Art. 174.- Si la sentencia condena a realizar u observar una conducta determinada, el Tribunal podrá señalar al obligado un plazo razonable para su cumplimiento, según las circunstancias del hecho y de las personas.

Si transcurrido el plazo el obligado no cumpliere, el Tribunal adoptará las medidas necesarias para evitar la frustración de la orden judicial; al efecto, podrá recurrir al auxilio del organismo de seguridad pública, imponer multas o informar a la autoridad competente para el inicio del proceso penal.

ADECUACIÓN DE MODALIDADES

Art. 175.- A petición de parte el Tribunal establecerá las modalidades de ejecución o adecuará las que tenga la sentencia, dentro de los límites de ésta.

El Tribunal podrá fijar una audiencia para que comparezcan las partes, con el objeto de establecer la forma más rápida y eficaz de dar cumplimiento a la sentencia, observándose lo previsto para los incidentes.

EJECUCIÓN DE OTRAS DECISIONES JUDICIALES

Art. 176.- Para la ejecución de cualquier providencia dictada se aplicará lo dispuesto en el presente Capítulo.

EJECUCIÓN DE SENTENCIA SOBRE EL CUIDADO PERSONAL Y CONVIVENCIA

Art. 177.- Cuando la sentencia confiare el cuidado personal de un menor a uno de los padres u otra persona determinada, el Juez ordenará día y hora para hacer efectiva la entrega del menor, para lo cual citará a la persona con quien convive éste, salvo que estuviere bajo el cuidado de la persona a quien se le confió.

Si el citado no compareciere, el Juez solicitará al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor* la localización del menor para hacer efectiva la entrega. En todo caso se respetará la integridad física y moral del menor.

De igual manera se procederá cuando se resuelva sobre el deber de convivencia de un menor, inclusive cuando éste se negare a cumplir la sentencia.

FRUTOS, INTERESES, DAÑOS Y PERJUICIOS

Art. 178.- Cuando la sentencia condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios se fijará su importe en cantidad líquida o se establecerán las bases para su liquidación.

TÍTULO V DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ASUNTOS SUJETOS A SU TRÁMITE

Art. 179.- Se seguirán por el trámite de jurisdicción voluntaria todos los asuntos que no presenten conflicto entre partes.

SOLICITUD

Art. 180.- La solicitud deberá reunir los requisitos previstos para la demanda, en lo que fuere aplicable, excepto lo referente al demandado.

ADMISIÓN Y NOTIFICACIÓN

Art. 181.- Para la admisión de la solicitud se aplicarán las reglas de la admisión de la demanda.

En el auto de admisión de la solicitud el Juez ordenará la notificación al procurador de familia, las citaciones y publicaciones a que hubiere lugar; se pronunciará sobre las pruebas solicitadas y ordenará de oficio las que considere necesarias y fijará fecha para que se celebre la audiencia de sentencia dentro de los quince días siguientes.

AUDIENCIA Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Art. 182.- Para la audiencia de sentencia y su ejecución se aplicarán las normas del proceso de familia.

CONVERSIÓN

Art. 183.- Cuando en las diligencias de jurisdicción voluntaria se presentare conflicto, el Juez adecuará el trámite al del proceso de familia.

CAPÍTULO II DISPOSICIONES ESPECIALES

SECCIÓN PRIMERA ESTADO FAMILIAR

REGLAS ESPECIALES

Art. 184.- A la solicitud para establecer el estado familiar en forma subsidiaria deberá anexarse constancia del registro del estado familiar sobre la inexistencia de la inscripción o la destrucción del registro respectivo, sin perjuicio del procedimiento establecido en leyes especiales sobre materia registral.

Igual constancia se exigirá para establecer supletoriamente el fallecimiento de alguna persona.

Al quedar ejecutoriada la sentencia se librará oficio para la inscripción del estado familiar a la oficina correspondiente.

SECCIÓN SEGUNDA TUTELA

INCAPACIDAD DEL DEMENTE Y DEL SORDO

Art. 185.- El Juez, desde la admisión de la solicitud, podrá suspender provisionalmente la administración de los bienes al presunto incapaz y le nombrará un tutor interino en los casos en que sea necesario.

La providencia que suspende la administración de los bienes deberá notificarse por edicto en un diario de amplia circulación nacional. Dicho edicto deberá limitarse a expresar el nombre, los datos de identificación de la persona y la suspensión de la libre administración de sus bienes.

El Juez en la sentencia ordenará la inscripción de la misma en el registro respectivo; nombrará el tutor y cesarán las funciones del interino, si lo hubiere, quien rendirá cuentas al nuevo tutor, si el mismo no lo fuere.

OBLIGACIÓN AL TUTOR PARA CONSTITUIR HIPOTECA

Art. 186.- Si transcurridos diez días de la aceptación del cargo, el tutor no hubiere otorgado la garantía de administración exigida en el Código de Familia, el Juez que lo nombró le prevendrá a solicitud de parte o de oficio que la rinda, so pena de removerlo del cargo.

Corresponden al pupilo los gastos causados por la constitución de la garantía.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y RESTITUCIÓN DE BIENES

Art. 187.- Si el tutor no rindiere cuentas o no restituyere los bienes en los términos establecidos en el Código de Familia, el Juez de Oficio o a petición de parte le ordenará que lo haga en el término que le señale en la resolución, el que no podrá exceder de quince días.

Si las cuentas son aceptadas por las partes y el procurador de familia, el Juez las aprobará y ordenará el pago del saldo que resulte a favor o en contra del tutor.

Si las cuentas fueren objetadas por cualesquiera de las partes o por el procurador de familia, el Juez resolverá las objeciones conjuntamente, mediante incidente.

SECCIÓN TERCERA

AUTORIZACIÓN PARA VENDER O CONSTITUIR GRAVAMEN

AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Art. 188.- Cuando se conceda autorización judicial a los representantes legales o al administrador de bienes, de conformidad a lo establecido en el Código de Familia, se fijará en la sentencia el término dentro del cual deba utilizarse la autorización. Dicho término no podrá exceder de seis meses.

Cuando la autorización sea para permutar un inmueble por otro, se ordenará previamente el avalúo de los mismos.

AUTORIZACIÓN PARA VENDER

Art. 189.- Cuando el Juez autorice la venta de bienes del pupilo o del hijo bajo autoridad parental, ordenará que se realice en pública subasta, previo avalúo. La base para el remate de los bienes será la estipulada en el Código de Familia.

AUTORIZACIÓN PARA GRAVAR

Art 190.- Si se tratare de autorización para constituir gravamen sobre bienes del hijo bajo autoridad parental o del pupilo, el Juez dará al interesado certificación del decreto de autorización para el otorgamiento de la escritura correspondiente.

SECCIÓN CUARTA LA ADOPCIÓN

JUEZ COMPETENTE

Art. 191.- El Juez de Familia del lugar de residencia habitual del adoptado será el competente para resolver la adopción.

ANEXOS A LA SOLICITUD DE ADOPCIÓN

Art. 192.- A LA SOLICITUD DE ADOPCIÓN DE MENORES DEBERÁ ANEXARSE LA CERTIFICACIÓN QUE AUTORICE LA ADOPCIÓN EXTENDIDA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. TAL AUTORIZACIÓN DEBERÁ SER RESUELTA EN UN PLAZO NO MAYOR DE SESENTA DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE SOLICITADA, Y ADEMÁS, SEGÚN EL CASO SE AGREGARÁN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: **(3)**

- 1) CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE PROTECCIÓN AL MENOR* EN LA QUE CONSTE QUE EL MENOR ES APTO PARA SER ADOPTADO; **(3)**

ESTA CERTIFICACIÓN DEBERÁ SER EMITIDA EN UN PLAZO NO MAYOR DE CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE PRESENTADA LA SOLICITUD PARA LA MISMA; **(3)**

- 2) CERTIFICACIÓN DEL ACTA EN QUE CONSTE EL CONSENTIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN, OTORGADO POR LOS PADRES BAJO CUYA AUTORIDAD PARENTAL SE ENCONTRARE EL MENOR, O EL ASENTIMIENTO DEL OTRO CÓNYUGE, CUANDO SE TRATE DE LA ADOPCIÓN INDIVIDUAL; **(3)**
- 3) CERTIFICACIONES DE LAS PARTIDAS DE NACIMIENTO DEL ADOPTADO Y ADOPTANTE; **(3)**

- 4) CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS DE DEFUNCIÓN DE LOS PADRES, CUANDO SE TRATE DE MENORES HUÉRFANOS; **(3)**
- 5) CERTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE DECLARE LA PÉRDIDA DE LA AUTORIDAD PARENTAL, CUANDO SE TRATE DE MENOR ABANDONADO; **(3)**
- 6) CERTIFICACIÓN DEL DICTAMEN SOBRE LA IDONEIDAD DE LOS ADOPTANTES; **(3)**
- 7) CERTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE EMITA EL COMITÉ QUE ASIGNE AL MENOR, A LA FAMILIA ADOPTANTE; **(3)**
- 8) CONSTANCIA MÉDICA RECIENTE SOBRE LA SALUD DEL ADOPTANTE Y DEL ADOPTADO; **(3)**
- 9) CERTIFICACIÓN DE DICTÁMENES DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS POR LOS ESPECIALISTAS; **(3)**
- 10) INVENTARIO PRIVADO DE LOS BIENES DEL ADOPTADO, SI LOS TUVIERE; Y **(3)**
- 11) CERTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN JUDICIAL DE LAS CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TUTOR, EN SU CASO. **(3)**

SI EL SOLICITANTE HUBIERE ACOMPAÑADO ALGUNO DE LOS ANTERIORES DOCUMENTOS EN LAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS, SE LE DEVOLVERÁN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE ARTÍCULO. **(3)**

REQUISITOS ADICIONALES

Art. 193.- Si los adoptantes son extranjeros que residen fuera del país, deberán presentar además, los siguientes documentos:

- a) La certificación expedida por la Institución pública o estatal de protección de la infancia o de la familia, oficialmente autorizada, donde conste que los adoptantes reúnen los requisitos exigidos para adoptar por la Ley de su domicilio y el compromiso de efectuar el seguimiento de la situación del menor en el país de residencia de los adoptantes; y
- b) Certificación de la Calificación de los estudios técnicos realizados por especialistas en el extranjero, emitida de común acuerdo por la Procuraduría General de la República y el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor*.

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE PROTECCIÓN AL MENOR*, DEBERÁN DENTRO DEL PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE PRESENTADA LA SOLICITUD DE ADOPCIÓN, RESOLVER SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS MENCIONADOS EN EL LITERAL B) DE ESTE ARTÍCULO. **(3)**

EN CASO DE EXCEPCIONAL COMPLEJIDAD O CUANDO EL JUEZ NECESITARE COMPLETAR O VERIFICAR INFORMACIÓN, PODRÁ PREVENIR A LAS PARTES QUE PRESENTEN O ACLAREN LO PERTINENTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 8 DÍAS HÁBILES. (3)

REMISIÓN DE DILIGENCIAS

Art. 193-A.- TRANSCURRIDOS LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR, Y NO HABIÉNDOSE CUMPLIDO POR LA AUTORIDAD RESPECTIVA COMO SE SEÑALA EN ELLOS, EL JUEZ DE FAMILIA COMPETENTE, A PETICIÓN, SOLICITARÁ A QUIEN CORRESPONDA SE LE REMITAN LAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE ADOPCIÓN PARA CONOCER DE ÉSTAS HASTA DICTAR SENTENCIA. EL JUEZ SOLICITARÁ A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE EL EXPEDIENTE DE ADOPCIÓN EN UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA SOLICITUD, Y LA AUTORIDAD REQUERIDA LO REMITIRÁ EN IGUAL TÉRMINO EN EL ESTADO EN QUE SE ENCONTRARE. (3)

CADUCIDAD

Art. 194.- La solicitud deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes de la fecha de entrega de la certificación de la autorización de adopción de la Procuraduría General de la República.

CONSENTIMIENTO

Art. 195.- El consentimiento para la adopción y el asentimiento del cónyuge cuando fuere necesario, deberán ser ratificados en audiencia. No obstante el consentimiento y cuando éste debe ser otorgado únicamente por la madre, para evitar fraude de Ley, el Juez a su juicio prudencial, podrá ordenar las pruebas científicas correspondientes. La negativa de la presunta madre, será considerada, como prueba de la inexistencia del parentesco biológico. Todo sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

El menor que hubiere cumplido doce años de edad, deberá manifestar su conformidad en la adopción. Cuando se tratare de menores que no hubieren cumplido dicha edad, el Juez dialogará con él su caso.

COMPARECENCIA PERSONAL

Art. 196.- Los adoptantes deberán comparecer personalmente a la audiencia. También deberán comparecer en esta forma a una entrevista con los especialistas adscritos al Tribunal si el Juez lo considera conveniente.

FALLECIMIENTO

Art. 197.- Si durante las diligencias de adopción falleciera uno de los cónyuges, el Juez podrá decretarla en relación al cónyuge sobreviviente si esto fuere en beneficio del interés superior del adoptado.

ADOPCIÓN DEL HIJO DE UNO DE LOS CÓNYUGES

Art. 198.- La solicitud de adopción del hijo de uno de los cónyuges no requiere del trámite administrativo y será presentada por ambos cónyuges, anexando, según el caso:

- a) Acta notarial en la que conste que el otro padre o madre biológico del adoptado ha consentido, si aquel o aquella tuviesen la autoridad parental del menor;
- b) La certificación de la sentencia que declare la pérdida de la autoridad parental del padre o madre biológico; y
- c) La certificación de la partida de defunción del padre o madre biológicos.

ADOPCIÓN DE UN MENOR DETERMINADO

Art. 199.- La solicitud de adopción de un menor determinado deberá expresar el tiempo de convivencia con el adoptante, lo cual deberá probarse en la audiencia.

En este caso el menor continuará conviviendo con el solicitante.

ADOPCIÓN DE MAYORES

Art. 200.- La solicitud de adopción de mayores será presentada por adoptante y adoptado; y no se requerirá el trámite administrativo.

CONTENIDO DE LA SENTENCIA

Art. 201.- La sentencia deberá contener los datos necesarios para la inscripción de la partida de nacimiento del adoptado en el Registro del Estado Familiar.

ENTREGA DEL ADOPTADO

Art. 202.- Ejecutoriada la resolución que decreta la adopción, el adoptante comparecerá personalmente a la audiencia que señale el Juez para la entrega del adoptado. En ella el Juez le explicará los derechos y obligaciones que como adoptante le corresponden.

En la adopción conjunta bastará que uno de los cónyuges comparezca a recibir al menor.

INSCRIPCIÓN DE LA ADOPCIÓN

Art. 203.- Ejecutoriada la resolución, el Juez enviará copia certificada al funcionario del Registro del Estado Familiar de la residencia habitual del adoptado, para que asiente una nueva partida de nacimiento en el libro correspondiente.

El texto de la nueva partida será el ordinariamente utilizado y en ella no se hará mención a los vínculos del adoptado con sus padres consanguíneos.

Asimismo, remitirá copia al Registro del Estado Familiar donde se encuentra la partida original de nacimiento del adoptado, para su cancelación y marginación.

En la cancelación respectiva no se expresarán los motivos de la misma, pero se llevará un registro reservado en el que conste dichos motivos. De la partida cancelada y de los asientos del registro reservado, no se expedirán certificaciones, salvo mandato judicial.

SECCIÓN QUINTA RELACIONES PERSONALES

DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

Art. 204.- El poder para el divorcio por mutuo consentimiento podrá otorgarse en forma conjunta o individual.

A la solicitud se anexará el convenio a que se refiere el Código de Familia. El Juez en la admisión de ésta puntualizará los aspectos del convenio que deban ser subsanados, si fuere el caso. Si las partes no los subsanaren el Juez hará las modificaciones procedentes en la sentencia que decreta el divorcio.

Igual trámite se aplicará si ejecutoriada la sentencia de divorcio se alteraren sustancialmente las circunstancias de las cuestiones accesorias bajo las cuales se aprobó el convenio.

Cuando se trate de divorcio por mutuo consentimiento de un menor de edad, éste deberá suscribir el convenio y podrá otorgar personalmente el poder, salvo cuando existiere régimen de comunidad diferida o de participación en las ganancias, en cuyo caso deberá hacerlo su representante legal.

CONVIVENCIA

Art. 205.- Si la solicitud de la declaratoria de convivencia para ejercer un derecho reconocido en el Código de Familia se presentare en forma conjunta por los convivientes, el Juez la declarará y autorizará el ejercicio del derecho si reúne los requisitos legales.

TÍTULO VI

JUECES DE PAZ

COMPETENCIA

Art. 206.- LOS JUECES DE PAZ CONOCERÁN EN MATERIA DE FAMILIA DE LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS: **(4) (5)**

- a) DE AUDIENCIAS CONCILIATORIAS SOBRE: **(4) (5)**
 - 1. EL CUIDADO PERSONAL Y EL RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN Y TRATO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. **(4) (5)**
 - 2. LA FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA. **(4) (5)**
 - 3. LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO. **(4) (5)**
- b) DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES, ESPECIALMENTE LAS DE PROTECCIÓN RESPECTO DE CUALQUIERA DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA. **(4) (5)**
- c) LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS CONCILIATORIOS Y RESOLUCIONES SOBRE LAS MATERIAS SEÑALADAS. **(4) (5)**
- d) LA PRÁCTICA DE CUALQUIERA DILIGENCIA QUE LES ENCOMIENDEN LOS TRIBUNALES DE FAMILIA. **(4) (5)**

TRÁMITE.

Art. 207.- Solicitada la conciliación, el Juez de Paz, fijará lugar, fecha y hora, para la celebración de la audiencia, dentro de los tres días siguientes, contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud en la Secretaría del Juzgado y citará a las partes, informándoles el objeto de la misma.

Si fuere urgente, ordenará inmediatamente cualesquiera de las medidas de protección establecidas en ésta y otras leyes, en cuyo caso, el Juez de Oficio en la siguiente audiencia remitirá al Juez de Familia las diligencias con informe de las medidas adoptadas.

Si se lograre el acuerdo conciliatorio se dejará constancia en acta.

AUXILIO A LOS JUECES DE PAZ

Art. 208.- Los Jueces de Familia respectivos auxiliarán a los Jueces de Paz con personal especializado, en las diligencias a que se refiere la presente Ley.

CONCILIACIÓN SOBRE ALIMENTOS

Art. 209.- Si se trata de conciliación sobre alimentos, el Juez de Paz podrá dar aviso a las autoridades de migración para que restrinja al obligado la salida del país hasta mientras no demuestre haber caucionado ante el Juez competente la obligación que contrajo.

FALTA DE ACUERDO EN LA CONCILIACIÓN

Art. 210.- Si en la conciliación no se lograre acuerdo, las medidas que se tomen se mantendrán dentro de los diez días siguientes a la fecha de la audiencia, plazo en que deberá iniciarse el proceso y se continuarán durante el curso de éste, si no son modificadas por el Juez de Familia.

En dicho proceso se excluirá la fase conciliatoria, salvo petición de parte.

TÍTULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

PROHIBICIÓN DE FUERO

Art. 211.- En materia de familia ninguna persona gozará de fuero especial en razón de su cargo.

RESPONSABILIDAD

Art. 212.- Los Jueces de Familia, de Paz y especialistas responderán penal, civil y disciplinariamente por sus actuaciones, si a ello hubiere lugar.

SANCIONES

Art. 213.- Siempre que el Juez deba imponer una sanción de conformidad a lo dispuesto en el Código de Familia, procederá de acuerdo a la Ley de Procedimientos para la Imposición del Arresto o Multa Administrativos**.

COLABORACIÓN Y AUXILIO

Art. 214.- Para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, toda autoridad o funcionario, está obligado a prestar colaboración y auxilio, a los Jueces de Familia y de Paz cuando éstos se lo requieran.

RESERVA DE LOS PROCESOS DE FAMILIA

Art. 215.- En las publicaciones de la jurisprudencia de los tribunales de familia no se hará mención de los nombres de las partes materiales ni de circunstancias que permitan su identificación.

TÍTULO VIII DISPOSICIONES FINALES

PROCESOS Y DILIGENCIAS EN TRÁMITE

Art. 216.- Los procesos y diligencias, promovidos antes de la vigencia de la presente Ley, se continuarán tramitándose hasta su conclusión, conforme a las leyes con que fueron iniciados.

ADOPCIONES YA CONSTITUIDAS

Art. 217.- Las adopciones constituidas con anterioridad a la vigencia del Código de Familia, podrán equipararse en sus efectos a lo contemplado en éste, sin más trámite ni requisitos que la presentación de la solicitud de los interesados, acompañada de la certificación de la partida respectiva.

APLICACIÓN SUPLETORIA

Art. 218.- En todo lo que no estuviere expresamente regulado en la presente Ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de las leyes especiales referentes a la familia y las del Código de Procedimientos Civiles***, siempre que no se opongan a la naturaleza y finalidad de esta Ley.

DEROGATORIA

Art. 219.- Deróganse las siguientes disposiciones:

- a) El inciso primero del Artículo 402 del Código de Familia;
- b) Las contenidas en el Capítulo X del Título II del Libro Segundo del Código de Procedimientos Civiles;
- c) Las contenidas en el Capítulo I, V, VI, VII, VIII, IX,, IX-A, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII y XLI, del Título VII, del Libro Segundo del Código de Procedimientos Civiles;
- d) El Art. 8 de la Ley de Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias;
- e) Los Incisos 2º y 3º del Art. 53 de la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor; y
- f) Cualesquiera otras disposiciones que se opongan a la presente Ley.

VIGENCIA

Art. 220.- El presente Decreto entrará en vigencia el uno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, previa publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los catorce días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS,
PRESIDENTA.

ANA GUADALUPE MARTÍNEZ MENÉNDEZ,
VICEPRESIDENTA.

ALFONSO ARÍSTIDES ALVARENGA,
VICEPRESIDENTE.

JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
VICEPRESIDENTE.

JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
VICEPRESIDENTE.

JOSÉ EDUARDO SANCHO CASTAÑEDA,
SECRETARIO.

GUSTAVO ROGELIO SALINAS OLMEDO,
SECRETARIO.

CARMEN ELENA CALDERÓN DE ESCALÓN,
SECRETARIA.

WALTER RENE ARAUJO MORALES,
SECRETARIO.

RENÉ MARIO FIGUEROA FIGUEROA,
SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinte días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

PUBLIQUESE,

ARMANDO CALDERON SOL,
Presidente de la República.

RUBEN ANTONIO MEJÍA PEÑA,
Ministro de Justicia.

REFORMAS:

- (1) Decreto Legislativo No. 318 de fecha 04 de junio de 1998, publicado en el Diario Oficial No. 121, Tomo 340 de fecha 01 de julio de 1998.
- (2) Decreto Legislativo No. 811 de fecha 06 de enero de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 31, Tomo 346 de fecha 14 de febrero de 2000. NOTA:

INICIO DE NOTA:

POR D.L. N° 811, del 6 de enero de 2000, publicado en el D.O. N° 31, T. 346, del 14 de febrero de 2000, EN SU ART. 1, DECRETA QUE SE SUSTITUYA LA PALABRA “TERCERA EDAD” POR “ADULTO MAYOR” E IGUALMENTE EN TODO ACTO OFICIAL SE PRONUNCIARA “ADULTO MAYOR” EN REFERENCIA A LAS PERSONAS QUE SEAN MAYORES DE 60 AÑOS EN SU EDAD, POR LO QUE SE TRANSCRIBE TEXTUALMENTE DICHO ARTICULO, ASI: Art. 1.- Sustitúyase la expresión “tercera edad” en todas las leyes de la República que la contengan, por la de “adulto mayor”. Igualmente, en todo acto oficial se utilizará esta última expresión, cuando se haga referencia a las personas mayores de sesenta años. **FIN DE NOTA.**

- (3) Decreto Legislativo No. 61 de fecha 13 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 152, Tomo 348 de fecha 17 de agosto de 2000.
- (4) Decreto Legislativo No. 213 de fecha 25 de noviembre del 2003, publicado en el Diario Oficial No. 4, Tomo 362 de fecha 08 de enero del 2004.
- (5) Decreto Legislativo No. 767 de fecha 23 de junio de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 136, Tomo 392 de fecha 20 de julio de 2011.
- (6) Decreto Legislativo No. 433 de fecha 25 de julio de 2013, publicado en el Diario Oficial No. 149, Tomo 400 de fecha 16 de agosto de 2013.
- (7) Decreto Legislativo No. 592 de fecha 07 de diciembre de 2022, publicado en el Diario Oficial No. 241, Tomo 437 de fecha 21 de diciembre de 2022.

Se hace mención que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, de Justicia, mediante sentencia No. 190-2016, de fecha 17 de enero de 2022, declaró inconstitucional de un modo general y obligatorio el Art. 151 del Código de Familia. Asimismo, ordenó a la Asamblea Legislativa reformar dicha disposición legal en el sentido, de adicionar la legitimación procesal activa de la persona que afirme ser el padre biológico y señalar las medidas para que su reconocimiento no sea objeto de abusos por parte de las personas legitimadas. Con el propósito de armonizar la legislación, se incorpora el artículo 143-A.

NOTAS (*)

INICIO DE NOTA: Se relaciona al Decreto Legislativo No. 431, de fecha 22 de junio de 2022, Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, publicado en Diario Oficial No. 117, Tomo No. 435, el 22 de junio de 2022, se transcribe literalmente:

Art. 289.- De la disolución de ISNA y CONNA

Decláranse disueltos el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia; cuyas funciones serán asumidas por el CONAPINA, creado en la presente Ley.

El CONAPINA sucede a partir de la vigencia de esta Ley en las funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y obligaciones que corresponden al ISNA y CONNA; por tanto, en todas Leyes, Decretos, convenios, contratos y otros instrumentos y documentos en los que se haga referencia al ISNA y CONNA se entenderá que se refiere al CONAPINA. **FIN DE NOTA**

NOTAS ()**

INICIO DE NOTA: Se relaciona al Decreto Legislativo No. 856, de fecha 15 de diciembre de 2017, Ley de Procedimientos Administrativos, publicado en el Diario Oficial No. 30, Tomo 418, el 13 de febrero de 2018, en su Art. 163 Inc. 3° literal a se deroga expresamente la Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa Administrativa. **FIN DE NOTA.**

NOTAS (*)**

INICIO DE NOTA: Se relaciona al Decreto Legislativo No. 712, de fecha 18 de septiembre de 2008, Código Procesal Civil y Mercantil, publicado en el Diario Oficial No. 224, Tomo 381, el 27 de noviembre de 2008, en su Art. 170 Inc. 1° se deroga el Código de Procedimientos Civiles. **FIN DE NOTA.**

Código de Familia y Ley Procesal de Familia publicada digitalmente por el Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial "Dr. Arturo Zeledón Castrillo", se terminó su diseño y diagramación en el mes de julio de 2025, en Imagen Gráfica, El Salvador S.A. de C.V., Col. Manzano, Calle Alberto Sánchez No. 1015, Barrio San Jacinto, El Salvador, Centro América.



EXCELENCIA • TRANSPARENCIA • INNOVACIÓN



CNJ El Salvador